

McAfee & Taft A Professional Corporation

**Informe a la Arquidiócesis de Oklahoma City:
Investigación independiente sobre alegatos de abuso sexual infantil
1960-2018**

Publicado el 3 de octubre de 2019

ÍNDICE

RESUMEN DEL INFORME	1
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN	3
ESTÁNDAR DE PRUEBA USADO PARA EL INFORME	4
SACERDOTES CON ALEGATOS FUNDADOS DE ABUSO SEXUAL A UN MENOR DE EDAD	6
Padre Thomas Behnke, O.C.D.	6
Padre David Armstead Cowden.....	7
Padre Stephen Cude	9
Padre Mathias Faue.....	13
David B. Imming	15
Padre Francis Albert Mantica	21
Padre James Mickus.....	23
Padre Rocco Perone	34
Padre Edward Prather	35
James Francis Rapp.....	42
Benjamin Zoeller	48
RESULTADOS DE LOS INFORMES	53
CONCLUSIONES	57
I. La Arquidiócesis de Oklahoma City ejerce un control inadecuado sobre sus propios registros	57
A. La Arquidiócesis de Oklahoma City no cuenta con una política de retención de registros por escrito	57
B. La Arquidiócesis de Oklahoma City carece de políticas o controles para conservar los mensajes de correo electrónico y archivos electrónicos relevantes	57
C. Detectamos casos en los que la Arquidiócesis de Oklahoma City llevó los registros de manera descentralizada, desorganizada y dispersa.....	59
D. Identificamos algunos casos en los que la Arquidiócesis de Oklahoma City intentó destruir pruebas relacionadas con imputaciones de abuso sexual de menores o no las registró.....	61
II. En el pasado, la Arquidiócesis de Oklahoma City no investigó sistemática ni adecuadamente las imputaciones de abuso sexual de menores	63

A.	Concluimos que las investigaciones de la Arquidiócesis de Oklahoma City se realizaron de manera no sistemática.....	63
B.	La Arquidiócesis no tiene experiencia para realizar sus propias investigaciones en cuanto a las imputaciones de abuso sexual a menores.	65
III.	En algunos casos, la Arquidiócesis de Oklahoma City cometió el error al tomar medidas adecuadas cuando se le presentaron imputaciones creíbles contra sus sacerdotes por haber cometido abusos a menores.....	66
A.	La Arquidiócesis de Oklahoma City evitó tomar acciones inmediatas a pesar de las pruebas creíbles y las advertencias de las señales del abuso sexual a menores.	68
B.	La Arquidiócesis no logró controlar a los sacerdotes ubicados en el ministerio restringido	69
IV.	La Arquidiócesis no logró examinar de manera correcta a los sacerdotes transferidos a la Arquidiócesis	70
V.	En algunas instancias, la Arquidiócesis de Oklahoma City no cumplió con sus propias políticas y procedimientos en relación con las acusaciones de conducta sexual inapropiada	72
A.	La Arquidiócesis de Oklahoma City adoptó estrategias legales que son inconsistentes con sus obligaciones hacia las presuntas víctimas y de no interferir con las investigaciones en curso de acusaciones de abuso sexual....	74
B.	La Arquidiócesis de Oklahoma City no le solicitó a un sacerdote que se sometiera a una «evaluación psicológica exhaustiva» luego de recibir pruebas convincentes de que el sacerdote había abusado de un menor.	75
C.	La Arquidiócesis de Oklahoma City no brindó pruebas materiales a la Junta de revisión, como lo establecen sus políticas y procedimientos.....	76
D.	La Arquidiócesis permitió que un sacerdote externo que se declaró culpable y estuvo en libertad condicional por un «delito descalificador» que implicaba una conducta sexual inapropiada, fuera transferido a la Arquidiócesis de Oklahoma City.....	77
	RECOMENDACIONES A LA ARQUIDIÓCESIS DE OKLAHOMA CITY	77
1.	Adquirir un sistema integrado de gestión de registros.....	77
2.	Adoptar una política de retención de registros escritos.	78

3.	Crear y mantener archivos del personal de todos los sacerdotes que sirven dentro del territorio de la Arquidiócesis de Oklahoma City, incluidos los sacerdotes de órdenes religioso	78
4.	Remitir todas las imputaciones de abuso sexual a menores, pasadas y presentes, a las autoridades pertinentes y al Departamento de Servicios de la Salud de Oklahoma.....	78
5.	Contratar a un investigador independiente calificado para que realice las investigaciones de la Arquidiócesis de Oklahoma City sobre imputaciones de abuso sexual de menores.....	79
6.	Toda prueba desarrollada durante una investigación de imputaciones de abuso sexual de menores debe presentarse a la Junta de revisión antes de que esta haga una recomendación o brinde sus conclusiones al arzobispo.	79
7.	La Arquidiócesis de Oklahoma City debe aclarar en sus políticas y procedimientos si investigará las imputaciones de abuso sexual de menores cuando la presunta víctima ahora es un adulto y el sacerdote acusado ya ha fallecido.....	79
8.	Realizar capacitaciones sobre todas las políticas y procedimientos nuevos y actualizados relacionados con el abuso sexual de menores.....	80
9.	Comunicar y publicitar todas las acciones relacionadas con la jubilación, suspensión, expulsión o laicización de sacerdotes, si alguno de los fundamentos para tal jubilación, suspensión, expulsión o laicización está relacionado con imputaciones de abuso sexual de menores. Disciplinar al personal de la Arquidiócesis que retiene información sobre abuso sexual infantil.	80
10.	Disciplinar al personal de la Arquidiócesis que retiene información sobre el abuso sexual de menores.	81
11.	Mejorar las políticas y los procedimientos para examinar a los sacerdotes externos que solicitan asignaciones en la Arquidiócesis de Oklahoma City.....	82
	APÉNDICE.....	83

RESUMEN DEL INFORME

McAfee & Taft A Professional Corporation fue contratado por la Arquidiócesis de Oklahoma City (la «Arquidiócesis») para llevar a cabo una investigación independiente y revisar el manejo en el pasado por parte de la Arquidiócesis de alegatos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes. A solicitud de la Arquidiócesis, preparamos y emitimos este Informe, que incluye nuestros hallazgos, una discusión de casos donde creemos que los alegatos de abuso sexual infantil están fundados, un análisis de cómo la Arquidiócesis manejó los alegatos a través de los años y nuestras recomendaciones acerca de cómo la Arquidiócesis puede manejar mejor los alegatos de abuso sexual infantil en el futuro.

La Arquidiócesis nos ordenó investigar de manera independiente cualquier asunto que consideráramos que requería investigación. Como parte de nuestra investigación independiente, revisamos una gran cantidad de datos, muchos registros y entrevistamos a varios testigos. La Arquidiócesis no se negó a ninguna de nuestras solicitudes de revisar registros en su posesión. La Arquidiócesis no estaba obligada a que se realizara investigación alguna y podría haber realizado una revisión de sus propios archivos y hacer sus propios hallazgos sin la participación de una firma de abogados externa. Al contratar a una firma de abogados para realizar una investigación independiente y un consiguiente informe público, la Arquidiócesis se sometió a críticas y revisiones independientes de sus acciones y omisiones pasadas.

Actualmente hemos identificado y suministrado detalles en nuestro Informe relativos a 11 sacerdotes que trabajaron en la Arquidiócesis de 1960 a 2018 de quienes tenemos alegatos fundados de abuso sexual infantil. Hay otros archivos que todavía están siendo investigados y a medida que esas investigaciones concluyan, se emitirán los nombres de los demás sacerdotes con alegatos fundados de abuso sexual infantil. La mayoría de los sacerdotes que todavía están siendo investigados tienen relación con alegatos presentados a la Arquidiócesis luego de que esta anunciara la investigación de nuestra firma en agosto de 2018, pese a que algunos se tratan de archivos más viejos que necesitan investigación adicional por varias razones. Los asuntos que todavía están siendo investigados no se relacionan con ningún sacerdote de la Arquidiócesis de Oklahoma City que está actualmente activo, pese a que un asunto que todavía está siendo investigado se refiere a un sacerdote retirado que todavía vive en el territorio de la Arquidiócesis.

Nuestros hallazgos clave del Informe incluyen:

- Inadecuación de las políticas y sistemas de registros de la Arquidiócesis que resultaron en la eliminación intencional o accidental de los registros que documentan o se refieren a alegatos de abuso sexual infantil;
- Registros descentralizados, desorganizados y desordenados de la Arquidiócesis que documentan o se refieren a alegatos de abuso sexual infantil;

- Investigaciones inconsistentes e inadecuadas llevadas a cabo por la Arquidiócesis de alegatos pasados de abuso sexual infantil;
- En algunos casos, el hecho de que la Arquidiócesis no haya logrado tomar medidas adecuadas cuando se le presentaron alegatos creíbles de que sus sacerdotes habían abusado sexualmente de menores de edad, inclusive no lograr controlar a ciertos sacerdotes considerados preocupantes para la Arquidiócesis; y
- El hecho de que la Arquidiócesis no lograra seguir sus propias políticas y procedimientos respecto de alegatos de abuso sexual infantil, particularmente cuando la Arquidiócesis estaba implicada en pleitos o al presentar pruebas verdaderas clave a la Junta de revisión de la Arquidiócesis (la «Junta de revisión»).

Nuestro Informe también realiza una cantidad de recomendaciones clave a la Arquidiócesis. En resumen, estas recomendaciones incluyen:

- Pasos que la Arquidiócesis debería tomar para consolidar, modernizar y mejorar su sistema de registros para asegurar que conserve, rastree y tenga acceso a todos los registros que documentan o se refieren a alegatos de abuso sexual infantil;
- Formas de mejorar su proceso investigativo, inclusive contratar un investigador capacitado y realmente independiente, de forma que tanto la Arquidiócesis como el público puedan tener confianza de que se reduce la predisposición humana real o percibida cuando la Arquidiócesis recibe alegatos de abuso sexual infantil;
- Mayor involucramiento por parte de la Junta de revisión sobre alegatos de abuso sexual infantil. La Junta de revisión está regido por el Estatuto para la protección de niños y jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos de América y la mayoría de sus miembros son personas laicas que no están empleadas por la Arquidiócesis;
- Para la protección de nuestros niños y para aumentar la responsabilidad, mejores comunicaciones públicas sobre las medidas tomadas por la Arquidiócesis respecto de alegatos de abuso sexual infantil; y
- Aclarar que todo el personal de la Arquidiócesis, inclusive el clero, debería informarle inmediatamente a la Arquidiócesis cualquier inquietud sobre abuso sexual infantil e imponer consecuencias en caso de no informar inmediatamente tales inquietudes.

Nuestra firma está formada por personas que viven, trabajan y van a la iglesia en Oklahoma y en otras partes. Humildemente presentamos este Informe con la confianza de que sus contenidos y cualquier mejora resultante adoptada por la Arquidiócesis resulten en un mejor ambiente para todos los niños de generaciones futuras.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

McAfee & Taft fue contratado por la Arquidiócesis de Oklahoma City para llevar a cabo una investigación independiente y revisar el manejo en el pasado de la Arquidiócesis de alegatos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes. Inicialmente, la Arquidiócesis anunció que su rector, Michael Scaperlanda, revisaría cada archivo de sacerdote¹ por el período de tiempo 1960-2018 y solo le entregaría a McAfee & Taft para su revisión «[c]ualquier archivo con un alegato de abuso de un menor o un abuso de poder en una relación sexual». Véase Arquidiócesis de Oklahoma City 29 de agosto de 2018, comunicado de prensa «Archbishop announces review, reporting plan for past allegations of abuse in the Archdiocese,» [Arzobispo anuncia el plan de revisión e informe de alegatos pasados de abuso en la Arquidiócesis] <https://archokc.org/news-releases>. Poco después de hacer este anuncio, sin embargo, la Arquidiócesis decidió que si bien revisaría todos los archivos de sacerdotes, también le entregaría a McAfee & Taft todos sus archivos de sacerdotes de 1960-2018 para la revisión independiente de la firma.

Se le solicitó a nuestra firma que revise los archivos de sacerdotes con varios objetivos en mente. En primer lugar, se le solicitó a la firma que revise independientemente cómo la Arquidiócesis manejó los alegatos pasados de abuso sexual infantil; en segundo lugar, nos dieron el poder de investigar independientemente cualquier asunto que determináramos que lo ameritaba; en tercer lugar, se le solicitó a la firma que informe todos los casos en que cree que el abuso sexual de un menor estaba fundado; en cuarto lugar, se le solicitó a la firma que brinde recomendaciones a la Arquidiócesis sobre cómo mejorar su manejo de alegatos de abuso sexual infantil y, en quinto lugar, se le pidió a la firma que prepare un informe para distribución pública detallando sus hallazgos, que incluya una enumeración de hechos pertinentes de cada caso, una discusión de cómo la Arquidiócesis manejó los alegatos con los años y las recomendaciones de la firma.

Como parte de nuestra investigación independiente, revisamos todos los archivos de sacerdotes de la Arquidiócesis de todos los sacerdotes activos, externos,² y fallecidos que

¹ Un archivo de sacerdote típicamente consiste en una cantidad de componentes, inclusive los archivos de seminario de un sacerdote, los materiales del personal relativos a un «archivo de empleo», correspondencia entre el sacerdote y la Arquidiócesis, el testamento del sacerdote, solicitudes de devolución de gastos relacionados con el cargo y, si corresponde, documentación relativa a cualquier problema disciplinario o de otro tipo que involucre al sacerdote, inclusive cualquier investigación asumida por la Arquidiócesis de la supuesta conducta del sacerdote y cualquier medida tomada por la Arquidiócesis en respuesta a su investigación. En la mayoría de los casos, los archivos de sacerdotes de la Arquidiócesis parecen minuciosos y contienen registros que van de lo más insignificante a cosas de bastante relevancia. Debido a que los archivos de sacerdotes consisten en registros en papel, es notoria la ausencia en la mayoría de los archivos de sacerdotes de comunicaciones por correo electrónico sobre el sacerdote o relacionado con él. Solo en casos limitados observamos copias impresas de correos electrónicos específicos colocadas en los archivos de sacerdotes.

² Un «sacerdote externo» es un sacerdote que no fue ordenado como sacerdote dentro de la Arquidiócesis de Oklahoma City, pero que cumplió funciones dentro de los límites geográficos de la Arquidiócesis de

estuvieron activos de 1960 en adelante. Esto asciende a aproximadamente 545 sacerdotes. También revisamos archivos «confidenciales» que la Arquidiócesis poseía que estaban fuera del alcance de los archivos de sacerdotes comunes. El equipo de investigación de la firma hizo varios viajes a las oficinas del Centro Pastoral de la Arquidiócesis en «7501 Northwest Expressway» en Oklahoma City y se nos brindó acceso a todo archivo, registro o área de almacenamiento que solicitáramos inspeccionar. También le pedimos a la Arquidiócesis que entregara o nos permitiera acceso a una gran cantidad de materiales más allá del alcance de los archivos de sacerdotes y la Arquidiócesis no se negó a ninguna solicitud que le hiciera la firma de acceder a documentos, registros o información. Por ejemplo, le pedimos a la Arquidiócesis que entregara y nos permitiera conservar de forma independiente partes considerables de su información almacenada electrónicamente («ESI», por sus siglas en inglés). McAfee & Taft contrató a una firma de informática forense independiente para obtener imágenes de registros electrónicos identificados independientemente por McAfee & Taft para su conservación, inclusive todos los registros informáticos y archivos de funcionarios superiores de la Arquidiócesis y cualquier funcionario que pudiera estar implicado en los alegatos de abuso sexual. McAfee & Taft revisó independientemente partes de la ESI a la que se le tomaron imágenes usando términos de búsqueda y consultas que la firma desarrolló independientemente.

En determinados casos, hicimos una revisión limitada de otros archivos, inclusive archivos de la diócesis y determinadas políticas y procedimientos de la Arquidiócesis. Dado el volumen de registros y la viabilidad, la firma no revisó todo registro contenido dentro de todos estos archivos y no podía viajar a toda Diócesis dentro de la Arquidiócesis de Oklahoma City para inspeccionar los archivos de cada diócesis. En algunos casos, no entrevistamos a todos los testigos potencialmente importantes ni supuestas víctimas si concluíamos que ya teníamos suficientes pruebas como para fundar un alegato.

ESTÁNDAR DE PRUEBA USADO PARA EL INFORME

El anuncio de la Arquidiócesis de la investigación de nuestra firma hacía referencia a una revisión que «incluiría todos los casos donde se informaran, fundaran, procesaran o admitieran alegatos creíbles de abuso sexual infantil entre sacerdotes que cumplían funciones en la Arquidiócesis de Oklahoma City. Véase Arquidiócesis de Oklahoma City 29 de agosto de 2018, comunicado de prensa «Archbishop announces review, reporting plan for past allegations of abuse in the Archdiocese,» <https://archokc.org/news-releases>. Al llevar a cabo nuestra investigación y preparar este Informe, nos enfrentamos a una pregunta difícil: ¿Cuántas pruebas

Oklahoma por algún período de tiempo. El término incluye sacerdotes de orden religioso, es decir, hombres que son ordenados como sacerdotes y juran servir a la Iglesia Católica a través de una comunidad religiosa particular como los franciscanos, jesuitas o dominicos. A efectos del presente informe, nos referimos a sacerdotes que fueron ordenados como sacerdotes dentro de la Arquidiócesis de Oklahoma City como «sacerdotes incardinados». Nos referimos a otros sacerdotes, es decir, sacerdotes de orden religioso y los que no fueron incardinados dentro de la Arquidiócesis de Oklahoma City pero que cumplieron funciones dentro de Oklahoma en algún momento, como «sacerdotes no incardinados».

se necesitan para identificar a un sacerdote acusado por su nombre en el Informe? En otras palabras, ¿qué estándar de prueba deberíamos usar al decidir si incluir a un sacerdote particular en el Informe? Para contestar a esta pregunta, vimos lo que otras diócesis hicieron cuando publicaron listas de clero acusado similares a la contenida en este Informe y descubrimos que no hay estándar de prueba ampliamente aceptado. Por ejemplo, muchas diócesis adoptaron un estándar de «alegato creíble». No parece haber una definición uniforme o unánime de qué significa un «alegato creíble». Por el contrario, el significado de «creíble» varía dependiendo de la diócesis, donde algunas parecen adoptar un estándar de prueba más alto o más bajo. En algunos casos, un alegato «creíble» se definió simplemente como un alegato que podría ser real, es decir, es al menos posible que el supuesto abuso realmente ocurriera en función del hecho de que el clérigo estuviera en el área cuando se produjo el supuesto abuso en ese momento. Otras diócesis adoptaron un estándar aparentemente más riguroso aunque integral basado en varios factores, como la existencia de múltiples alegatos similares, admisión de culpabilidad por parte del acusado, otras pruebas o testimonios que lo corroboren y la credibilidad percibida de la supuesta víctima.

Para llegar a un estándar de prueba apropiado para usarse a fines del presente Informe, y en ausencia de una visión uniforme o unánime, consultamos a la Arquidiócesis e identificamos lo que creemos que son dos intereses importantes y a veces opuestos: En primer lugar, la necesidad de ser transparentes sobre alegatos de abuso sexual del clero, un interés que comparten las víctimas específicamente y el público en general. En segundo lugar, el derecho del acusado a no ser condenado en el tribunal de opinión pública sin un debido proceso y sin justa causa. Como abogados, somos conscientes del poder de acusación, especialmente en este contexto donde la mera acusación de abuso sexual de un menor puede tener consecuencias graves y duraderas para esa persona, tanto a nivel de su reputación como a otro nivel (incluso cuando la acusación se descarta más adelante en un tribunal por no estar fundada). Somos conscientes del hecho de que incluir el nombre de una persona en la lista contenida en este Informe puede someter a esa persona a tales consecuencias.

Creemos que el estándar de prueba que empleamos alcanza el equilibrio adecuado entre los dos intereses competitivos identificados anteriormente. Este Informe nombra a un sacerdote acusado de abuso sexual de un menor si determinamos mediante nuestra investigación que un alegato contra él está «fundado». A efectos de este Informe, un alegato está «fundado » si existen pruebas independientes que tienden a respaldar el alegato. Estas pruebas independientes incluyen:

- Sentencias penales por abuso sexual infantil;
- Admisión de culpabilidad por el acusado, sea documentada o contada por testigos;
- El hecho de que la Arquidiócesis u otra autoridad clerical apropiada tomó medidas para retirar al acusado del cargo luego de una investigación de un alegato de abuso sexual infantil;

- El hecho de que la Arquidiócesis tomó medidas para restringir el contacto del acusado con menores de edad después de una investigación de un alegato de abuso sexual infantil;
- Recomendaciones de que el acusado sea retirado de su cargo o se le debería restringir el cargo después de una investigación de un alegato de abuso sexual infantil;
- La existencia de arreglos confidenciales pagados por la Arquidiócesis a supuestas víctimas del acusado;
- La existencia de más de un alegato de abuso sexual infantil, sea que el supuesto abuso ocurrió en la Arquidiócesis o en otro lado;
- Otros documentos, declaraciones de testigos y testimonios que corroboren un alegato de abuso sexual a un menor; y
- Otros indicadores y señales de alerta que tiendan a corroborar el alegato.

Conforme al estándar establecido anteriormente, un alegato sin pruebas independientes que lo respalden no está fundado y, por lo tanto, el sacerdote implicado en ese alegato no es identificado por nombre en el presente Informe. Somos conscientes de la frustración que este estándar puede crear. En la medida en que haya personas en nuestra comunidad que crean que poseen información o pruebas respecto de cualquier personal de la Arquidiócesis que no se menciona en este Informe, los invitamos a presentar estas pruebas para permitir una nueva investigación, o una investigación adicional, de cualquier alegato.

SACERDOTES CON ALEGATOS FUNDADOS DE ABUSO SEXUAL A UN MENOR

Padre Thomas Behnke, O.C.D.

Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1922

Ordenado: 1949

Fecha de defunción: 9 de noviembre de 2008

El padre Thomas Behnke no fue incardinado con la Arquidiócesis de Oklahoma City sino que era miembro de la Orden de los Carmelitas Descalzos, una orden religiosa y ocupaba un cargo en Oklahoma a satisfacción del obispo de Oklahoma City. Creemos que cumplió funciones en Oklahoma varias veces, pese a que el archivo de la Arquidiócesis del padre Behnke carecía de registros del personal o documentación sobre sus misiones dentro de Oklahoma.

La Arquidiócesis recibió dos demandas independientes de abuso sexual de un menor contra el padre Behnke. La primera supuesta víctima se puso en contacto con la Arquidiócesis en junio de 2002 e informó alegatos de abuso sexual infantil que había sufrido décadas antes cuando tenía 13 o 14 años de edad. La Arquidiócesis recibió un segundo alegato de abuso en julio de 2018 que identificaba a dos supuestas víctimas. La persona que llamó se identificó como una de las supuestas víctimas; la otra persona identificada había fallecido cuando se realizó la llamada. Entrevistamos a una de las supuestas víctimas vivas e intentamos, sin éxito, contactar a la otra como parte de nuestra investigación. La última misión del padre Behnke en Oklahoma terminó en 1974, cuando el arzobispo John Quinn le solicitó a los Carmelitas que retiraran al padre

Behnke del cargo de pastor en la iglesia Little Flower Church en Oklahoma City. No hay documentos en el archivo sobre el motivo por el que el arzobispo Quinn solicitó la destitución del padre Behnke y el Provincial de ese momento, el padre Herman A. Estaun, que también era un pastor en Little Flower y vivía con el padre Behnke en la rectoría, declaró bajo juramento en 2008 que el arzobispo Quinn no le brindó al padre Estaun una razón para solicitar la destitución del padre Behnke.

Hay notas manuscritas en el archivo del padre Behnke que sugieren que posiblemente hubiera otras víctimas del padre Behnke, pese a que no está claro si estas víctimas residen en Oklahoma o eran víctimas de otros lugares y no pudimos identificar de quién era la letra. En un correo electrónico del 22 de octubre de 2004, el Rector Loutitia «Tish» Eason escribió que «[h]emos recibido otros alegatos contra este sacerdote. Uno fue una llamada anónima a la línea directa de la hermana de una víctima y el otro se hizo varios años atrás. La documentación está en nuestros archivos legales». No pudimos identificar estos archivos, pese a que pueden estar entre los que posee Doug Eason y todavía no se entregaron a nuestra firma. Véase Sección Condiciones del Informe sobre Doug Eason.

Además, revisamos materiales y archivos de pleitos de archivos externos a la Arquidiócesis y observamos que su orden religiosa pagó \$4,65 millones de dólares en 2009 para resolver alegatos que implicaban al padre Behnke y un supuesto abuso que ocurrió en Texas y Oklahoma.

El padre Behnke ya había sido identificado como acusado de forma creíble de abuso sexual a un menor por la Diócesis de Dallas, <https://www.cathdal.org/list>, y la Arquidiócesis de San Antonio, https://www.archsa.org/images/uploads/ArchSA_Report.pdf.

Padre David Armstead Cowden

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1950

Ordenado: 29 de mayo de 1982

Fecha de defunción: 23 de marzo de 2015

Las primeras inquietudes sobre abuso sexual a un menor contra el padre David Cowden fueron documentadas por el padre Edward Weisenburger, vicario general³ en abril de 2002. Pese a que no se informó un alegato explícito en ese momento, el padre Weisenburger, V. G. igualmente planeó inquietudes sobre el padre Cowden que creemos que se basaban en

³ Edward Weisenburger cumplió funciones de pastor en la Arquidiócesis por muchos años antes de ser nombrado por el arzobispo Beltran para ocupar el cargo primero de vicerrector y después de vicario general en 1998. En 2009, se lo designó reverendo monseñor. Ocupó el cargo de vicario general hasta que el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la Diócesis de Salina, Kansas en 2012. En 2017, el Papa Francisco nombró al obispo Weisenburger como obispo de la Diócesis de Tucson, Arizona. Este Informe se refiere a él como padre y Mons. Weisenburger según el período de tiempo en cuestión. Este Informe se refiere a él como «Obispo Weisenburger» al referirse a nuestras entrevistas con él, que ocurrieron en el último año.

información que le había brindado un pastor que había trabajado con el padre Cowden muchos años atrás. Pese a que el padre Weisenburger, V. G. no brindó fundamentos para su inquietud en 2002, documentos posteriores de 2006 reflejan que uno de los pastores de la Arquidiócesis había compartido, muchos años antes, inquietudes sobre el padre Cowden con el padre Weisenburger, V. G. y ni el pastor ni el padre Weisenburger, V. G. informaron estas inquietudes a la Arquidiócesis en ese momento.

Cuando el padre Weisenburger, V. G. mencionó por primera vez que podía haber problemas relacionados con abuso sexual infantil que implicaban al padre Cowden en 2002, se habían planteado numerosas inquietudes y se habían documentado sobre la salud física y mental del padre Cowden por los parroquianos y otros cleros durante los años pero ninguna de estas inquietudes se referían a alegatos informados de abuso sexual infantil. En respuesta a las inquietudes de los parroquianos, la Arquidiócesis estaba considerando cómo atender al padre Cowden. El padre Weisenburger, V. G. redactó un memorándum el 7 de abril de 2002 al arzobispo Eusebius Beltran detallando las últimas inquietudes. En ese memorándum del 7 de abril, las primeras dos páginas detallan las inquietudes de los parroquianos. El memorándum contiene una tercera página marcada «CONFIDENCIAL» en la parte superior y es una carta redactada al arzobispo Beltran del V. G. Weisenburger que dice:

Mis inquietudes principales sobre el padre Cowden son las siguientes (y le pido que no retenga este documento sino que lo deseche luego de leerlo):

3. Espero que solo sea una coincidencia que el comportamiento informado esté sucediendo en un momento en que los sacerdotes están bajo un escrutinio cada vez mayor debido a asuntos de pedofilia. Si bien no tengo prueba alguna, si hubiera un problema de este tipo en los antecedentes del padre Cowden, tal vez el clima actual ha contribuido a su estado emocional. Le reitero, tal vez esté sacando conclusiones graves y apresuradas.

En el momento en que el padre Weisenburger, V. G. redactó esta parte de su carta al arzobispo Beltran, no había documentación en el archivo del padre Cowden que alegara abuso sexual de un menor. Cuando le preguntaron sobre la carta que debía «desechar después de leer» al arzobispo Beltran que era parte de su memorándum del 7 de abril de 2002, el obispo Weisenburger dijo que no era una práctica común suya redactar documentos con instrucciones de desechar el documento después de leerlo.

El primer alegato documentado de abuso sexual infantil contra el padre Cowden es del 11 de octubre de 2006, implicando alegatos de abuso que se había producido muchos años antes cuando la supuesta víctima tenía 10 u 11 años. La recepción de este alegato parece haber impulsado al padre Weisenburger, V. G. a documentar y detallar inquietudes que tenía sobre el padre Cowden por una relación inapropiada con un menor de edad, que le habían dicho años atrás cuando era pastor asociado en una parroquia pero que nunca lo había informado, incluso cuando había planteado inquietudes no especificadas en su memorándum de 2002. El padre

Weisenburger, V. G. detalló en varios memorándums con fecha 2006 en el archivo del padre Cowden que como pastor asociado en una parroquia dentro de la Arquidiócesis de Oklahoma City, el pastor del entonces padre Weisenburger le había dicho que el padre Cowden había estado implicado en dos relaciones aparentemente problemáticas con sujetos masculinos menores de edad cuando el padre Cowden había sido el pastor asociado de la misma parroquia. Ambas implicaban que niños menores de edad se quedaran a pasar la noche en la rectoría en la misma habitación que el padre Cowden cuando el pastor estaba fuera de la ciudad. El pastor conocía los nombres de ambas víctimas potenciales y a la luz del alegato del 11 de octubre de 2006, el padre Weisenburger, V. G. entrevistó al pastor y documentó los detalles del potencial abuso. Uno de los niños tenía 14 en ese momento y el otro era la misma persona que le habían informado a la Arquidiócesis el 11 de octubre de 2006. El padre Weisenburger, V. G. confirmó con el pastor que el niño de 14 años, que había volado a visitar al padre Cowden, había sido llevado al club de campo y el niño se había sentido mal porque le habían servido mucho vino. Sin embargo, el archivo no refleja ninguna investigación adicional por la Arquidiócesis sobre los alegatos que el padre Weisenburger, V. G. detalló al entrevistar al pastor. Respecto del alegato del 11 de octubre de 2006, parece ser que la Arquidiócesis siguió materialmente sus políticas y procedimientos en el manejo de ese alegato.

En respuesta al alegato del 11 de octubre de 2006, el padre Cowden fue enviado a una evaluación de 10 días a St. Luke Institute en Maryland, y después de eso, pasó más de seis meses en St. Luke en su programa de tratamiento residencial. El padre Cowden regresó a Oklahoma City en mayo de 2007. Antes de su arribo, la Arquidiócesis consideró si permitir que el padre Cowden regresara a su cargo y, si lo hacía, si podía volver en «cargo restringido», es decir, una misión que mantendría al padre Cowden lejos de los menores. Cabe destacar que hay documentación tanto de un miembro de la Junta de revisión como del padre Weisenburger, V. G. condenando firmemente cualquier intento por parte de la Arquidiócesis de restituir al padre Cowden a su cargo, incluso si era al llamado «cargo restringido». Cuando se le preguntó sobre la viabilidad de los «cargos restringidos» el obispo Weisenburger y el arzobispo Beltran nos dijeron que para el año 2007 era obvio que tal arreglo era inviable.

El 8 de junio de 2007, poco después de que el padre Cowden regresara a Oklahoma de St. Luke, el arzobispo Beltran se reunió con el padre Cowden y documentó la reunión en una carta con fecha del mismo día al padre Cowden. En esa reunión, se le informó al padre Cowden que se le ofrecería recibir tratamiento médico, sus facultades quedarían suspendidas y no podía cumplir funciones públicamente en un cargo sacerdotal. También se le informó al padre Cowden que nunca debía estar solo con un menor de edad. No hubo anuncio público por la Arquidiócesis de Oklahoma City sobre las razones de la jubilación del padre Cowden.

Padre Stephen Cude

Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1943

Ordenado: 31 de mayo de 1969

Retiro de facultades: 15 de mayo de 1998

La primera referencia en el archivo de sacerdote del padre Stephen Cude a un alegato de conducta sexual indebida que implica a menores de edad es una carta del 27 de marzo de 1987 del arzobispo Salatka al padre Cude. En la carta, el arzobispo Salatka le otorga al padre Cude «una licencia administrativa temporal, a la espera del resultado de la investigación de la acusación que se hizo en su contra». No hay documentación sobre el alegato en el archivo de sacerdote del padre Cude con fecha anterior a esta carta, pese a que está claro que se había hecho un alegato y había una investigación en curso.

Otros documentos en el archivo de sacerdote del padre Cude confirman que se había informado un alegato de abuso sexual al Departamento de Policía de Oklahoma City y que la oficina del Fiscal de Distrito de Oklahoma estaba considerando presentar cargos contra el padre Cude cerca de esta época. El alegato aparentemente había sido informado por, o en nombre de, un adolescente que conocía al padre Cude. El Abogado Jim Pearson representó al padre Cude en la investigación penal.

El 16 de setiembre de 1987, Pearson escribió una carta al Primer Fiscal Adjunto de Distrito del condado de Oklahoma, Pat Morgan. En esta carta, Pearson escribió «[e]sto confirmará nuestra conversación del 15 de setiembre donde me dijo que la oficina del Fiscal de Distrito había rechazado oficialmente procesar al padre Steve Cude por los alegatos presentados por [la supuesta víctima]». La carta de Pearson también decía que se le había dado instrucciones al padre Cude de «evitar todo contacto con jóvenes» y que estaría bajo la supervisión del padre Louis J. Lamb. La carta decía que Cude continuaría su cargo en el hospital pero «no tendrá contacto de seguimiento con los jóvenes».

El 18 de setiembre de 1987, el arzobispo Salatka le escribió al padre Cude finalizando su licencia administrativa. El arzobispo Salatka le notificaba a Cude que debía «evitar todo contacto con jóvenes» y que el arzobispo Salatka recibiría «informes de supervisión» mensuales del padre Lamb. Otros documentos en el archivo indican que, debido a ese alegato, el arzobispo Salatka también estaba considerando enviar al padre Cude a Southdown, un centro de tratamiento ubicado en Ontario, Canadá para una evaluación.

El archivo de sacerdote del padre Cude indica que el 25 de noviembre de 1987, Pearson y el padre Bill Pruett (quien era miembro del Panel de Salud de la Arquidiócesis para sacerdotes) se reunieron con la supuesta víctima (quien aparentemente seguía siendo menor de edad en ese momento) y grabaron una entrevista en video sobre el alegato. La grabación en video se transcribió después por un taquígrafo judicial el 30 de diciembre de 1987. De acuerdo con la transcripción, la supuesta víctima dijo que el padre Cude no abusó de él y que el alegato fue inventado por su madre. Cuando lo entrevistaron, el padre Pruett reconoció haber hablado con Pearson y sugerirle que Pearson entrevistara a la supuesta víctima pero el padre Pruett no recuerda haber estado presente para la entrevista. También intentamos entrevistar a la supuesta víctima para este informe pero tenemos entendido que falleció.

En función de la transcripción y la grabación en video de la supuesta víctima desdiciendo el alegato, el arzobispo Salatka redactó un memo en el archivo el 4 de enero de 1988 concluyendo que el padre Cude era «inocente» del alegato en su contra. Como resultado, el arzobispo Salatka escribió que no había necesidad de enviar al padre Cude a Southdown para una evaluación ni que el padre Lamb siguiera supervisando al padre Cude. El arzobispo Salatka notificó al padre Lamb que la supervisión ya no era necesaria.

No hay pruebas de que se presentaran cargos contra el padre Cude ni de que hubiera seguimiento adicional respecto del alegato de 1987. No está claro si se le permitió al padre Cude interactuar con jóvenes después de que la supuesta víctima aparentemente desdijera el alegato y, de ser así, si este cambio se llegó a comunicar a la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Oklahoma.

De acuerdo con un documento de «cronología» preparado en 1997 o después, alrededor de diciembre de 1988, los parroquianos informaron inquietudes al padre Bill Pruett sobre el padre Cude y «la forma y el tiempo de los jóvenes en [su] rectoría». La cronología establece que estas inquietudes fueron presentadas al Panel de Salud de la Arquidiócesis y dieron como resultado una reunión del 6 de diciembre de 1988 entre el arzobispo Salatka, padre William «Bill» Ross (el presidente del Panel de Salud) y el padre Cude. En la reunión, la cronología establece que el padre Cude negó haber hecho algo mal «pero debido a los alegatos previos, se dio una directiva de que debía evitar todo contacto con los adolescentes, y que el padre Cude debía aceptar un «control en curso» por un miembro del Panel de Salud, el padre Paul Gallatin. De acuerdo con la cronología, «[e]ste control se llevó a cabo por algunos meses el primer año y pocas veces después del primer año». Cuando se entrevistó al padre Pruett, dijo recordar informes de que el padre Cude tenía una relación inapropiada con una familia en su parroquia actual, pero no recordaba los detalles. Cuando entrevistamos al padre Gallatin, confirmó que le habían asignado controlar al padre Cude por algún tiempo. No hay pruebas en el archivo de sacerdote del padre Cude de que la Arquidiócesis haya llevado adelante alguna investigación adicional o seguimiento respecto de las inquietudes reportadas en 1988.

El 8 de diciembre de 1989, el arzobispo Salatka escribió un memo en el archivo del padre Cude. La nota dice: «Visita resultado del patrón informado de comportamiento» y «patrón de relaciones con jóvenes - inapropiado». No hay otra referencia en el archivo respecto del «patrón de comportamiento» ni indicación de qué era el comportamiento.

El 28 de julio de 1995, el arzobispo Beltran escribió un memo en el archivo de sacerdote del padre Cude resumiendo una entrevista con un exalumno del liceo. De acuerdo con el memo, el exalumno informó que había formado una amistad con el padre Cude mientras iba al liceo. El exalumno informó que en un viaje en el que pasaron la noche, el padre Cude tuvo «avances inapropiados» hacia el exalumno pero no se alegó abuso real, según dice el memo. El memo declara que el exalumno le dijo al arzobispo Beltran que había informado el incidente al padre Bill Ross en 1991, pero que sintió que el padre Ross no le creía. El memo del arzobispo Beltran

establece que el arzobispo Beltran le preguntó al padre Cude sobre el alegato y el padre Cude negó cualquier comportamiento inapropiado.

El 13 de diciembre de 1995, el arzobispo Beltran recibió un memo de las Caridades Católicas respecto de un hombre que había informado que estaba en cuidado adoptivo del padre Cude en la década del 70 cuando era adolescente y que el padre Cude había «abusado sexualmente» de él. De acuerdo con el memo de las Caridades Católicas, los informes confirmaron que el hombre había sido colocado con el padre Cude una vez. En un memo del 15 de diciembre de 1995 al arzobispo Beltran en el archivo de sacerdote del padre Cude, el padre Weisenburger recomendaba enviar al padre Cude a una evaluación. El padre Weisenburger escribió: «[A]l acercarse al individuo en cuestión [padre Cude] se le debería indicar cuidadosamente que en este momento no se lo considera culpable pero que simplemente hay «demasiado humo» en este momento como para ignorar el asunto. Una evaluación profesional es razonable y lejos de reaccionar exageradamente».

En un memo del 3 de enero de 1996 del arzobispo Beltran a los padres Kastner y Weisenburger, el arzobispo Beltran escribió que desde su última reunión había «estudiado el archivo del padre Cude bastante minuciosamente» debido al memo recibido de las Caridades Católicas. El arzobispo Beltran escribió «comienzo a sentir que sería injusto pedirle a Stephen [Cude] que se someta a una evaluación en Saint Luke en vista de este memo. Me doy cuenta de que nuestra política establece que cada alegato se investigará pero no creo que este memo constituya un «alegato». De ser así, creo que mi búsqueda de los archivos probablemente sea adecuada». El arzobispo Beltran luego les pidió a los padres Kastner y Weisenburger que «piensen sobre esta situación para poder discutirla inmediatamente cuando regrese».

A pesar del memo del arzobispo Beltran del 3 de enero de 1996 que expresa reservas sobre enviar al padre Cude para una evaluación, los documentos muestran que el arzobispo Beltran envió al padre Cude al St. Luke Institute en febrero de 1996 y le dieron el alta más adelante en ese mes. Cerca de ese mismo momento, el arzobispo Beltran recibió información de que el padre Cude había sido padre adoptivo de varios adolescentes en la década del 70 y si bien el padre Cude negaba cualquier involucramiento sexual con la mayoría de estos adolescentes, expresó sentimientos inespecíficos de culpa respecto de uno de los adolescentes. El arzobispo Beltran también aprendió que el padre Cude reconocía comportamiento sexual luego de convertirse en sacerdote, lo que incluía algún contacto sexual con adolescentes.

De acuerdo con los documentos en el archivo de sacerdote del padre Cude, el arzobispo Beltran determinó en marzo de 1996 que el padre Cude no presentaba riesgo de conducta sexual indebida con menores. El padre Cude fue restituido como pastor y no hay pruebas en el archivo de sacerdote del padre Cude de que se le hayan puesto limitaciones a su contacto con los jóvenes (a pesar de la restricción anterior impuesta por el arzobispo Salakta).

En mayo de 1997, la Arquidiócesis recibió un informe de que el padre Cude había abusado de un niño durante la década del 80. Los documentos muestran que el arzobispo Beltran se reunió con la supuesta víctima y su abogado. Los documentos muestran que debido al alegato, el arzobispo Beltran suspendió las facultades del padre Cude y lo envió al Institute of Living para una evaluación. El padre Cude recibió el alta en 1997 y lo enviaron a Trinity Retreat House para recibir un tratamiento. Cerca de esta misma época, el padre Cude admitió su conducta sexual con menores y le brindaron esta información al arzobispo Beltran.

En abril de 1998, el arzobispo Beltran notificó al padre Cude que no iba a poder darle una misión en la Arquidiócesis. Después de esto el arzobispo Beltran envió una carta en mayo de 1998 que le quitaba las facultades al padre Cude indefinidamente. Entendemos que el padre Cude se jubiló y todavía no tiene facultades en la Arquidiócesis.

En 2010 la supuesta víctima que se presentó en 1997 demandó al padre Cude y a la Arquidiócesis de Oklahoma City por un supuesto abuso que ocurrió cuando la supuesta víctima era menor de edad. La demanda se rechazó fundándose en que la prescripción había vencido.

Padre Mathias Faue

Fecha de nacimiento: 26 de enero de 1923

Fecha de defunción: 30 de enero de 1988

El padre Mathias Faue era un monje benedictino y un miembro de la Abadía de St. Gregory in Shawnee, Oklahoma. El padre Faue desempeñó gran parte de su carrera en la zona de Los Ángeles, California. Fue asignado a Nuestra Señora de Lourdes al este de Los Ángeles y la iglesia St. Benedict en Montebello, California (en el área metropolitana de Los Ángeles). También desempeñó funciones en Seattle, Washington. De acuerdo con los documentos que tuvimos disponibles (la mayoría de los cuales están disponibles al público), se han informado múltiples alegatos de que el padre Faue había tenido una conducta sexual indebida que implicaba a menores de edad y que los funcionarios de la Abadía de St. Gregory estaba al tanto de las inquietudes que implicaban al padre Faue por muchos años.

En 2013, se le solicitó a varias órdenes religiosas que entregaran los registros del personal como parte del pleito con las víctimas de abuso sexual del clero en el área de Los Ángeles. Estos registros incluían registros del personal del padre Faue y se puede tener acceso a ellos en el sitio web de *Los Angeles Times*: <http://documents.latimes.com/priest-abuse-benedictine-priest-mathias-faue/>. A continuación obra un resumen de los registros pertinentes.

En una carta del 17 de abril de 1969 del padre «James» de la iglesia St. Benedict al Abad de la Abadía de St. Gregory en Oklahoma, el padre James escribió «[I]os últimos tres años no he prestado atención particular al padre Mathias y su problema. De hecho, lo he ignorado. Pero hace unas semanas me volvieron a hablar de eso. La fuente son tres familias y debo aceptarlo. No se le ha informado nada al padre Mathias.» El padre James escribió que cambiaría la tarea del padre Mathias «con base en su relación con los niños». El padre James escribió «si este problema

particular no se soluciona luego de hacer el cambio, tal vez usted debería reemplazar al padre Mathias».

El Abad respondió el 21 de abril de 1969 expresando desilusión de que el padre Mathias «no había superado el problema». El Abad escribió además «[l]o que deben hacer, si es posible, es ir con él a un buen psicólogo. Debido al peligro que implica para la diócesis pueden incluso insistir pero es necesario que tomen la iniciativa y pidan una consulta.»

En una carta del 6 de febrero de 1985 al monseñor John A Rawden, Rector de la Arquidiócesis de Los Ángeles, el padre Adrian Vorderlandwehr (Abad de St. Gregory) escribió que el padre Faue había sido arrestado el 3 de octubre de 1984 mientras asistía a un cine condicionado, aparentemente por la sospecha de «exhibirse» (pese a que el padre Vorderlandwehr dijo que Faue negó haberse exhibido cuando lo entrevistaron). La carta dice que el «problema inmediato [supuestamente en referencia al arresto penal] se había resuelto». (Una carta posterior de St. Benedict (el nombre del autor estaba eliminado en la versión que recibimos) decía que el padre Faue se estaba «masajeando» en el cine condicionado pero «no se exhibió»).

En una carta al padre Faue del 22 de febrero de 1985, el autor (cuyo nombre estaba eliminado) escribió que el padre Faue era «libre con [sus] afectos y el uso de las manos con los niños en el terreno de la escuela». «Por favor, tenga cuidado» escribió el autor.

En una carta del 12 de marzo de 1985 con membrete de la iglesia St. Benedict y aparentemente enviada al Abad en la Abadía de St. Gregory en Shawnee, el autor informaba que un padre de la escuela de la parroquia en Montebello se quejó con un maestro de que el padre Mathias «tocaba a los niños, incluso les tocaba el trasero». Pese a que el autor escribió que creía que este contacto ocurría «por encima de la ropa» y no había contacto con los «genitales», le dijo al padre Mathias que si esto volvía a suceder, lo enviaría de nuevo a la Abadía inmediatamente. El autor escribió «[h]ay tanto lío en este momento en la zona de L.A. sobre abuso infantil que no me gustaría ver al padre Matías involucrado en algo así».

En una carta del 18 de marzo de 1985 al padre Faue, el autor (quien, con base en el contexto, probablemente sea el Abad de St. Gregory) escribió que estaba «desilusionado» de recibir la carta sobre la queja del padre. «Está claro que usted tiene un problema, padre Mathias. Es hora de que busque ayuda. Este incidente en [Oklahoma City] que arruinó la celebración de su aniversario 25 de ordenación, [e]l reciente incidente en Long Beach [que implica el cine condicionado], las dudas sobre su servicio anterior en California, todo esto indica un problema que continúa. Debe admitir esto y buscar ayuda» escribió el autor. El autor le pedía al padre Faue que enviara el nombre de un asesor o psiquiatra que comenzaría a ver para recibir «terapia para superar este problema» y advirtió que si el padre Faue no lograba comprometerse con esta terapia, lo volverían a enviar a la Abadía permanentemente.

En una carta, el padre Faue respondió que estaba muy «sorprendido» de recibir la carta del Abad y dijo, «Me gustaría saber qué hice mal para merecer tal regaño. Si darle una cachetada de cumpleaños a alguien está mal, entonces soy culpable».

A esto siguió una carta del 18 de mayo de 1985 que el Abad dirigió al padre Faue, donde escribió:

[u]sted se sorprende ante mi solicitud de que encuentre un psiquiatra para terapia. Lo siento. Los eventos parecían sumarse y dejaban ver que esto era algo aconsejable para que no hubiera incidentes mayores. Dudo que necesite señalarle todos los casos de abuso y acoso sexual de menores presentados estos días. Así que cuando el padre [eliminado] me notificó que un padre se había quejado, evalué toda la información a mi alcance, y decidí sobre esta acción en lugar de pedirle que regresase a la Abadía en ese momento... Tuve que agregarle una historia de algo anterior, cuya totalidad desconozco excepto por rumores. Nunca encontré circunstancias exactas en Praga. Los rumores flotan en la comunidad que usted tuvo hace años en Montebello y en [dos sitios en Oklahoma].

Los archivos que obtuvimos también incluyen una carta del 14 de julio de 1988 del canciller George Thomas de la Arquidiócesis de Seattle a una presunta víctima de abuso quien denunció el abuso en el área de Seattle (donde el padre Faue sirvió durante algún tiempo). En la carta, el canciller Thomas le informa a él o ella que, con base en el informe, el presunto responsable fue el padre Faue.

En o alrededor del 1 de agosto de 2002, el Abad Martin Lugo de la Abadía de San Gregorio recibió una carta de una presunta víctima del padre Faue. La presunta víctima informó que el padre Faue lo molestó repetidamente cuando fue un monaguillo en la iglesia de San Benedicto en East Los Angeles.

El 5 de mayo de 2005, la Abadía de San Gregorio recibió un correo de una persona que escribió que la iglesia y [su] «vocación» le fueron robadas «por siempre» durante su primer año en la escuela secundaria San Gregorio (en Oklahoma) a principios de la década de los sesenta. El correo electrónico implicó que el padre Faue había abusado del autor mientras que este fue estudiante en la escuela. El Abad Lugo respondió al autor del correo electrónico ofreciéndole escucharlo. No sabemos si hubo algún seguimiento adicional relacionado con esta acusación.

En agosto de 2018, la Arquidiócesis recibió un informe que el padre Faue había abusado de un menor en Oklahoma durante la década de los cincuenta.

David B. Imming

Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1939

Ordenado: 27 de mayo de 1965

Suspensión de sus prerrogativas: 13 de mayo de 2002
Secularizado: 10 de junio de 2011

Como un asunto preliminar, es importante tener en cuenta que existen muchos registros clave relacionados con acusaciones de abuso sexual de menores que no fueron encontrados en el archivo eclesiástico del padre David Imming que nos proporcionó la Arquidiócesis. Es poco usual que hubiera registros relacionados con acusaciones de abuso sexual de menores faltantes de los archivos eclesiásticos guardados por la Arquidiócesis. Los archivos eclesiásticos se mantienen de manera consistente en orden cronológico e identificamos «interrupciones» en periodos de tiempo en el archivo del padre Imming donde no había registros. Además, observamos que había referencias a documentos, acusaciones y presuntas víctimas para los cuales no había materiales en el archivo del padre Imming. Intentamos identificar registros del archivo del padre Imming al revisar registros electrónicos y ciertos archivos de litigios en posesión de la Arquidiócesis. Encontramos registros y materiales relevantes relacionados con acusaciones de abuso sexual de menores en los archivos de litigio y electrónicos que no estaban incluidos en el archivo eclesiástico del padre Imming.

Parece que, a principios de 1992, hubo una acusación de tentativa de abuso sexual de menores presentada contra el padre Imming, aunque no existe ningún registro por escrito por parte de la Arquidiócesis que identifique a la presunta víctima o circunstancias, y no existe registro de que se llevase a cabo investigación alguna. En respuesta a esta acusación, el arzobispo Salatka envió al padre Imming al Shalom Center en Splendora, Texas, en febrero de 1992, para su diagnóstico y tratamiento. Cuando volvió, el padre Imming continuó sirviendo como sacerdote de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Documentos en el archivo del padre Imming sugiere que a su regreso, supuestamente el padre William Ross debería hacer un «seguimiento» regular del padre Imming, pero nunca se registraron formalmente en ningún documento en el archivo del padre Imming. Más adelante, en 2002, se documentó que el padre Ross nunca realizó seguimiento alguno.

La siguiente acusación documentada contra el padre Imming no tuvo lugar sino hasta 10 años después, a finales de abril de 2002. Sin embargo, justo antes de esa acusación, el 18 de marzo de 2002, el padre Weisenburger, V. G. expresó su preocupación sobre el padre Imming en una llamada telefónica al arzobispo Beltrán. Aparentemente, el arzobispo Beltrán no estaba disponible y la secretaria del mismo escribió a máquina un mensaje al arzobispo sobre el padre Imming señalando que el padre Weisenburger «más que nunca está perturbado debido a una conversación con el padre [apellido omitido]... padre [apellido omitido]... contó al padre [Weisenburger] sobre un incidente muy grave cuando fue seminarista». Aun cuando el obispo Weisenburger no pudo recordar los eventos cuando se le preguntaron en el 2019, entrevistamos al padre [apellido omitido] y aprendimos que «el incidente muy grave» incluía acusaciones de conductas sexuales inadecuadas realizadas por el padre Imming contra dicho sacerdote cuando fue un estudiante en el seminario. Aun cuando no era un menor en aquella época, sí era un adulto joven sobre quién el padre Imming mantenía una posición de autoridad. Si bien esta acusación

está fuera del alcance de este informe, ya que no incluye a un menor, si es cierta, consideramos que esta conducta inapropiada del padre Imming hubiera constituido un abuso de su autoridad sobre un seminarista.

Al día siguiente, nuevamente el padre Weisenburger, V. G. dejó un mensaje telefónico para el arzobispo Beltrán, mismo que la secretaria del arzobispo Beltrán resumió en un memorando. El memorando del 19 de marzo de 2002, refleja una sugerencia del padre Weisenburger, V. G. para que se otorgara al padre Imming un sabático de seis meses para atender algunos asuntos familiares personales, y al final del sabático de seis meses, el padre Imming se reunió con el arzobispo Beltrán, quien entonces «determinaría un sitio adecuado para evaluación (recomendó al padre Groeschel). Tras seis meses en dicho lugar (y con el hospital cerca) entonces puede reunirse con él para continuar su sabático, regresarlo a algún tipo de ministerio o lo que sea que recomiende la evaluación».

A partir de los registros, no podemos determinar ningún evento específico que necesitara que el padre Imming fuera enviado para una valoración médica o psicológica adicional al 19 de marzo de 2002, ya que los archivos no contienen registro alguno de nuevas acusaciones de abuso sexual a menores. Cuando le preguntamos al arzobispo Weisenburger porqué sugirió que se enviara al padre Imming a una «valoración», el arzobispo Weisenburger explicó: «[a]l revisar el memorando [19 de marzo de 2002], es claro que había algún tipo de preocupación sobre Imming. No tengo recuerdos relacionados sobre qué se trataba dicha preocupación en particular. Me temo que en mi mente se confunden muchos casos/situaciones y que realmente soy incapaz de mantener en mi cabeza las líneas de tiempo para los diferentes casos. Realmente tengo que aceptar lo que dicen los documentos. Nuevamente, no tengo recuerdos específicos sobre qué preocupación precedió a esta acción». Adicionalmente, el arzobispo Weisenburger explicó que, «si esto se trataba de una respuesta a una acusación formal de conductas sexuales inapropiadas, creo que más bien se le habría enviado a una institución más especializada, tal como el Institute for Living o el hospital St. Luke... Si hubo algún tipo de acusación contra Imming en este momento, no lo recuerdo y aceptaría lo que dice el archivo». En respuesta a nuestro cuestionamiento, el arzobispo Weisenburger acepta que sus recuerdos de los eventos relacionados con el padre Imming en 2002, son «nada claros», pero parece recordar que en aquel entonces, el padre Imming pudo haber tenido algunos temas emocionales y, por diversas razones, el arzobispo Weisenburger «claramente prefirió quitarlo del ministerio, sin importar el enfoque».

En marzo de 2002, durante este mismo periodo, el arzobispo Beltrán estaba considerando cómo lidiar con la insubordinación del padre Imming, la cual estaba bien documentada. Empezando en al menos el año 1996, los registros del padre Imming corroboran su insubordinación, la cual incluía el no asistir a reuniones personales programadas por el arzobispo Beltrán. Tras haber faltado a otra reunión en marzo de 2002, el arzobispo Beltrán programó una reunión con el padre Imming para el 10 de abril de 2002. Anticipando dicha reunión, el 2 de abril de 2002, el padre Imming escribió una carta al arzobispo Beltrán solicitando una licencia «extendida e indefinida a fin de cuidar de mi madre», lo que significaba la reubicación tanto del

padre Imming como su madre a Kansas para estar cerca del resto de la familia. El padre Imming también preguntó si se le permitiría retirarse, aun cuando, en aquella época, contaba con 62 años de edad. Un memorando del arzobispo Beltrán de fecha 10 de abril de 2002, documenta que en dicho día, él y el padre Weisenburger, V. G. se reunieron con el padre Imming, y se acordó que se permitiría que el padre Imming se retirase. El padre Imming se mudaría a St. Marys, Kansas, con su madre, y en vistas de la mudanza fuera del estado, se revocarían las prerrogativas del padre Imming, a partir del 18 de junio de 2002.

El 29 de abril de 2002, la Arquidiócesis recibió una acusación contra el padre Imming sobre abuso sexual de menores que tuvo lugar muchos años con antelación. Al momento en que la Arquidiócesis tuvo conocimiento de esta acusación, la presunta víctima fue un adulto. En respuesta a esta acusación, el 1 de mayo de 2002, el arzobispo Beltrán informó al padre Imming sobre esta acusación y le notificó que no podría continuar siendo afiliado de la Arquidiócesis hasta el 18 de junio de 2002, como se había planeado, e instruyó al padre Imming que debería salir de Alva, Oklahoma la semana siguiente (en aquella época, el padre Imming era párroco de tres parroquias, incluyendo el Sagrado Corazón en Alva). Además, el arzobispo notificó al padre Imming que se suspenderían sus prerrogativas a partir del 13 de mayo de 2002. Debido a que el padre Imming ya había planeado mudarse a Saint Marys, Kansas, en una carta del 16 de mayo de 2002, el arzobispo Beltrán notificó al Más Reverendo James B. Keleher, arzobispo de la Ciudad de Kansas, que el padre Imming residiría dentro de la Arquidiócesis del arzobispo Keleher. En dicha carta, el arzobispo Beltrán también escribió que «[t]al como le mencioné al teléfono, el padre Imming no tiene prerrogativas]».

El 12 de julio de 2002, la Arquidiócesis recibió una carta del abogado Dale Cottingham, señalando que su cliente era otra presunta víctima de abuso sexual, aunque la carta del 12 de julio no identificaba al sacerdote o a la presunta víctima. Una reunión entre el Sr. Cottingham y el abogado externo de la Arquidiócesis, Doug Eason, tuvo lugar el 22 de julio de 2002, y dicha junta fue reconocida en una carta del 23 de julio de 2002 que envió el Sr. Cottingham y que detallaba la fecha de nacimiento de la presunta víctima, el periodo de tiempo donde tuvo lugar el presunto abuso, y una solicitud para revisar el archivo del sacerdote involucrado.⁴ El 26 de julio

⁴ Casi un año después, el 10 de junio de 2003, luego de una demanda que presentó el Sr. Cottingham a favor de su cliente, Philip Schovanec, el Sr. Cottingham envió una carta al Sr. Eason donde especificaba que «el verano pasado, en nuestras reuniones cara a cara, usted me dijo en tanto actuaba como abogado de la iglesia, que había hecho una investigación relacionada con acusaciones previas de conductas sexuales inadecuadas contra el padre Imming, y que esta investigación no había dado resultados. También me dijo que en el archivo del padre Imming no había nada que hubiera reunido la iglesia relacionado con alguna acusación de conductas sexuales inadecuadas». El Sr. Cottingham expresó que «se había perturbado al enterarse por Philip Schovanec (el cliente de Cottingham) que recientemente (en las últimas semanas) había informado a los abogados de Philip que habían acusaciones de conductas sexuales inadecuadas contra el padre Imming en los últimos años». Con base en los archivos del padre Imming que nos presentaron, aunque incompletos, pudimos identificar dos acusaciones de abuso sexual de menores diferentes y sin relación alguna que de alguna manera fueron referenciados en el archivo del padre Imming para cuando el Sr. Eason se reunió con el Sr. Cottingham en julio de 2002. No pudimos encontrar

de 2002, el arzobispo Beltrán redactó un memorando donde documentaba una reunión entre él mismo y el padre Imming relacionado con la «acusación que había contra él». Para el 31 de marzo de 2003, esta acusación se hizo pública cuando Philip Schovanec presentó una demanda contra el padre Imming, la Arquidiócesis y el arzobispo Beltrán (Corte de Distrito del Condado de Oklahoma, Caso núm. CJ-2003-2744). La demanda alega que «[e]n julio de 2002, [Schovanec] se acercó a la Arquidiócesis para discutir sus demandas contra Imming...». Adicionalmente, el memorando del 23 de noviembre de 2002 que el arzobispo Beltrán preparó refleja que la Arquidiócesis creía que el Sr. Schovanec podría demandar a la Arquidiócesis, lo que provocó que el arzobispo Beltrán llamara y dejara un correo de voz sobre las alegaciones más recientes⁵ para el arzobispo Keleher en la Ciudad de Kansas.

Como se referenció anteriormente, el Sr. Schovanec presentó su demanda el 31 de marzo de 2003. El mismo día, los abogados del Sr. Schovanec emitió un boletín de prensa que anunciaba la presentación de la demanda. Stephen Jones, un prominente abogado de Enid que representaba en aquella época al padre Mickus en acusaciones independientes sobre abuso sexual de menores, envió por fax un boletín de prensa que publicaron los abogados del Sr. Schovanec a Doug Eason, el abogado externo de la Arquidiócesis. Escrito a mano sobre la cubierta del fax al Sr. Eason, se lee el mensaje, «Esto es todo lo que necesitábamos ahora». Varios días después, el 4 de abril de 2003, se publicó un artículo en el *Enid News & Eagle*, que anunciaba que Stephen Jones representaría al padre Imming en la demanda Schovanec. El 9 de abril de 2003, el abogado general externo de la Arquidiócesis, Doug Eason envió una propuesta de Acuerdo Conjunto de Defensa al abogado de Imming, Stephen Jones, quien la ejecutó el 10 de abril de 2003. En el archivo del padre Imming, existe una carta del 9 de abril de 2003 de Stephen Jones a Doug Eason, que contiene varias estrategias de investigación relacionadas con la defensa de la demanda Schovanec. A partir de dicho momento, el archivo del padre Imming está lleno de comunicaciones entre el Sr. Jones, el Sr. Eason (como abogado externo de la Arquidiócesis) y la Sra. Eason (como canciller de la Arquidiócesis). Mucha de la correspondencia detalla los esfuerzos de investigación del Sr. Jones para montar la defensa del padre Imming y resume un testimonio esperado de un testigo, pero también hay correspondencia importante que detalla los esfuerzos del Sr. Jones para que la Arquidiócesis pague sus facturas legales.

una respuesta por escrito del Sr. Eason al Sr. Cottingham, pero es posible que esté incluida en materiales adicionales que el Sr. Eason recientemente nos presentó a nosotros o al asesor externo de la Arquidiócesis. *Consulte* la sección de Cualificaciones del informe relacionadas con el Sr. Eason.

⁵ En el caso Schovanec, el arzobispo Beltrán fue destituido el 12 de noviembre de 2004. En su testimonio jurado, el arzobispo Beltrán señaló que previo a la presentación de la demanda Schovanec, había tomado conocimiento de que el padre Imming hacía que niños pasaran la noche con él en la rectoría de forma rutinaria y regular. el arzobispo Beltrán testificó que no podía recordar cuando tomó conocimiento por primera vez de las pijamadas, pero nunca discutió la práctica con el padre Imming.

Otra acusación sobre abuso sexual de un menor contra el padre Imming se recibió en o alrededor del 30 de mayo de 2003, aun cuando esta acusación no estaba documentada en el archivo eclesiástico del padre Imming. Pudimos ubicar materiales relacionados con esta acusación en los archivos de litigio de la Arquidiócesis, relacionados con la demanda Schovanec. De acuerdo con estos archivos, un sacerdote recibió una queja contra el padre Imming y la compartió con el padre Weisenburger, V. G., quien lo compartió con el abogado externo de la Arquidiócesis, Doug Eason. El Sr. Eason notificó la acusación al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma, el cual refirió el asunto a la Oficina del Procurador del Distrito del condado de Woods. Asimismo, el Sr. Eason proporcionó notificación de la acusación al abogado del padre Imming, Stephen Jones, quien llamó y habló con Allan Mitchel, procurador de distrito adjunto del condado de Woods, sobre las acusaciones. Posteriormente a la conversación del Sr. Jones con el procurador de distrito adjunto, el Sr. Jones se comunicó con la madre de la presunta víctima y sostuvo una conversación telefónica con ella. Luego, el Sr. Jones hizo un seguimiento a la conversaciones del 30 de mayo con el procurador de distrito adjunto y la madre de la presunta víctima con una carta al procurador de distrito adjunto del 3 de junio de 2003, donde aseguraba al procurador de distrito adjunto que la madre de la presunta víctima «no tenía conocimiento de ninguna conducta indecorosa por parte del padre Imming. Ella señaló que su hijo había negado de manera enfática que hubiese ocurrido algo inusual». Sin embargo, no parece que el Sr. Jones hubiera entrevistado a la presunta víctima cuando habló con o envió la carta al procurador de distrito adjunto del condado de Woods. En una conversación del 6 de junio entre el arzobispo Beltrán y la madre de la presunta víctima, la madre de la presunta víctima «se quejó de que el Sr. Stephen Jones continuaba llamándola», y a pesar de cualquier comentario que ella le hubiere hecho al Sr. Jones, ella continuaba expresando su preocupación a la Arquidiócesis relacionada con la acusación que tenía que ver con su hijo después de su conversación del 30 de mayo con el Sr. Jones.

El 8 de julio de 2003, el abogado externo de la Arquidiócesis, Doug Eason, envió una carta a Stephen Jones, el abogado del padre Imming. Esta carta sacó a la luz otro litigio contra el padre Imming. El Sr. Jones se había comunicado con el Sr. Eason «la noche del viernes anterior a la conversación telefónica [del Sr. Jones] con un individuo... quien le proporcionó a usted información sobre el padre Imming. Entiendo que el individuo solicitó que su nombre se mantuviera confidencial. En nuestra conversación telefónica, usted indicó que el hijo de este señor relató un incidente con el padre Imming... que hizo que el hijo de este señor se sintiera incómodo». El Sr. Eason recitó varias políticas de la Arquidiócesis y de la Iglesia relacionadas con la provisión de asistencia a víctimas de abuso sexual de menores y solicitó que el Sr. Jones transmitiera a la presunta víctima y su familia que el arzobispo Beltrán había formulado una «oferta sincera de cuidado pastoral tanto para el hijo como para su familia, que el arzobispo Beltrán deseaba reunirse con la presunta víctima y su familia, y que el único fin de cualquier reunión sería «un encuentro pastoral...». Aun cuando los archivos de la Arquidiócesis no revelan si el Sr. Jones finalmente les transmitió la invitación del arzobispo Beltrán para un encuentro pastoral, para el verano de 2004, el abogado del Sr. Schovanec también estaba representando a

otra presunta víctima, que creemos es la misma presunta víctima que el Sr. Jones identificó al Sr. Eason en el verano de 2003. Una vez que la Arquidiócesis se enteró de la identidad de esta presunta víctima, la Arquidiócesis le proporcionó atención pastoral y terapia.

En 2009, la Arquidiócesis de Oklahoma City resolvió su demanda con el Sr. Schovanec.

El 21 de octubre de 2010, de cara a las preocupaciones presentadas por la Arquidiócesis de la Ciudad de Kansas, el arzobispo Beltrán se comunicó con el padre Imming para discutir preocupaciones de que el padre Imming había estado contratando menores de un bachillerato local en Saint Marys, Kansas (donde reside Imming) para un trabajo de paisajismo / mantenimiento que Imming operaba en aquella época. El 2 de noviembre de 2010, la Arquidiócesis de Oklahoma City supo por la Arquidiócesis de la Ciudad de Kansas, Kansas, que el padre Imming había empleado a un menor que había pasado la noche con Imming en su casa en Kansas para ayudarlo a cuidar niños, y quien había estado metido en el jacuzzi solo con Imming. Aun cuando no hay acusaciones documentadas de abuso sexual de menores que resultaron de esta información, el 8 de noviembre de 2010, a la luz de las preocupaciones que presentó la Arquidiócesis de la Ciudad de Kansas, el arzobispo Beltrán giró instrucciones a Imming para que se mudara a Oklahoma City dentro de 30 días. En una carta del 15 de noviembre de 2010, el padre Imming rechazó la «oferta» del arzobispo Beltrán de mudarse a Oklahoma City, pero asegura al arzobispo que «no habrá más contactos con menores, sin importar la razón». Además, el padre Imming aceptó su secularización en esta carta.

El 20 de junio de 2011, el Vaticano publicó documentos que secularizaban a Imming, los cuales se recibieron en la Arquidiócesis en julio de 2011.

Anteriormente, la Arquidiócesis de la Ciudad de Kansas había identificado a Imming como haber tenido una acusación «sustentada» de abuso sexual de un menor:
<https://media.kansascity.com/livegraphics/2019/pdf/KCArchdiocese-SpecialReport.pdf>.

Padre Francis Albert Mantica

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1927

Ordenado: 24 de marzo de 1959 (Diócesis Albany)

Fallecimiento: 16 de febrero de 1997

El padre Francis Mantica ocupó varios encargos inusualmente breves dentro de la Diócesis de Albany del 1959 a 1963. En septiembre de 1963, se convirtió en capellán de la Fuerza Aérea, pero dicho encargo terminó menos de 1 año después en mayo de 1964. En junio de 1964, el padre Mantica solicitó y se le otorgó permiso para buscar empleo en otra diócesis. Para finales del verano de 1964, el padre Mantica fungía como director adjunto de un bachillerato en un bachillerato católico en Steubenville, Ohio. Nuevamente, este encargo fue extremadamente corto y para octubre de 1964, el padre Mantica estaba buscando empleo fuera de la Diócesis de Albany en un internado católico ubicado en Connecticut. El padre Mantica

trabajó ahí menos de tres semanas. Para entonces, parece que el padre Mantica viajaba por el país hasta que pudiera obtener un nuevo encargo.

En abril de 1965, el padre Mantica le escribió al arzobispo Reed de la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa, buscando un encargo dentro de la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa. Ante la consulta de la Diócesis de Albany sobre el padre Mantica, la Diócesis de Albany informó a la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa que «el padre Mantica hace buen acto de presencia. Prometía ser exitoso en el sacerdocio», y «[s]e considera que necesita ayuda psiquiátrica, pero todos los esfuerzos por convencerlo de obtener ayuda de manera voluntaria han sido infructuosos. Desde el otoño pasado vive con su familia y ayuda a la parroquia cercana de manera personal con el pastor. Además de estas reservas, no hay quejas sobre su conducta personal o moral». Algunos meses antes, el mismo autor de esta carta había escrito varias cartas relacionadas con el padre Mantica para prohibirle a que iniciara esfuerzos para empezar, ya fuera una escuela en Connecticut o una institución para niños con problemas en Nueva York, pero la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa no transmitió dicha información.

En junio de 1965, el padre Mantica recibió su primer encargo temporal dentro de la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa, y pronto se le dio permiso para ayudar con el establecimiento y operación de «Youth Village», una organización para ayudar a niños con problemas. La primera acusación documentada de abuso sexual de un menor de la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa contra el padre Mantica surgió en septiembre de 1966, y las acusaciones se relacionaron con una víctima adolescente. Aun cuando la Arquidiócesis registra en su respuesta a esta acusación como rara, existe una carta sin firmar del padre William Garthoeffner al obispo Reed escrita el 7 de septiembre de 1966, la cual refleja que se hizo una acusación, que ha sido investigada en cierto grado por el padre Garthoeffner, y que «parece mantenerse de pie ante una examinación cruzada». El padre Garthoeffner escribe que la «historia de la presunta víctima se mantiene» y que los «acercamientos del padre Mantica fueron explícitos y repetidos. Anoche, me dio la impresión definitiva de monseñor [Kanaly] que nadie que había escuchado la historia del chico dudaba de la verdad».

En marzo de 1967, el arzobispo Reed suspendió las prerrogativas del padre Mantica e informó más adelante a la Diócesis de Albany de la partida del padre Mantica en una carta de abril de 1967. En particular, no existen registros que documenten que el obispo Reed alguna vez notificó a la Diócesis de Albany de que el padre Mantica había sido acusado de abuso sexual de un menor, y no hay explicación sobre por qué el arzobispo se esperó de septiembre de 1966 a marzo de 1967 para suspender las prerrogativas del padre Mantica.

En respuesta a la solicitud que la firma hizo a la Diócesis de Albany de todos los registros relacionados con el padre Mantica, recibimos un manuscrito de un libro llamado *Una carta (La verdadera historia)*, escrito en 1990 por Mantica (aunque identifica al autor como I.N.R.I. (Implsión de la Investigación Internacional Neológica)), la cual consiste en una serie de cartas escritas por Mantica a diversos individuos que el padre Mantica conoció a lo largo de su vida,

incluso el arzobispo Reed de la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa. En este manuscrito, el padre Mantica señala en una carta al arzobispo Reed, que mientras servía en la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa, tuvo que irse repentinamente en el verano de 1967 porque el arzobispo Reed lo llamó para que le informara que si no es taba fuera del estado de Oklahoma en un periodo de 24 horas, el procurador del distrito arrestaría al padre Mantica. En la misma carta, el padre Mantica escribe, «[e]l joven que me «denunció» a su junta disciplinaria informó nuestros encuentros sexuales de forma exacta. No hay duda del remordimiento, vergüenza y efectos terroríficos que sentí conforme salía en silencio de la audiencia». Más importante, en los registros de la Arquidiócesis, no encontramos ninguno de tal audiencia o procedimiento de la junta disciplinara que incluyera al padre Mantica.

Existe un artículo del 26 de noviembre de 2018 que colabora las acusaciones de abuso sexual de un menor por parte del padre Mantica escrito por «M.H.» una presunta víctima que detalla las acusaciones de abuso del padre Mantica:

<https://www.churchmilitant.com/news/article/catholicmetoo-a-survivor-tells-his-story>

En abril de 1996, la Arquidiócesis de Oklahoma City recibió una segunda acusación de abuso sexual de menores que tuvo lugar en 1967 que involucraba a un sacerdote sin nombre que residía en Oklahoma City Sur contra un adolescente. Con base en los detalles de la declaración de la presunta víctima, creemos que el sacerdote involucrado en esta acusación es el padre Mantica.

Padre James Mickus

Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1944

Ordenado: 1 de junio de 1972

Actualmente suspendido a partir del 2 de noviembre de 2018

El 29 de mayo de 2002, un adulto llamó a la línea directa de Asistencia a Víctimas de la Arquidiócesis (la «línea directa» e informó que el padre James Mickus había abusado de él. El presunto abuso inició cuando la presunta víctima era un adolescente y continuó hasta que tuvo poco más de veinte años. Unos días después de la llamada, el padre Weisenburger, V. G. se encontró con la presunta víctima para hablar sobre la acusación. De acuerdo con documentos contemporáneos, el padre Weisenburger, V. G. encontró que la presunta víctima decía la verdad.

El 9 de junio de 2002, el arzobispo Beltrán y el padre Weisenburger, V. G. se reunieron con el padre Mickus para informarle de la acusación. En esta reunión, el padre Beltrán informó al padre Mickus que se le había acusado de abuso sexual de un menor y reveló la identidad de la presunta víctima. El padre Weisenburger, V. G. explicó que el padre Mickus no tenía ninguna obligación de responder a la acusación en ese momento. De acuerdo con un memorándum interno que escribieron el arzobispo Beltrán y el padre Weisenburger, V. G. en 2006 (cuatro años después de esta reunión), cuando se notificó al padre Mickus de la acusación contra él, este dijo, «creí [que la presunta víctima] tenía dieciocho años cuando esto sucedió, pero si él dice que no tenía dieciocho años, entonces no lo voy a discutir o pelear». Entonces, el padre Mickus aceptó

haber tenido conductas sexuales con la presunta víctima y dijo que «aceptaría cualquier consecuencia que fuera resultado de sus acciones». Posteriormente entrevistamos al arzobispo Beltrán y al arzobispo Weisenburger sobre la acusación y la reunión de junio de 2002 con el padre Mickus. El arzobispo Beltrán señaló que no tenía recuerdos independientes de la reunión de junio de 2002 con el padre Mickus. Sin embargo, luego de revisar el memorando de 2006 señalado arriba, dijo que la supuesta falta de certeza del padre Mickus relacionada con la edad de la presunta víctima en la época de la conducta sexual fue «una tontería» y que, en su opinión, el padre Mickus estaba «aceptando cierta culpa» y «no se estaba defendiendo». Cuando entrevistamos al padre Weisenburger, él dijo que recordaba la reunión de junio de 2002 con el padre Mickus, pero no alguna conversación en específico de la reunión. Dijo que recordaba que el padre Mickus aceptó la conducta sexual con la presunta víctima, pero que el padre Mickus creía que la presunta víctima era mayor de edad entonces. Sin embargo, el padre Mickus no disputaría el recuento de la presunta víctima y se sintió «terrible» sobre la acusación, dijo el padre Weisenburger. Este señaló que la actitud del padre Mickus cambió más tarde y empezó a luchar contra la acusación después de que contrató a su abogado civil, Stephen Jones.

Después de esta reunión del 9 de junio de 2002, el arzobispo Beltrán fue a la parroquia del padre Mickus en esa época y anunció públicamente a la congregación que había suspendido las prerrogativas del padre Mickus, sujeto a investigación de una acusación de abuso sexual que involucraba a un menor. El arzobispo Beltrán envió al padre Mickus al St. Luke Institute en Silver Spring Maryland durante aproximadamente dos semanas para una valoración psicológica. el St. Luke Institute preparó un informe del padre Mickus con base en esta valoración. Los documentos indican que en un principio el padre Mickus autorizó a que el arzobispo Beltrán recibiera una copia de este informe, pero más tarde revocó la autorización. Aun cuando parece que el padre Mickus tenía el derecho de revocar la autorización, la revocación era inconsistente con la práctica establecida en la Arquidiócesis. De acuerdo con el arzobispo Beltrán y otros, los sacerdotes que asistían a una institución como el St. Luke Institute para una valoración y/o tratamiento, normalmente compartían una copia del informe de la institución con el arzobispo. En una carta del 15 de diciembre de 2006 del padre Mickus al arzobispo Beltrán, el padre Mickus estableció que la decisión de no compartir la valoración del St. Luke Institute con el arzobispo Beltrán «era una decisión iniciada por el propio abogado del [arzobispo Beltrán], el Sr. Doug Eason, cuando llamó a Stephen Jones, el abogado [del padre Mickus] y le sugirió que [el padre Mickus] debería retirar el consentimiento». El Sr. Eason dijo que no recordaba haber sugerido al Sr. Jones que el padre Mickus revocara la autorización, y dijo que no creía que habría sugerido que lo hiciera. Al ser entrevistado, el arzobispo Beltrán, el obispo Weisenburger y Doug Eason, todos negaron haber jamás visto el informe de St. Luke.⁶

⁶ A pesar de la revocación de la autorización del padre Mickus, se envió una copia del informe a la Arquidiócesis en un sobre sellado que fue abierto, probablemente por la secretaria del arzobispo Beltrán. De acuerdo con un borrador de una carta del canciller Loutitia Eason al Sr. Jones, cuando se descubrió el sobre contenía el informe de St. Luke

El 27 de junio de 2002, los abogados de la presunta víctima enviaron una carta a la Arquidiócesis amenazando de presentar una demanda contra el padre Mickus y la Arquidiócesis a menos que se pagara una compensación. El 17 de julio de 2002, el padre Mickus presentó una demanda por difamación en el condado de Garfield contra la presunta víctima, en la cual negaba la acusación de abuso sexual. De acuerdo con correspondencia del abogado del padre Mickus (Jones) al Sr. Eason, la cual Stephen Jones nos contó posteriormente durante una conversación telefónica, el objetivo de presentar una demanda por difamación era aprovechar la iniciativa y evitar que la presunta víctima presentara una demanda en lo que el Sr. Jones percibía como un lugar menos favorable. Documentos contemporáneos muestran que el abogado del padre Mickus consultó con el abogado de la Arquidiócesis y abogado general externo, Doug Eason (y probablemente el padre Weisenburger, V. G.) para discutir la estrategia legal detrás de la presentación de la demanda por difamación contra la presunta víctima. Después de que la demanda fue presentada, los documentos muestran que, a solicitud de la Arquidiócesis, el Sr. Jones informó al Sr. Eason sobre los desarrollos en el caso. Adicionalmente, la Arquidiócesis pagó por los honorarios legales que incurrió el padre Mickus al encauzar la demanda. En enero de 2003 (mientras que la demanda por difamación permanecía pendiente), el padre Mickus envió una carta al padre Weisenburger, V. G. invitando a la Arquidiócesis a continuar pagando sus honorarios legales. El padre Mickus escribió que la decisión de demandar a la presunta víctima se hizo con el acuerdo de la Arquidiócesis y que esta estrategia legal había «beneficiado a la Arquidiócesis en términos materiales». (Aun cuando es posible que la Arquidiócesis haya estado obligada bajo la ley canónica a pagar los honorarios legales del padre Mickus si este fuera demandado, no estamos al tanto de un requisito de lo contrario, ya sea canónico u otro, de que la Arquidiócesis pagara el abogado del padre Mickus para demandar a su presunta víctima). Cuando se le entrevistó, el arzobispo Beltrán y el Sr. Eason dijeron que no podían recordar ninguna discusión en particular sobre la presentación de la demanda por difamación o la decisión de pagar por los honorarios del padre Mickus para que lo hiciera. El obispo Weisenburger señaló que solo tenía un recuerdo vago de discusiones relacionados con los planes del padre Mickus de demandar a la presunta víctima, pero que recordaba que el arzobispo Beltrán estaba al tanto de los planes. No existe evidencia de que el arzobispo Beltrán tomó acción alguna para evitar que el padre Mickus presentara la demanda por difamación.

se volvió a sellar el sobre y se envió a Jones sin revisar o copiar el contenido. Jones referenció la explicación de Tish Eason en una carta posterior al Sr. Eason y expresó su frustración de que la Arquidiócesis había poseído el informe de St. Luke durante más de dos semanas sin notificar al padre Mickus. Cuando los entrevistamos, tanto el arzobispo Beltrán como el obispo Weisenburger dijeron que no recordaban este incidente.

A finales de 2002 y principios de 2003, el padre Mickus y su abogado presionaron al arzobispo Beltran para que restaurara sus facultades para el sacerdocio. El arzobispo Beltran remitió la acusación a la Junta de revisión y le pidió que hiciera una recomendación sobre la capacidad del padre Mickus para regresar al sacerdocio activo. La Arquidiócesis proporcionó a la Junta de revisión los materiales del abogado del padre Mickus, incluida una declaración jurada en la que el padre Mickus negó la acusación de abuso sexual y discutió supuestas inconsistencias en la cuenta de la presunta víctima; un informe de un psicólogo de Oklahoma, John Smith, M.D., quien fue contratado por el padre Mickus, y habló de su salud psicológica; cartas de partidarios del padre Mickus; y registros que documentan los antecedentes penales de la presunta víctima.

Sin embargo, la Junta de revisión no recibió diversos tipos de material potencialmente informativo:

Primero, el arzobispo Beltran y el padre Weisenburger, V. G. no compartieron con la Junta de revisión las declaraciones del padre Mickus admitiendo el encuentro sexual pero negando que él supiera que la presunta víctima era menor de edad. En un memorando del 21 de noviembre de 2006 al padre Greg Ingels, el padre Weisenburger, V. G. describió estas declaraciones como «casi inculpativas». En una carta del 5 de diciembre de 2006 dirigida al padre Mickus, en la reunión de junio de 2002, el arzobispo Beltran describió las declaraciones del padre Mickus como «extremadamente preocupantes».

Segundo, la Junta de revisión no pudo entrevistar a la presunta víctima. La Junta de revisión le pidió a la presunta víctima que se reuniera y respondiera preguntas sobre la acusación. La presunta víctima se reunió con la Junta de revisión, acompañada por su abogado que lo defendía en la demanda por difamación ya presentada por el padre Mickus. Este abogado le indicó a la presunta víctima que no respondiera ninguna de las preguntas de la Junta de revisión (y en su lugar intentó recopilar datos que pudieran ser útiles para defender a su cliente). El consejo sobre no responder y la decisión de seguir este consejo, probablemente fue el resultado de la demanda por difamación pendiente, ya que cualquier declaración hecha por la presunta víctima a la Junta de revisión podría haber sido caracterizada por el abogado del padre Mickus como otra declaración «difamatoria», poniendo a la presunta víctima en mayor peligro legal. Durante nuestra entrevista con la presunta víctima, nos dijo que quería comparecer, testificar y responder las preguntas de la Junta de revisión, pero sintió que no podía por temor a la demanda pendiente en su contra.

Tercero, la Junta de revisión solicitó, pero nunca recibió, una copia del informe sobre el padre Mickus elaborado por el Instituto St. Luke. En una carta del 12 de diciembre de 2002 del presidente interino de la Junta de revisión, Dennis J. Moran, Ph.D. al arzobispo Beltran, la Junta de revisión solicitó una copia del informe, declarando: «[nosotros], la Junta de revisión, comprende la necesidad de proceder con su solicitud de manera oportuna. El padre Mickus merece una respuesta oportuna a su solicitud. Sin embargo, creemos que

es muy importante que procedamos de manera exhaustiva, dada la gravedad de las acusaciones en contra del padre Mickus Por lo tanto, solicitamos su ayuda para obtener la información que se solicita». En el borrador de la correspondencia del abogado externo Doug Eason de la Arquidiócesis al Sr. Jones con fecha del 14 de enero de 2003 (que no estaba en el archivo personal del padre Mickus y que pudo o no haber sido enviado), el Sr. Eason escribió «[cada] miembro de la Junta de [revisión] consideró que el informe del Instituto St. Luke era importante para evaluar las acusaciones de abuso sexual por [la presunta víctima] contra el padre Mickus y la determinación de la Junta de [revisión] sobre la idoneidad del sacerdocio del padre Mickus». La carta continuó: «[La] Junta de revisión tuvo problemas al depender únicamente del informe que proporcionó John Smith, MD [la evaluación psicológica presentada a la Junta de revisión por parte del padre Mickus]. Particularmente, algunos de los miembros de la Junta de [revisión] estaban preocupados por las firmes conclusiones del Dr. Smith que fueron un resultado inusual de una reunión tan breve por parte del padre Mickus y del Dr. Smith». La carta borrador del Sr. Eason concluyó: «El enfoque de la Junta de revisión que ha solicitado el Informe de St. Luke es exclusivamente en su tarea de asesorar al arzobispo en su evaluación sobre las acusaciones de abuso sexual por [la presunta víctima] y ayudar al arzobispo en su determinación de idoneidad para el sacerdocio. Al realizar esa función, la Junta considera que el informe de St. Luke es un dato importante». La carta borrador concluyó con el Sr. Eason preguntándole al Sr. Jones si podían discutir la solicitud de la Junta de revisión. No está claro si esta discusión ocurrió. No hay evidencia de que el informe de St. Luke haya sido compartido con la Junta de revisión.

Cuarto, la Junta de revisión no entrevistó a la Sra. Kathy Olsen, quien habló con la presunta víctima a través de la Línea Directa, ni revisó las notas de sus conversaciones con él. Los documentos indican que la Junta de revisión le preocupaba que la comunicación de la presunta víctima con Sra. Olsen fuera confidencial y que se necesitaría una liberación de la presunta víctima para hablar con ella o revisar sus notas. Se le pidió a la presunta víctima que firmara una liberación pero se negó a hacerlo. La Junta de Revisión tampoco entrevistó al padre Weisenburger, V. G., quien había entrevistado a la presunta víctima.

Quinto, la Junta de revisión no entrevistó al padre Mickus con respecto a la acusación. Después de la reunión infructuosa con la presunta víctima, se canceló una reunión programada con el padre Mickus.

El 24 de febrero de 2003, el Dr. Dennis Moran, presidente interino de la Junta de revisión, envió una carta al arzobispo Beltran en la que expresó su frustración porque «los esfuerzos de la Junta de revisión para obtener la información necesaria se frustraron en cada paso por ambas partes a por medio de maniobras legales». La carta identificó varias preocupaciones que no se habían abordado, incluida la degradación del padre Mickus por parte del pastor al pastor asociado al principio de su carrera, cambios frecuentes en las tareas del padre Mickus durante el periodo general del presunto abuso y la no divulgación

del informe de St. Luke. Con respecto al informe de St. Luke, la carta decía «la Junta de revisión quería asegurarse de que el informe del Instituto St. Luke no planteara una preocupación sobre la idoneidad del padre Mickus para volver al sacerdocio». La carta continuó: «[es] importante dejar claro que la Junta de revisión no saca ninguna conclusión relacionada con las preguntas anteriores. Sin embargo, en ausencia de información relevante para estas preguntas y en vista de la incapacidad de la Junta de revisión para obtener la información necesaria, no podemos hacer ninguna recomendación con respecto a la idoneidad del padre Mickus para regresar al sacerdocio. Con cierto pesar y frustración le proporcionamos nuestros hallazgos, o la falta de ellos, en este asunto a usted».

El 14 de marzo de 2003, el arzobispo Beltran emitió un comunicado de prensa en el que se restablecía al padre Mickus al sacerdocio activo. En su comunicado de prensa, el arzobispo Beltran declaró que se refirió a la acusación contra el padre Mickus ante la Junta de revisión, «que, después de una investigación cuidadosa y crítica realizada con sensibilidad por la presunta víctima, me informó que no pudo corroborar la acusación. Basado en los hallazgos de [la Junta de revisión] y en la evidencia disponible para mí en este momento, no encuentro ninguna razón para continuar la licencia administrativa del padre Mickus. También concluyo que no hay evidencia que indique que cualquier niño correría peligro al reinstalar al padre Mickus al sacerdocio sacerdotal».

Durante nuestra entrevista con él, el arzobispo Beltran admitió que su declaración del 14 de marzo de 2003 fue sustancialmente falsa y engañosa. El arzobispo Beltran estuvo de acuerdo en que el comunicado de prensa creó la falsa impresión de que la Junta de revisión había (a) descubierto que la acusación contra el padre Mickus no tiene fundamento; y (b) aprobó su decisión de reinstalar al padre Mickus. En realidad, la Junta de revisión dijo que tenía inquietudes persistentes y, por lo tanto, no podía emitir hallazgos o hacer alguna recomendación sobre la idoneidad del padre Mickus para el sacerdocio.

Tres días después del comunicado de prensa del arzobispo Beltran, el padre Mickus rechazó de manera voluntaria su demanda por difamación contra la presunta víctima.

No hay evidencia en el archivo o en nuestras entrevistas con testigos de que la Arquidiócesis haya llevado a cabo una investigación sobre la acusación de la presunta víctima. Cuando lo entrevistaron, el obispo Weisenburger dijo que no recordaba que la Arquidiócesis realizara alguna investigación, pero dudaba que lo hiciera. Dijo que en ese momento, la Arquidiócesis estaba tratando de descubrir cómo investigar adecuadamente una denuncia de abuso sexual cuando el litigio civil estaba pendiente o inminente, como fue el caso en 2002 con el padre Mickus. El obispo Weisenburger dijo en general que la Arquidiócesis prefería dejar que el proceso de litigio civil siguiera su curso antes de realizar alguna investigación «canónica». Sin embargo, parece que no se observó esta regla general en el caso del padre Mickus. Como se resumió anteriormente, el arzobispo Beltran remitió la acusación a la Junta de revisión para una recomendación en cuanto a la capacidad del

padre Mickus para el sacerdocio mientras la demanda por difamación del padre Mickus aún estaba pendiente contra la presunta víctima. La evidencia indica que el litigio pendiente impidió que la Junta de revisión entrevistara a la presunta víctima y recolectara lo que consideraba información importante y que esto fue un factor en cuanto a la incapacidad posterior de la Junta de revisión para emitir hallazgos o hacer una recomendación sobre la capacidad del padre Mickus para el sacerdocio.

Más tarde en 2003, la presunta víctima del padre Mickus presentó una demanda por difamación contra la Arquidiócesis y del padre Mickus. En la demanda, la presunta víctima sostuvo que el padre Mickus y su abogado (Jones) hicieron declaraciones a la prensa implicando que era un mentiroso. También alegó que la Arquidiócesis había revelado información confidencial incorrecta sobre sus conversaciones con el Sr. Olsen y el padre Weisenburger, V. G... Las acusaciones de la presunta víctima contra el padre Mickus finalmente se rechazaron por falta de servicio, y las acusaciones contra la Arquidiócesis se resolvieron a favor de la Arquidiócesis en juicio sumario. Debido a que la demanda no afirmó ningún reclamo por daños y perjuicios por el presunto abuso sexual (supuestamente porque el estatuto de limitaciones aplicable ya se había ejecutado en ese momento), la pregunta de si el padre Mickus sí había abusado de la presunta víctima no estaba en cuestión en esta segunda demanda.

En junio de 2005, y mientras la segunda demanda aún estaba pendiente, los abogados de la presunta víctima produjeron cintas de audio para la Arquidiócesis de dos supuestas conversaciones telefónicas entre la presunta víctima y el padre Mickus. La primera conversación telefónica tuvo lugar a mediados de 2002, después de que el padre Mickus se reuniera con el arzobispo Beltran y el padre Weisenburger, V. G. y se le notificara de la acusación, pero antes de ir al Instituto St. Luke para evaluación. La segunda ocurrió días después de que regresó del Instituto St. Luke. El archivo incluye transcripciones de estas grabaciones⁷. Una carta con fecha del 26 de junio de 2005 del abogado de la presunta víctima al abogado externo de la Arquidiócesis y el Sr. Eason establece que el Sr. Eason estaba al tanto de las cintas y las transcripciones cuando se presentaron por primera vez a la Arquidiócesis. La Sra. Eason probablemente se enteró de las cintas y las transcripciones al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, pero un memorando del archivo del 22 de diciembre de 2005 indica que supo de su existencia a más tardar en diciembre de 2005. Además, el 26 de enero de 2006 un correo electrónico del Sr. Eason a la Sra. Eason indica que el arzobispo Beltran y el padre Weisenburger, V. G. supieron de las cintas y las transcripciones a más tardar en enero de 2006. En el correo

⁷Las cintas y varias copias de las transcripciones se encontraban entre los materiales recuperados por los funcionarios arquidiocesanos de la casa del Sr. Eason en abril de 2018. También recibimos archivos de litigios del abogado externo de la Arquidiócesis que contenían copias de las transcripciones. Según las representaciones de los actuales funcionarios arquidiocesanos y nuestra revisión independiente de los archivos, parece que a partir de abril de 2018, el archivo personal del padre Mickus en el Centro Pastoral Católico no contenía una copia de las cintas.

electrónico de enero de 2006, el Sr. Eason escribió «Stephen Jones [el abogado del padre Mickus] llamó hace unos minutos. Supongo que el padre Mickus se reunió con el padre W[eisenburger] y. . . el arzobispo [Beltran] y luego llamó a Stephen [Jones]. Stephen quiere una copia de la transcripción con la conversación telefónica [con la presunta víctima]».

Creemos que las cintas producidas para la Arquidiócesis son grabaciones auténticas y precisas de conversaciones telefónicas entre la presunta víctima y el padre Mickus. Esta conclusión se basa en varios factores, incluidos los altos funcionarios arquidiocesanos familiarizados con la voz del padre Mickus escucharon las cintas y confirmaron que uno de los interlocutores es el padre Mickus. Si bien estos funcionarios no son expertos en identificación de voz, creemos que su confirmación respalda la autenticidad de las cintas.

Las cintas contienen varias declaraciones que creemos que respaldan la acusación de la presunta víctima sobre que el padre Mickus abusó sexualmente del menor. Esas declaraciones se resumen a continuación:

- El padre Mickus le pregunta a su presunta víctima si él [Mickus] «irá a la cárcel». La presunta víctima le asegura que no irá a la cárcel porque la presunta víctima primero tendría que denunciarlo ante la policía (lo cual dice que no hará) y porque la ley de limitaciones aplicable (por conducta criminal no identificada) ya se llevó acabo. El padre Mickus expresa alivio, diciendo: «me has quitado un gran peso de encima [sic],. . . . decirme que no voy a ir a la cárcel».

- El padre Mickus agradece a su presunta víctima por llamar a la línea directa e informar la acusación, diciendo que su presunta víctima le hizo «un favor⁸».

- La presunta víctima expresa preocupación de que pueda haber otros como él, supuestamente refiriéndose a otras víctimas de abuso sexual del padre Mickus. En respuesta, el padre Mickus le asegura a la presunta víctima que él era el «único», que «Dios como mi juez. . . no ha sucedido con nadie más», y que «nunca, nunca ha habido una situación así y nunca la habrá en mi vida porque he aprendido mi lección». También dice: «Lo sé. . . estás preocupado por otros jóvenes con respecto a mí. Ya. . . ardí [sic] una vez. Me fui al infierno una vez y nunca lo volveré a hacer, así que nunca más tendrás que temer eso conmigo. Cualquier cosa que haga sería como decir mi edad o algo así».

- Cuando la presunta víctima expresa preocupación porque el padre Mickus pase tiempo con un adolescente en particular, el padre Mickus niega haber hecho algo malo con el menor, pero reconoce que la presunta víctima tenía el derecho de «preocuparse».

⁸ En este momento, el padre Mickus ya se había reunido con el arzobispo Beltrán y el padre Weisenburger, V. G. y se le informó el nombre de la presunta víctima y la acusación en su contra. Por lo tanto, es inverosímil que el padre Mickus estaba confundido en cuanto a la naturaleza de la acusación en su contra, es decir, que el padre Mickus había abusado sexualmente del autor cuando era menor de edad.

- Al hacer referencia a las preocupaciones de la Arquidiócesis, el padre Mickus dice que la Arquidiócesis está preocupada «de que no haya habido otra situación» y «no lo saben con certeza y no puedo decirles porque soy la persona enferma». Mickus recuerda haberle dicho al «obispo» (supuestamente refiriéndose al arzobispo Beltran) que se había «equivocado» y que había confesado tener una «relación» con la presunta víctima, pero insistió en que «nunca ha sucedido nada con nadie más».

- Al discutir qué acción podría tomar ahora la Arquidiócesis con respecto a la acusación, el padre Mickus dice que no sabe, pero que tiene una reunión con el arzobispo Beltran y el padre Weisenburger, V. G. el lunes siguiente y el arzobispo Beltran se reunirá con los feligreses en la iglesia del padre Mickus la semana próxima. El padre Mickus dice que si la presunta víctima decide no «presentar cargos». . . entonces tal vez esto se pueda mantener [*sic*] en un nivel inferior. ¿Sabe a lo que me refiero? Luego, Mickus sugiere que si no tiene que «ir ante un juez y ser arrestado», tal vez el arzobispo podría decirle a los feligreses que sufre de «depresión» y que lo enviaron a un «año sabático». (Al momento de la llamada telefónica, la Arquidiócesis aún no había abordado públicamente la existencia de la acusación. Cinco días después, el arzobispo Beltran fue a la parroquia del padre Mickus y anunció que sus facultades fueron suspendidas en espera de una investigación).

- El padre Mickus dice que «una de las recomendaciones del comité de los cuatro médicos [supuestamente en el Instituto St. Luke] es que no esté cerca de los niños solos». Con respecto a esta recomendación, el padre Mickus dice: «No soy un pedófilo. No me gustan los niños pequeños. Básicamente no me gustan los adolescentes. . . . No soporto la idea de ser un pedófilo. . . No puedo vivir con ese título». La presunta víctima sugiere que puede tener cierta responsabilidad porque tal vez «sedujo [al padre Mickus] demasiado». El padre Mickus está de acuerdo y dice que cree que «hay algo de cierto en eso».

- El padre Mickus dice que ha estado «pensando y orando» sobre cómo le gustaría «venir alguna vez y disculparse con los padres [de la presunta víctima] por mi pecado».

- El padre Mickus expresa gratitud cuando la presunta víctima dice que «lo perdona».

- El padre Mickus promete que la presunta víctima continuará recibiendo asesoramiento por el dolor que le ha causado y se asegurará de que se pague con sus propios fondos personales si es necesario. El padre Mickus dice que «[si] [un consejero a quien la presunta víctima había estado viendo] no le está funcionando, me encantaría pagar por otro consejero». (Las cintas sugieren que el padre Mickus pagó por el asesoramiento de la presunta víctima para varios años).

No hay evidencia de que la Arquidiócesis haya tomado medidas con las cintas de audio hasta más de un año después de recibirlas en junio de 2005, cuando noviembre de 2006 el arzobispo Beltran se enteró de que la presunta víctima estaba discutiendo la

existencia de las cintas/transcripciones en público. Nuevamente, todos los altos funcionarios arquidiocesanos estaban al tanto de la existencia de las cintas/transcripciones a más tardar en enero de 2006. La Junta de revisión Arquidiocesana, que se reunió regularmente, nunca recibió información sobre las cintas/transcripciones. Los documentos en el archivo indican que el arzobispo Beltran se reunió con el padre Mickus en el Centro Pastoral Católico y le pidió que renunciara a sus facultades en noviembre de 2006. En una carta del 15 de noviembre de 2006 del Sr. Jones al Sr. Eason, Jones escribió que el padre Mickus no aceptaría la oferta de jubilación anticipada dadas las circunstancias. En una carta separada al Sr. Eason, el Sr. Jones también cuestionó la autenticidad y precisión de las cintas/transcripciones, aunque no proporcionó evidencia de que se hubieran creado. En una carta del 22 de noviembre de 2006 al padre Mickus, el arzobispo Beltran expresó «conmoción» por la carta del Sr. Jones, escribiendo su oferta de jubilación anticipada al padre Mickus «le brindó la oportunidad de comenzar la jubilación anticipada sin perjuicio de su reputación y sin daño ni escándalo para la parroquia».

En correspondencia posterior con el padre Mickus, el arzobispo Beltran explicó que estaba considerando declarar que las facultades canónicas del padre Mickus «se vieron obstaculizadas debido a causas de naturaleza psicológica». El arzobispo Beltran escribió que tenía «serias preocupaciones sobre [el bienestar emocional del padre Mickus y su habilidad para servir de manera saludable y productiva como sacerdote]». Estas preocupaciones incluían la decisión del padre Mickus de no compartir la evaluación del Instituto St. Luke y las «declaraciones extremadamente preocupantes» que el padre Mickus hizo contra el arzobispo Beltran «en la oficina de [Beltran] en 2002, en presencia del padre Edward Weisenburger, en el momento en que se alegó la acusación de conducta sexual inapropiada con un menor en contra del [padre Mickus]».

Como parte del esfuerzo para eliminar al padre Mickus del sacerdocio basándose en una «enfermedad psicológica», se le aconsejó al arzobispo Beltran que enviara el archivo del padre Mickus a un psicólogo para hacer una recomendación sobre la capacidad actual del padre Mickus para el sacerdocio. La Arquidiócesis contrató al Dr. Paul G. Tobin, Ph.D. (un miembro de la Junta de revisión) para dar una opinión sobre la capacidad del padre Mickus para el sacerdocio. El padre Weisenburger, V. G. envió al Dr. Tobin materiales para su revisión, incluido el archivo personal del padre Mickus, el paquete presentado a la Junta de revisión Arquidiocesana sobre la denuncia en 2002, y las transcripciones de las conversaciones telefónicas entre la presunta víctima y el padre Mickus. En una carta del 21 de enero de 2007 al arzobispo Beltran, el Dr. Tobin dijo que no podía hacer una determinación sobre la capacidad real del padre Mickus para el sacerdocio porque «no se había reunido con [el padre Mickus] ni evaluado su desempeño psicológico actual». Según su revisión de los materiales que se le proporcionaron y «la falta de la oportunidad de la Arquidiócesis [sic] de revisar el informe psicológico en profundidad del hospital de St. Luke», el Dr. Tobin escribió que era «crítico que la Iglesia busque documentación del

desempeño psicológico actual». Por lo tanto, el Dr. Tobin recomendó que el padre Mickus debe publicar el informe del Instituto St. Luke y someterse a una evaluación psicológica con el fin de determinar su capacidad actual para el sacerdocio. El Dr. Tobin identificó potencial de riesgo para la iglesia, sus miembros y el padre Mickus» si no se seguían estas recomendaciones.

El 12 de febrero de 2007, el canonista padre Gregory Ingels envió al arzobispo Beltran un memorándum recomendando que «no se tomen medidas en el caso del padre Mickus y que se le permita permanecer en su asignación actual». Ingels escribió que, en su opinión, era innecesario seguir las recomendaciones del Dr. Tobin a menos y hasta que la presunta víctima tomara «cualquier acción pública, como ir a la prensa». Si eso ocurriera, el padre Ingels escribió: «puede ser necesario que el padre Mickus demuestre nuevamente su capacidad para el sacerdocio por medio de la recomendaciones del [Dr. Tobin]».

Dos días después, el arzobispo Beltran se reunió con el padre Mickus y acordó que era libre de continuar con su actividad actual. No está claro por qué el arzobispo Beltran abandonó el esfuerzo para retirar al padre Mickus. En un correo electrónico del 1° de enero de 2007 al padre Weisenburger, V. G., el arzobispo Beltran escribió que tenía «preocupaciones de conciencia» sobre la declaración de que el padre Mickus impidió el sacerdocio porque no creía que tuviera suficientes datos para concluir que el padre Mickus estaba «realmente trabajando con una enfermedad psicológica en este momento». Cuando recientemente mostró las transcripciones de las grabaciones de audio como parte de nuestra investigación, el arzobispo Beltran dijo que las encontró profundamente preocupantes y que retiraría al padre Mickus del sacerdocio si se le daba la oportunidad en ese momento. No pudo explicar por qué permitió que el padre Mickus permaneciera en el sacerdocio en 2007.

No hay evidencia de que la Arquidiócesis haya tomado medidas adicionales en ese momento con respecto a las acusaciones contra el padre Mickus. El padre Mickus siguió siendo un sacerdote activo desde febrero de 2007 hasta su suspensión en noviembre de 2018. No hay evidencia de que se hayan seguido las recomendaciones del Dr. Tobin. No hay evidencia de que las cintas o transcripciones de las conversaciones telefónicas entre el padre Mickus y la presunta víctima se hubieran compartido alguna vez con la Junta de revisión.

En 2016, el padre Mickus solicitó permiso para concelebrar una misa fúnebre en Wichita, Kansas. La canciller Loutitia Eason preparó un «Testimonio de idoneidad para el ministro sacerdotal» en nombre del padre Mickus. El testimonio afirma que la Sra. Eason había «revisado los archivos del personal del padre Mickus y todos los demás registros que mantenemos y he consultado con aquellos que han servido con él en nuestra Arquidiócesis». El testimonio declaró incorrectamente que el padre Mickus «nunca ha sido suspendido ni castigado canónicamente». Las facultades de Mickus se suspendieron en 2002 después de que se denunciara la acusación y se restablecieron en marzo de 2003. Nos

comunicamos con la Diócesis de Wichita, que confirmó que recibió este testimonio de la Sra. Eason.

Después de que nuestra firma se comprometió en agosto de 2018, y porque el padre Mickus todavía era un sacerdote activo, nos pidieron que revisáramos el archivo del padre Mickus y que presentáramos un resumen preliminar de la evidencia al arzobispo Coakley y a la Junta de revisión. Esta presentación no fue un análisis final del archivo del padre Mickus y nos reservamos el derecho de completar nuestra investigación independiente. Entendemos que según este resumen preliminar, y después de consultar con la Junta de revisión, el arzobispo Paul S. Coakley suspendió las facultades del padre Mickus el 4 de noviembre de 2018, en espera de una investigación más profunda de la denuncia por parte de la presunta víctima.

Enviamos múltiples solicitudes al abogado del padre Mickus para entrevistar al padre Mickus para esta investigación. El padre Mickus rechazó ser entrevistado. En lugar de una entrevista, el padre Mickus estuvo de acuerdo en responder 20 preguntas escritas. Le enviamos 15 preguntas relacionadas con el tema de la acusación y también le proporcionamos copias digitales de las grabaciones de audio con las conversaciones telefónicas. En nuestra opinión, la mayoría de las respuestas del padre Mickus (enviadas a través de su abogado, el Sr. Jones) fueron deliberadamente evasivas y faltas de respuesta. Por ejemplo, el padre Mickus se negó a responder cualquier pregunta relacionada con las cintas de audio alegando que se obtuvieron de manera ilegal, una afirmación que creemos que no está respaldada por las leyes federales y de Oklahoma. El padre Mickus también sostuvo que las cintas pudieron haber sido creadas, aunque no proporcionó evidencia para apoyar esta afirmación, excepto para impugnar la credibilidad de la presunta víctima.

Padre Rocco Perone

Fecha de nacimiento: 1° de mayo de 1920

Fecha de ordenación: 1949

Fecha de deceso: 5 de mayo de 1992

El padre Rocco Perone era miembro de la Sociedad Misionera de San Pablo Apóstol (los «paulistas»). Estuvo en el sacerdocio activo en Texas desde 1958 hasta su retiro en 1988. Durante este periodo, Perone realizó trabajo como misionero en Oklahoma. Murió el 5 de mayo de 1992.

En 2004, la Arquidiócesis recibió una acusación de que el padre Perone había abusado sexualmente de dos adolescentes mientras que el padre Perone estaba sirviendo dentro de los límites geográficos de la Arquidiócesis de Oklahoma City.

El 15 de abril de 2008, la Diócesis de Portland publicó los registros de personal del padre Perone indicando que en marzo de 1989, el padre Perone fue acusado de abusar

sexualmente de un niño inscrito en la escuela primaria St. Philip Neri en Portland, entre principios y mediados de la década de 1950, cuando el padre Perone era un miembro del personal en ese lugar. Según una nota del 21 de marzo de 1989, cuando el padre Joseph Gallagher (superior de los paulistas) se enfrentó al padre Perone con la acusación, el «[padre Perone]» admitió de manera algo oblicua que había abusado sexualmente de al menos dos estudiantes en St. Philip Neri. La razón por la que admitió a más de uno fue cuando se le describieron los eventos, mencionó el nombre de una persona que de hecho pensó que era otra persona. Luego admitió a ambos. Los documentos muestran que en algún momento durante la carrera del padre Perone, los paulistas lo enviaron al Instituto St. Luke en Maryland para su evaluación y tratamiento. Luego fue asignado a una parroquia en San Antonio, Texas, donde supuestamente no se le permitió el acceso a menores.

En 2018, el padre Perone fue acusado de abusar de un menor en Oklahoma durante la década de 1950. El padre Perone también fue incluido en la lista de los Padres paulistas de sacerdotes con reclamaciones creíbles de abuso sexual de un menor, <https://www.paulist.org/the-conversation/list-of-paulist-fathers-credibly-accused-of-sexual-misconduct/>.

Padre Edward Prather

Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1945

Fecha de ordenación: 22 de mayo de 1971

Fecha de deceso: 26 de noviembre de 1996

En algún momento a principios de 1988, el padre James Kastner, V. G. le preguntó al padre William Ross del Panel de Salud de la Arquidiócesis que vigilara el comportamiento del padre Prather después de que los miembros de la parroquia del padre Prather, Nuestra Señora de Fátima en el Parque Nicoma, comenzaran a expresar sus preocupaciones. El 1º de mayo de 1988, el padre William B. Ross envió un informe «[c]on confidencial sobre el comportamiento del padre Edd Prather» al arzobispo Salatka. El informe dice que el padre Ross se había estado reuniendo con los líderes de la parroquia del padre Prather quienes habían transmitido información concerniente sobre el padre Prather. El padre Ross escribió «[E]l Panel de Salud tomó esta información bajo aviso ya que parecía haber alguna indicación de ciertas dificultades mentales. Nuestro diagnóstico con la información limitada que teníamos disponible es que el padre Prather sufre de un tipo de problema de Orden de Carácter que será extremadamente difícil de tratar y probablemente muy difícil de convencerlo de que necesita tratamiento». El informe identificó siete preocupaciones, incluyendo «5) Rectoría: el padre Prather ha alojado y alimentado a varios jóvenes a expensas de la parroquia, a los que se refiere como su familia». El informe también identificó como una preocupación el «estilo altamente manipulador» del padre Prather, afirmando que «hay agendas ocultas y no tan ocultas sobre sus tratos con los párrocos [sic] y sus aconsejados». Las notas del arzobispo con fecha del 5 de mayo de 1988

declaran sobre el padre Prather, «su trato con la juventud, no es bueno. . . no me siento cómodo volviéndote a nombrar sin evaluación. . . No tengo confianza. . . Alto riesgo». Las notas adicionales del arzobispo Salatka del 12 de mayo de 1988, que aparentemente preparó antes de una reunión con el padre Prather, indican que el arzobispo Salatka le resultaba «incómodo ofrecer al [padre Prather] otra asignación en la parroquia» y si el padre Prather se negó a someterse a una evaluación o aceptar una asignación de medio tiempo en el sacerdocio hospitalario, estaría «solo». Según una carta del padre Prather al arzobispo Salatka, los dos se encontraron un día después y durante esa reunión, el padre Prather acordó someterse a una evaluación.

El 21 de mayo de 1988, el arzobispo Salatka envió una carta al padre Prather donde confirmaba que su mandato como pastor en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Nicoma Park terminaría el 30 de mayo de 1988 y que iría a Southdown en Ontario, Canadá para una evaluación. El padre Prather llegó a Southdown y comenzó su evaluación el 19 de junio de 1988. Según una carta del 21 de junio de 1988 del padre Kastner, V. G. al arzobispo Salatka, el padre Kastner, V. G. llamó a un terapeuta en Southdown y le explicó las preocupaciones de la Arquidiócesis, que incluían «el alojamiento» de [padre Prather] hacia hombres jóvenes en la rectoría «había planteado preguntas» sobre el uso de fondos parroquiales por parte del padre Prather. Otros documentos en el archivo se refieren a estos «hombres jóvenes» que viven en la rectoría con el padre Prather como «niños», pero no hay una descripción más específica de sus edades. El archivo no contiene ninguna denuncia de abuso sexual denunciada antes de que el padre Prather fuera enviado a Southdown en junio de 1988.

El padre Prather salió de Southdown a fines de junio de 1988. Las notas del arzobispo Salatka, con fecha del 7 de julio de 1988, hacen referencia a un informe del padre Kastner, V. G., quien estaba en comunicación con el padre Prather y sus terapeutas en Southdown. El arzobispo Salatka escribe: «¿Cómo se relaciona su sexualidad con el tipo de trabajo que le gusta hacer?.. Terrible y pobre juicio al tener jóvenes [sic] que viven en la rectoría».

Después de que el padre Prather regresara de Southdown, le escribió al padre Kastner, V. G. y expresó su deseo de pasar más tiempo ministrando a los jóvenes, particularmente a aquellos afectados por las dependencias de drogas y alcohol. En una carta del 24 de agosto de 1988 al padre Kastner, V. G., el padre Prather informó que House of Life, un programa de recuperación de las drogas para adolescentes de 13 a 19 años, lo contrató como «terapeuta/consejero» de tiempo parcial. También informó que había completado su mudanza de la rectoría en Nicoma Park y estaba viviendo en una casa en Midwest City. El padre Prather envió otra actualización al padre Kastner, V. G. y el 18 de diciembre de 1988 declaró que continuaba su trabajo en House of Life y que también administraba «postratamiento» en la «casa de tres cuartos» de House of Life llamada «Ivanhoe».

Una nota manuscrita sin fecha del arzobispo Salatka (supuestamente de este mismo periodo debido a su ubicación en el archivo del sacerdote de Prather) incluye una serie de «inquietudes» bajo el encabezado «Edd Prather», que incluye «no hay muchachos viviendo con él». Otras inquietudes era que el padre Prather era «evasivo» y «no estaba dispuesto a admitir faltas personales»; que era «inconforme, compulsivo, manipulador»; y que era «malhumorado, aislado, [y tenía] baja autoestima». El memorando concluyó con dos opciones: «1. Aquí. . . House of Life [o] parroquia + House of Life» y «2. Otras diócesis».

En enero de 1989, la Arquidiócesis recibió múltiples acusaciones de que el padre Prather había abusado sexualmente de menores, según documentos en el archivo y múltiples testigos que entrevistamos. Una presunta víctima se presentó en ese momento e informó que el padre Prather había abusado de él y que el abuso comenzó cuando era un adolescente menor y continuó hasta los veinte años. Después de esta presunta víctima siguieron varios otros que reportaron experiencias similares.

Según múltiples testigos (incluidas presuntas víctimas, familiares y personal de la Arquidiócesis), cuando surgieron las acusaciones, se recuperaron materiales de la casa del padre Prather. Aparentemente, estos materiales incluían videos caseros, fotografías Polaroid, revistas pornográficas y libros sobre cómo seducir a los jóvenes. Según múltiples testigos (incluidas dos fuentes de la Arquidiócesis), la Arquidiócesis recibió al menos algunos de estos materiales, incluidas las cintas de video. Parece que el padre Kastner, V. G., en particular, poseyó estos materiales durante cierto tiempo porque describió su contenido a otros. Según los mismos testigos, las cintas de video recuperadas de la casa del padre Prather incluían pornografía producida comercialmente y videos caseros que mostraban al padre Prather participando en actos sexuales con los que parecían ser adolescentes. Además, las fotos Polaroid incluían imágenes de desnudos de los que parecían ser adolescentes. Estas cuentas de testigos se corroboran en parte con una carta escrita por el padre Kastner, V. G. el 24 de enero de 1989, que afirma que una de las presuntas víctimas del padre Prather reportó a su madre que el padre Prather le había tomado fotos cuando estaba desnudo. Según la carta, esta presunta víctima había buscado en la casa del padre Prather y encontró «tres baúles» de material pornográfico, incluidos «videocasetes, libros y revistas, [y] fotografías instantáneas Polaroid que Edd aparentemente tomó en hoteles y moteles en sus viajes». Además de estas referencias en la carta del PADRE Kastner, V. G., el archivo del padre Prather no menciona los materiales recuperados de la casa del padre Prather, ni contiene ninguno de los materiales mencionados anteriormente. Pedimos a los actuales funcionarios de la Arquidiócesis que buscaran estos materiales y nos manifestaron que estos materiales no están en posesión de la Arquidiócesis. El personal de la Arquidiócesis que entrevistamos dijo que no recordaban haberlos visto nunca y que no saben qué pasó con los materiales. Sin embargo, existe evidencia fidedigna (aunque no corroborada) de que los materiales pudieron haber sido destruidos. Una de las fuentes de la Arquidiócesis mencionadas anteriormente es la del

padre Paul Gallatin (ahora fallecido). Cuando lo entrevistamos antes de su muerte, el padre Gallatin dijo que el padre Kastner, V. G. discutió la existencia de las cintas de video con él. El padre Gallatin dijo que le dijo al padre Kastner, V. G. que «quemara» las cintas de video. El personal de la Arquidiócesis con mayor probabilidad de conocer la disposición de los materiales recuperados de la casa del padre Prather es el arzobispo Salatka, el padre Kastner, V. G. y el padre Bill Ross, todos los cuales han fallecido.

En respuesta a las acusaciones denunciadas, el padre Kastner, V. G. llamó a la House of Life el 5 de enero de 1989 para notificarles sobre las acusaciones. Según una nota en el archivo, al padre Kastner, V. G. le dijeron que el padre Prather ya había renunciado a su puesto en la House of Life. Los documentos en el archivo indican que durante este tiempo, el arzobispo Salatka estaba preocupado por una posible demanda contra la Arquidiócesis y el enjuiciamiento penal del padre Prather relacionado con las acusaciones. Según las notas escritas a mano con fecha del 10 de enero de 1989, el arzobispo Salatka escribió una lista de preocupaciones con respecto al padre Prather incluyendo las palabras «demandar» y «enjuiciar». (El padre Kastner, V. G. luego escribiría al padre Prather que el riesgo de una demanda «no era como se ‘imaginaba’» como [el padre Prather] parecía pensar y que «Hemos tenido mucha suerte de que no se haya presentado ninguna demanda, ¡hasta ahora!»).

En una reunión con el padre Prather alrededor del 10 de enero de 1989, dijo el arzobispo Salatka que el padre Prather lo estaba enviando a Southdown para una evaluación y un tratamiento adicional. El padre Prather llegó allí el 29 de enero de 1989. El 24 de enero de 1989, el padre Kastner, V. G. envió un informe de 19 páginas sobre el padre Prather a los terapeutas de Southdown. El informe incluye las impresiones detalladas del padre Kastner, V. G. sobre el padre Prather y su personalidad, así como una discusión sobre las acusaciones en su contra. El padre Kastner, V. G. escribió que «[e]n cada tarea, el enfoque principal del tiempo y la energía [del padre Prather] fue el sacerdocio juvenil», y agregó que «[él] siempre tuvo la incómoda sensación de que con el tiempo el sacerdocio juvenil del padre Prather] era muy inapropiado y poco saludable: parecía que sus relaciones con los jóvenes eran demasiado intensas, estaban demasiado destinadas a hacer que los jóvenes fueran demasiado dependientes de él y demasiado diseñadas para su beneficio». El padre Kastner, V. G. escribió «[d]urante los últimos diez o doce años, muchos observadores estaban incómodos con la práctica creciente del padre Prather sobre tener hombres jóvenes en la adolescencia y principios de los veinte años viviendo con él y haciendo frecuentes viajes de vacaciones con él. Pero no fue sino hasta hace un mes que las acusaciones en primera persona (o cualquier otra acusación) finalmente se hicieron a las autoridades de la Iglesia cuando hubo algún delito. Un joven finalmente dio un paso adelante, y cuando lo hizo, también lo hicieron varios otros».

El padre Kastner, V. G. escribió que «el patrón con todas [las víctimas] era bastante similar. Por lo general, era un joven en su adolescencia con problemas, a menudo con las

drogas y el alcohol, o simplemente problemas para llevarse bien con sus padres». El padre Prather invitaba al adolescente a que se fuera a vivir con él y, a menudo, le brindaba «ayuda real» para tratar sus problemas. «El padre [Prather] se convirtió en ‘papá’, su rectoría y sus ocupantes se convirtieron en ‘familia’. Cada vez más se le insistía al joven en dejar a sus padres y depender de su nueva figura paterna», el informe del padre Kastner, V. G. dice. «Se construyó una dependencia cada vez más fuerte; cada vez más, el joven fue recompensado con viajes caros y regalos lujosos. Y gradualmente el elemento sexual se hizo más y más claro». Según el informe, el padre Prather diría a las presuntas víctimas que tenía «un gran hambre de piel; pido muy poco», y que tales declaraciones a menudo preceden a los masajes nocturnos que terminaron en abuso sexual. «Ahora que la situación ha surgido y todos pueden verla tal como es, los niveles de dolor e ira son altos; la sensación de traición es abrumadora», escribió el padre Kastner, V. G.

Con respecto al trabajo del padre Prather en The House of Life, el padre Kastner, V. G. escribió que «hasta donde se puede determinar, [el padre Prather] nunca participó en ningún abuso sexual en The House [of Life], pero sí utilizó sus contactos de allí para llevar a los graduados para vivir en su rectoría». Los testigos que entrevistamos confirmaron que el padre Prather iría rutinariamente a The House of Life para «aconsejar» a los jóvenes y que algunos de estos jóvenes luego irían a vivir con el padre Prather.

El 26 de enero de 1989, el director ejecutivo de Southdown, el padre John Allan Loftus, envió una carta al padre Kastner, V. G. donde le agradece por su «declaración reflexiva y cuidadosamente elaborada sobre el padre Prather», y agrega que «será de gran ayuda a medida que comencemos el proceso de curación para él».

No existe documentación en el archivo que la Arquidiócesis hubiera notificado alguna vez al público sobre las acusaciones hechas en enero de 1989 o el hecho de que el padre Prather había sido enviado a Southdown. La Arquidiócesis no dio a conocer las razones de la partida del padre Prather o su paradero en ese momento. Además, no existe evidencia de que el padre Prather alguna vez fuera denunciado a las autoridades o al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma.

Mientras en Southdown, el padre Prather mantuvo correspondencia con el arzobispo Salatka sobre su posible próxima misión. En una carta del 24 de mayo de 1989, el arzobispo Salatka estuvo de acuerdo con el padre Prather en que «bajo las circunstancias, sería mejor para usted considerar continuar su sacerdocio en otro estado y diócesis. Parece que tiene alguna diócesis en mente. En última instancia, dependería del obispo del lugar. Obviamente él querría saber los hechos. Ciertamente le ayudaré cuando llegue el momento». Después de que se dio de alta al padre Prather de Southdown en julio de 1989, se quedó con un amigo, el padre Donald Zimmerman, en Belleville, Kansas, durante aproximadamente un año. Durante este periodo, se contactó con varias diócesis para

solicitar una nueva asignación y se mantuvo en contacto regular con el arzobispo Salatka y el padre Kastner, V. G.

Creemos que los documentos muestran un esfuerzo del padre Prather para engañar a otras jurisdicciones sobre la verdadera naturaleza de su conducta que se informó en enero de 1989, específicamente, el padre Prather intentó enmarcar el problema como una «adicción sexual» que involucra solo a adultos que están de acuerdo. Parece que el arzobispo Salatka pudo haber estado consciente y haber sido cómplice del esfuerzo del padre Prather para el engaño.

En las primeras presentaciones a los posibles obispos, el padre Prather incluyó una «reflexión teológica» de dos páginas que escribió mientras estaba en Southdown. Esta reflexión teológica contenía solo una referencia específica a la conducta que se reportó en enero de 1989: que su «relación inapropiada y comportamiento sexual con un joven de 24 años que me importaba mucho fue descubierta y transmitida por la diócesis». El padre Prather omitió que este comportamiento sexual en particular pareciera haber comenzado cuando el joven era menor de edad y había continuado hasta los veinte años, información que se reportó al arzobispo Salatka y el padre Kastner, V. G., según los documentos disponibles y las entrevistas que realizamos. El 17 de septiembre de 1989, el arzobispo Salatka envió al padre Kastner, V. G. una nota con la reflexión teológica de Prather. El arzobispo Salatka preguntó al padre cuál era la «evaluación» de Kastner, afirmando que «no es lo suficientemente específico sobre cuáles fueron los problemas de los que se está recuperando». No hay seguimiento de este memorando documentado en el archivo del padre Prather.

El 10 de enero de 1990, el padre Prather le escribió al padre Kastner, V. G. lamentando su falta de éxito en la búsqueda de una nueva asignación. El padre Prather escribió que había llegado a la conclusión de que no debía continuar enviando su reflexión teológica en su contacto inicial con posibles diócesis porque estaba causando que los obispos «llegaran [] a demasiadas conclusiones erróneas», es decir, la «pedofilia». El padre Prather escribió: «[lo] que tenga ver con la sexualidad es una mala noticia hoy en día, sin agregar el miedo o la fantasía de la participación infantil». El padre Prather le escribió al padre Kastner, V. G. diciendo que, en el futuro, no discutiría las razones por las que dejó la Arquidiócesis en su contacto inicial con posibles obispos, sino que adjuntaría la «evaluación final de Southdown, que se centra en mi recuperación de la adicción sexual». El padre Prather dijo que podría proporcionar «detalles adicionales» en reuniones en persona con posibles obispos.

En una carta del 16 de febrero de 1990 al padre Kastner, V. G., el padre Prather escribió que «debe estar seguro de que los obispos saben que no están tratando con

pedofilia⁹». Tiene sentido, especialmente en la Iglesia y el mundo de hoy. «Mis primeras cartas a los obispos dejaron demasiadas preguntas. Desearía poder volver a hacerlas, pero por supuesto que no puedo». En una actualización del 11 de marzo de 1990 al arzobispo Salatka y al padre Kastner, V. G., el padre Prather escribió: «Espero que continúen siendo positivos y veraces, sin hacer hincapié en la pedofilia, etc.». Los archivos también contienen cartas de los obispos al arzobispo Salatka preguntando sobre cartas crípticas que habían recibido del padre Prather. Por ejemplo, el arzobispo Daniel E. Sheehan de Omaha le escribió al arzobispo Salatka el 15 de marzo de 1990 diciendo que había recibido una carta del padre Prather. El arzobispo Sheehan escribió: «[En] estos días todos tenemos mucho cuidado en proporcionar cualquier entorno para los extraños. Habla sobre su tratamiento y atención, pero nunca define con precisión qué podría haber sido «un comportamiento inaceptable». Evidentemente, él no puede funcionar en su área. Tampoco estoy seguro de que pueda funcionar en nuestra área, pero agradecería cualquier información confidencial que puedan proporcionarme». En respuesta a una de esas cartas, el arzobispo Salatka escribió que la situación del padre Prather «es algo complicada». El archivo no contiene documentación sobre qué tipo de información ya fuera el arzobispo Salatka o el padre Kastner, V. G. pudo haber proporcionado a los posibles obispos por teléfono o en reuniones en persona.

Como parte de nuestra investigación, solicitamos documentos relacionados con el padre Prather de las diócesis de Richmond, Virginia, y Joliet, Illinois (donde el padre Prather sirvió después de que dejó la Arquidiócesis). En una carta a la Diócesis de Richmond, el padre Prather escribió sobre la conducta que condujo a su expulsión de la Arquidiócesis, diciendo que había «expresó [su] afecto de forma inapropiada al tocar a tres personas [que] le importaban mucho». Luego identificó a estos tres individuos por su nombre y dieron sus respectivas edades, 30, 22 y 24. Nuevamente, el padre Prather no reveló ningún contacto «inapropiado» que involucrara a menores.

En una nota escrita el 12 de abril de 1990 contenida en los archivos de la Diócesis de Richmond, el obispo Foley resumió una conversación telefónica con el arzobispo Salatka sobre el padre Prather. La nota dice: «[el padre Prather] parece haber superado sus problemas al centrarse en los hombres jóvenes de veintitantos años haciéndolos dependientes de él. . . . El arzobispo Salatka dijo que no hubo pedofilia involucrada y que él sepa, no hubo actos homosexuales probados en el sentido estricto de ese término». Las notas escritas a mano del obispo Foley sobre esta llamada indican que los «problemas del padre Prather se centraron en [sic] reunir jóvenes, no menores sino de alrededor de 20

⁹ Es posible que el padre Prather estuviera haciendo una distinción técnica entre «pedofilia», que en un entorno clínico significa atracción sexual hacia niños prepúberes, y «ephebophilia», que en un entorno clínico significa atracción sexual hacia niños pospúberes en la adolescencia media a tardía. Sin embargo, no tenemos evidencia de que el padre Prather estuviera consciente de esta distinción técnica y es igualmente plausible que el padre Prather estaba usando la palabra «pedofilia» en el mismo sentido en que el público en general usa el término para referirse a cualquier interés sexual en menores.

años». En una carta del 30 de abril de 1990 al obispo Imesch de la diócesis de Joliet, el arzobispo Salatka escribió que «aceptaría la responsabilidad de [las «Acciones del padre Prather]» si el obispo Imesch lo aceptaba.

El arzobispo Salatka más tarde testificó en una demanda civil que involucra acusaciones de abuso sexual contra el padre James Rapp (que se aborda en otra parte de este Informe). En la declaración realizada el 30 de agosto de 2001, el arzobispo Salatka declaró que estaba al tanto de dos «incidentes de conducta sexual inapropiada por parte del clérigo», una de las cuales involucraba al padre Prather. Cuando se le preguntó si alguna vez reveló la mala conducta sexual del padre Prather con el obispo Imesch, el arzobispo Salatka testificó «No. Yo lo habría hecho si él lo hubiera. . . pedido una recomendación, eso hubiera sido cuando yo. . . , él hizo lo contrario. Él recibió un informe del lugar, el instituto de tratamiento [Southdown], y eso estuvo bien, pero no es mi informe. Le habría dicho que lo había despedido y que no iba a regresar a la Arquidiócesis». El arzobispo Salatka explicó que no le proporcionó al obispo Imesch los detalles de la mala conducta del padre Prather, pero lo habría hecho si le hubieran preguntado, diciendo: «Oh, ciertamente lo habría hecho, porque conocía muy bien ese caso, y le diré otra cosa, me enteré del caso, la madre [de una de las presuntas víctimas] me contó al respecto, investigó y encontró los hechos y los averiguó, confrontó [al padre Prather] y le dije que había terminado a pesar de que estaba a punto de recibir tratamiento».

El padre Prather sirvió en la Diócesis de Richmond desde agosto de 1990 hasta febrero de 1991. Los documentos indican que luego solicitó y recibió una asignación de la Diócesis de Joliet, Illinois, para estar más cerca de su hermana, que estaba enferma. El padre Prather murió en 1996. Los archivos que recibimos de las Diócesis de Richmond y Joliet no contienen ninguna denuncia de abuso sexual contra menores.

En 2004, la Arquidiócesis recibió un informe de un hombre que dijo que el padre Prather abusó sexualmente de él cuando era un adolescente. Las circunstancias de este alegato son consistentes con otros alegatos contenidos en el archivo y con la información obtenida durante nuestra investigación.

James Francis Rapp

Fecha de nacimiento: 21 de mayo de 1940

Fecha de ordenación: 21 de octubre de 1967

Laicizado: 21 de septiembre de 2009

Actualmente encarcelado

El padre James Rapp se ordenó en 1967 y era miembro de los Oblatos de San Francisco de Sales con sede en Toledo, Ohio. El padre Rapp trabajaba como maestro en la escuela secundaria Judge Memorial en Salt Lake City, Utah, cuando fue acusado por primera vez de conducta sexual inapropiada que involucraba a menores. Rapp dejó la escuela y en 1973 se tomó una licencia de cinco años. En 1978, fue reinstalado por los

Oblatos y en la década de 1980, fue enviado a la escuela secundaria Lumen Christi en Jackson, Michigan, donde trabajó como jefe de mantenimiento de edificios y como entrenador de lucha libre. En 1984, un estudiante de la escuela acusó al padre Rapp de abuso sexual. Los registros muestran que en 1986, los Oblatos enviaron al padre Rapp al Instituto St. Luke en Maryland para una evaluación de un mes y luego a la Casa de Afirmación en California durante ocho meses de tratamiento hasta que se cerrara la Casa de Afirmación. Después de salir de la Casa de Afirmación, el padre Rapp sirvió durante tres años en la Diócesis de Joliet, Illinois, aparentemente sin incidentes.

A principios de 1990, el arzobispo Salatka contactó a los Oblatos para solicitar un pastor para la Iglesia de la Asunción en Duncan, Oklahoma. El Provincial de los Oblatos, el padre Alfred Russell, más tarde testificó que inicialmente le dijo al arzobispo Salatka que ninguno de los Oblatos había expresado interés en su solicitud. Pero el padre Russell testificó que durante una visita nocturna a Oklahoma City, le dijo al arzobispo Salatka que «hay uno, y no utilicé el [nombre del padre Rapp] en ese momento: quién había pasado por la Casa de la Afirmación. Fue enviado allí para un programa que trata con algunas dificultades sexuales». Russell testificó que le dijo al arzobispo Salatka que esas dificultades eran con los «jóvenes», aunque no usó la palabra «pedofilia» y no proporcionó ningún otro detalle, excepto que el padre Rapp tuvo una «respuesta positiva» al programa de tratamiento.

En su declaración de 2001, el arzobispo Salatka negó que el padre Russell le contara sobre el historial de conducta sexual inapropiada con menores del padre Rapp. El arzobispo Salatka testificó que el padre Russell le dijo que el padre Rapp tenía «algún problema vago» pero no lo identificó. El arzobispo Salatka testificó que si el problema hubiera sido «grave», esperaba que el padre Russell se lo hubiera revelado. Sin embargo, los documentos en el archivo del padre Rapp sugieren que al arzobispo Salatka se le notificó que el padre Rapp había recibido tratamiento en dos centros de tratamiento para trastornos psicológicos. Las notas escritas por el arzobispo Salatka que hacen referencia al padre Rapp mencionan «St. Luke 'y' [Casa de] Afirmación en California». Las notas del arzobispo Salatka también incluyen la frase «no hay acusaciones públicas». Cuando se le preguntó acerca de estas notas en su declaración, el arzobispo Salatka testificó que el Instituto St. Luke y la Casa de Afirmación tratan otros asuntos además de la mala conducta sexual, como el alcoholismo. También declaró que «ninguna acusación pública» podría referirse al alcoholismo o la mala administración financiera. El arzobispo Salatka confirmó en su declaración que no le preguntó al padre Russell sobre la naturaleza del «Problema» del padre Rapp y no buscó los registros médicos del padre Rapp en el Instituto St. Luke o la Casa de Afirmación antes de dar la bienvenida al padre Rapp a la Arquidiócesis.

El 20 de abril de 1990, el obispo Imesch de la Diócesis de Joliet (donde el padre Rapp había estado sirviendo durante aproximadamente cuatro años) escribió al arzobispo Salatka discutiendo el momento del traslado del padre Rapp a la Arquidiócesis de

Oklahoma City. En la carta, el obispo Imesch dijo que había revisado la correspondencia entre él y el Provincial de los Oblatos. El obispo Imesch escribió que «[e]n la carta original del Provincial para mí, dice: 'Permítanme asegurarles que nuestra Provincia asume cualquier responsabilidad por las acciones de cualquiera de nuestros hombres». El obispo Imesch le dijo al arzobispo Salatka que había respondido al Provincial expresando gratitud por esta garantía¹⁰.

Los documentos reflejan que el 27 de diciembre de 1990, el arzobispo Salatka nombró al padre Rapp como pastor de la parroquia de la Asunción en Duncan (y sus misiones en Marlow, Rush Springs y Ryan, Oklahoma).

En una carta del 15 de abril de 1994, el obispo de Lansing, Michigan, Kenneth J. Povish notificó al arzobispo Beltran que el padre Rapp «ha sido acusado de abusar sexualmente de un chico de secundaria» en 1985 mientras estaba estacionado en la escuela secundaria Lumen Christi en Jackson, Michigan. «Los Oblatos lo sacaron por otras acusaciones y lo enviaron a terapia antes de reasignarlo a otra parte. Tememos que surjan más víctimas de los ex alumnos de la escuela secundaria Jackson», decía la carta. Continuó: «[a la luz de estos acontecimientos, estoy obligado a alertarlo sobre los peligros potenciales del padre Rapp que continúa en el ministerio en la Arquidiócesis [de Oklahoma City]». El obispo Povish también adjuntó una carta del 30 de marzo de 1994 que había escrito al padre James F. Cryan, el Provincial de los Oblatos, en donde escribió: «[mi recuerdo] es que la comunidad Oblata tomó medidas sobre James Rapp en un asunto como este hace varios años. Sería útil analizar las medidas terapéuticas que se tomaron, etc. También es aconsejable ponerlo en licencia administrativa tan pronto como terminen las liturgias de Pascua».

Lo anterior fue seguido por una carta del 17 de abril de 1994 del padre James Cryan al arzobispo Beltran que decía «Le escribo para informarle que el padre James Rapp, OSFS, de nuestra comunidad, que actualmente sirve en la Arquidiócesis de Oklahoma City, puede ser nombrado en una demanda civil en relación con acusaciones de conducta sexual inapropiada a un menor en 1984-1985, en la escuela secundaria Lumen Christi en la Diócesis de Lansing». Cryan escribió que el padre Rapp había sido retirado de la escuela secundaria Lumen Christi en 1985 y enviado al Instituto St. Luke en Maryland para evaluarlo. Esto fue seguido por un periodo de ocho meses de terapia hospitalaria en la Casa de Afirmación en Montera, California, explicó el padre Cryan. El padre Cryan escribió que

¹⁰ En la misma carta al arzobispo Salatka, el obispo Imesch se dirigió al tema del padre Edd Prather, quien había solicitado recientemente un puesto en la Diócesis de Joliet después de ser obligado a abandonar la Arquidiócesis de Oklahoma City en medio de acusaciones de abuso sexual. (El padre Prather se discute en otra parte de este Informe). El obispo Imesch escribió: «[En relación con Edd Prather, estamos muy dispuestos a aceptarlo. . . [si lo] invitamos al ministerio en la Diócesis de Joliet. . . Le pediré una carta de recomendación y también algunas garantías de que la Arquidiócesis asumirá cualquier responsabilidad en la que pueda incurrir el padre Prather. . . Supongo que estaría de acuerdo con esto». El arzobispo Salatka respondió que asumiría la responsabilidad del padre Prather

después de completar su tratamiento, el padre Rapp comenzó a trabajar en la Diócesis de Joliet sin incidentes. El padre Cryan escribió que tenía entendido que «el tratamiento fue exitoso y el padre Rapp pudo regresar al ministerio regular», que «no estaba al tanto de ninguna advertencia o recomendación adicional», y que «[no] tenemos razón para creer que ha habido alguna actividad inadecuada desde 1986». La carta de Cryan también afirmó que «entiendo que mi predecesor provincial hizo que todo esto lo supiera el arzobispo Salatka cuando Jim [Rapp] fue a Duncan».

En una nota del 4 de mayo de 1994 al archivo titulada «Demandas de actividades relacionadas con la pedofilia», el arzobispo Beltran confirmó la recepción de las cartas del obispo Povish y a las que hace referencia el padre Cryan y notó que había hablado con el padre Cryan por teléfono sobre el asunto.

En la misma fecha, el arzobispo Beltran envió una carta al padre Cryan en donde escribió que «no deseaba suspender al padre Rapp de su ministerio actual». Sin embargo, el arzobispo Beltran estableció varias condiciones que debía cumplir el padre Rapp para permanecer como pastor en Duncan. Primero, exigió que el padre Cryan enviara al padre Rapp a «un centro terapéutico aprobado» para someterse a una nueva evaluación profesional y que los resultados de esta evaluación se compartieran con él. Además, en la medida en que el pastor asociado en Duncan, el padre Marc Clifford (también un oblatos) no estaba al tanto de la situación que involucraba al padre Rapp, el arzobispo Beltran exigió que el padre Cryan le informara los detalles completos. Además, después del regreso del padre Rapp de su nueva evaluación, el arzobispo Beltran escribió que designará a un sacerdote para supervisar y monitorear al padre Rapp e informar al arzobispo Beltran «en caso de que surgieran problemas o que se descubriera que el padre Rapp estuviera en apuros». Finalmente, el padre Clifford «asumiría todo el ministerio relativo a los jóvenes o adultos jóvenes en la Parroquia de la Asunción» y «el padre Rapp no debe participar en actividades para jóvenes o adultos jóvenes sin la presencia del padre Clifford o al menos otros dos adultos», escribió el arzobispo Beltran.

En 2001, varios individuos, incluido el arzobispo Beltran, se vieron involucrados en una demanda civil presentada por una de las presuntas víctimas del padre Rapp. Su testimonio de demanda y los documentos disponibles para nosotros confirman que ninguna de las condiciones prescritas por el arzobispo Beltran en su carta del 4 de mayo de 1994 se llevó a cabo o se les dio seguimiento.

Primero, no hay evidencia de que el padre Rapp fuera a otra evaluación, como el arzobispo Beltran había exigido. El arzobispo Beltran testificó que nunca hizo un seguimiento con los oblatos para confirmar que habían enviado al padre Acude a un centro de tratamiento para una evaluación, y testificó que nunca recibió un informe de dicha evaluación.

Segundo, no hay evidencia de que el padre Clifford, el pastor asociado en Duncan bajo el padre Rapp, se le hubiera informado de las acusaciones contra el padre Rapp o su historial de conducta sexual inapropiada antes del arresto del padre Rapp por abuso sexual lascivo en 1999. El arzobispo Beltran testificó que nadie de la Arquidiócesis notificó al padre Clifford sobre la situación que involucraba al padre Rapp, y que nadie de la Arquidiócesis contactó a los Oblatos para confirmar que habían informado al padre Clifford sobre la situación. El padre Clifford testificó que no sabía que el padre Rapp había sido acusado de abuso sexual de menores y había recibido tratamiento por trastornos sexuales hasta después de su arresto. Nadie le contó sobre la acusación de 1994, testificó el padre Clifford.

Tercero, no hay evidencia de que el arzobispo Beltran haya tomado medidas significativas para garantizar que el padre Rapp no interactuaba con los jóvenes sin supervisión. El arzobispo Beltran testificó que le dijo al padre Rapp que no debía estar cerca de menores sin supervisión y que el padre Rapp había aceptado esta condición. El arzobispo Beltran testificó que confiaba en la palabra del padre Rapp. El arzobispo Beltran testificó que no notificó al padre Clifford sobre la restricción del sacerdocio del padre Rapp, aunque el padre Clifford también testificó que no estaba seguro de cómo cumpliría con dicha directiva, incluso si se le hubiera comunicado. (Tanto el arzobispo Beltran como el obispo Weisenburger nos dijeron cuando fueron entrevistados que, en la situación actual, reconocen la realidad de que una restricción al sacerdocio que prohíbe todo contacto juvenil es prácticamente imposible de aplicar, especialmente para un pastor de una parroquia).

Cuarto, y con respecto a la designación de un supervisor al padre Rapp, el arzobispo Beltran testificó que le pidió al padre William Ross reunirse con el padre Rapp con regularidad y enviar los informes. Pero cuando se le preguntó cuántas veces se había reunido el padre Ross Rapp, el arzobispo Beltran testificó que el padre Ross «no dio seguimiento a esto», y no hay evidencia en el archivo del padre Rapp sobre si el padre Ross alguna vez se reunió con el padre Rapp entre 1994 y su arresto en 1999.

El 12 de junio de 1994, el padre Cryan envió una carta al arzobispo Beltran confirmando que se había presentado una demanda contra el padre Rapp y los Oblatos en Michigan. El padre Cryan también dijo que haría que el padre Rapp terminara las autorizaciones médicas para que las instalaciones de sus tratamientos anteriores pudieran enviar sus informes al arzobispo Beltran para revisarlos.

El 14 de junio de 1994, el Instituto St. Luke envió al arzobispo Beltran su evaluación del padre Rapp de 1986. Los extractos de la evaluación de St. Luke se citan en artículos de noticias publicados por *The Washington Post* y *The Daily Oklahoman*. Como se informa en estos artículos, el informe de St. Luke declaró que el padre Rapp tenía antecedentes de «contacto sexual. . . con varios jóvenes repartidos a lo largo de 20 años». El informe declaró que «[e]l diagnóstico de efebofilia fija, que es una atracción sexual

hacia los adolescentes varones, se puede hacer sin equivocaciones. De la historia del padre Rapp queda claro que su comportamiento efebofilíaco se extiende durante muchos años y con una serie de contactos». El informe continuó: «Estos trastornos sexuales aparentemente no son curables sino tratables, de la misma manera que el alcoholismo es una condición incurable pero tratable», pero fue «muy importante que el padre Rapp no esté en presencia de jóvenes sin otro adulto responsable en el lugar¹¹».

El 17 de junio de 1994, el padre Bernard J. Bush, el ex director de la Casa de Afirmación envió una carta al arzobispo Beltran sobre los registros médicos del padre Rapp de la Casa de Afirmación, que cerró en junio de 1987. El padre Bush le dijo al arzobispo Beltran que todos los registros médicos y clínicos de la Casa de Afirmación fueron enviados a la Diócesis de Worcester, Massachusetts, y el padre Bush «no sabía si ya eran accesibles, ni a quién se escribiría para obtenerlos». Bush escribió que «consideramos que [el padre Rapp] tuvo un resultado muy exitoso al tratamiento» y que «estábamos seguros de que él podría funcionar bien en el sacerdocio pastoral». Sin embargo, el padre Bush agregó que «[como] siempre fue el caso, ciertamente se recomendó algún tipo de asesoramiento continuo». El archivo no contiene ninguna evidencia de que el arzobispo Beltran haya intentado contactar a la Diócesis de Worcester para los registros del padre Rapp de la Casa de Afirmación.

No hay evidencia de que después de recibir esta información en 1994, el arzobispo Beltran realizara una investigación independiente sobre la acusación contra el padre Rapp o el historial de conducta sexual inapropiada del padre Rapp. El arzobispo Beltran testificó que no creía que fuera su responsabilidad llevar a cabo tal investigación. Tampoco hay evidencia de que el arzobispo Beltran hubiera notificado a ninguno de los feligreses en Duncan en 1994 sobre la acusación contra el padre Rapp o sus antecedentes de conducta sexual inapropiada.

Además, supimos que en 1997, el padre Rapp se mudó de la rectoría a una casa unifamiliar para vivir solo en Duncan. Aunque el arzobispo Beltran nos dijo que no habría aprobado dicha mudanza, una fuente nos informó que el arzobispo Beltran estaba al tanto y aprobó la mudanza en ese momento.

Durante los próximos cinco años, el padre Rapp siguió siendo pastor en la Asunción de la Bienaventurada Virgen María en Duncan. Durante este tiempo, abusó repetidamente

¹¹ El artículo *The Washington Post* está disponible en: <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/05/21/okla-archbishop-failed-to-oust-priest/1e6c9365-90b5-46fa-9def-eba27da633d6/>. El artículo *The Daily Oklahoman* está disponible en: <https://oklahoman.com/article/2795478/records-show-priests-history-of-molestation-judge-allows-public-release-of-information>.

de un adolescente (por el que luego fue condenado), y presuntamente abusó de otros varios, según documentos judiciales del caso penal del padre Rapp y múltiples demandas civiles.

El 10 de mayo de 1999, la Arquidiócesis recibió un informe de Duncan sobre que el padre Rapp había estado abusando sexualmente de un menor. La Arquidiócesis notificó a la policía en Duncan, quien arrestó al padre Rapp a la mañana siguiente. En diciembre de 1999, el padre Rapp se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual lascivo y un juez del condado de Stephens sentenció al padre Rapp a dos periodos de encarcelamiento de 20 años que se cumplirían consecutivamente.

Desde entonces, el padre Rapp y la Arquidiócesis han sido nombrados como partes en múltiples demandas sobre el presunto abuso sexual de menores por parte del padre Rapp mientras servía en Oklahoma. Uno de estos casos aún sigue pendiente. Se han presentado otras varias demandas en otras jurisdicciones basadas en la supuesta mala conducta del padre Rapp. En abril de 2016, un tribunal de Michigan acusó a Rapp con seis cargos de conducta sexual criminal mientras era sacerdote, maestro y entrenador de atletismo en la escuela secundaria católica Lumen Christi en Jackson, Michigan. Fue sentenciado a 20-40 años de prisión. Más de 10 presuntas víctimas se presentaron e informaron a la policía que habían sido abusadas por el padre Rapp mientras servía en Michigan.

Benjamin Zoeller

Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1938

Fecha de ordenación: 27 de mayo de 1965

Fecha de expulsión: 16 de diciembre de 2011

En mayo de 1988, la Arquidiócesis recibió una carta anónima de un feligrés preocupado alegando que el padre Benjamin Zoeller había entablado relaciones sexuales con al menos dos adolescentes en la parroquia. Según la carta anónima, el padre Zoeller llevaba a los niños a viajes nocturnos, les compraba regalos y pasaba una cantidad excesiva de tiempo con ellos. La carta alegaba además que el padre Zoeller había tocado a otro adolescente, lo que hizo que él y su familia dejaran la parroquia. La carta también alegaba que dos feligreses habían descubierto al padre Zoeller acariciando la cara de un adolescente de manera inapropiada en un centro comercial de Oklahoma City.

Los documentos en el archivo del padre Zoeller indican que, en respuesta a esta carta anónima, el arzobispo Salatka le pidió al padre Thomas Boyer que investigara las acusaciones de que el padre Zoeller se había involucrado sexualmente con los dos adolescentes en la parroquia. Por razones de claridad, nos referimos a estos niños como Niño n.º 1 y Niño n.º 2. Los documentos indican que el padre Boyer entrevistó a los abuelos del Niño n.º 1 (con quien vivía el niño) y le dijeron al padre Boyer que el Niño n.º 1 había negado la acusación. Los documentos indican que el padre Boyer tenía la intención

de entrevistar al Niño n.º 1 sobre las acusaciones, pero cuando entrevistamos al padre Boyer, confirmó que nunca lo hizo. El Niño n.º 1 era estudiante en la escuela secundaria Bishop McGuinness. Los informes en el archivo del padre Zoeller indican que el padre Boyer también entrevistó a David Morton, quien en ese momento era un consejero en la escuela (y actualmente es el director y presidente). La nota del padre Boyer dice que el Sr. Morton le dijo al padre Boyer que una fuente le había notificado que el padre Zoeller había participado activamente en una relación sexual con hombres jóvenes en la parroquia, incluido el estudiante, sin embargo, el Sr. Morton no reveló el nombre de la fuente. De acuerdo con la nota del padre Boyer, el Sr. Morton dijo que entrevistó al estudiante de Bishop McGuinness sobre las acusaciones y el estudiante las negó. Cuando entrevistamos al padre Boyer, dijo que estaba frustrado porque el Sr. Morton se negó a revelar el nombre de la fuente, porque «arrojó una pared de ladrillos» que impidió una mayor investigación. El padre Boyer notó su frustración en su informe al arzobispo Salatka, escribiendo que le dijo al Sr. Morton que hasta ese punto la investigación «había demostrado que las acusaciones eran falsas» y que las acciones del Sr. Morton en el caso «estaban comenzando a levantar sospechas sobre su comportamiento profesional».

Cuando entrevistamos al Sr. Morton, dijo que no recordaba que una fuente le informara sobre las acusaciones. Dijo que recordaba vagamente que el estudiante en cuestión (Niño n.º 1) le dijo que un sacerdote abusó de él, aunque ahora no podía recordar ningún detalle, incluido el nombre del sacerdote. El Sr. Morton dijo que inmediatamente informó a su superior, Steve Parsons (entonces director de la escuela) y el Sr. Parsons le dijo que él y los funcionarios de la Arquidiócesis manejarían el asunto. El Sr. Morton dijo que recuerda una reunión posterior con el Sr. Parsons y un funcionario de la Arquidiócesis sobre este asunto, pero no detalles de lo que se discutió. No recordaba ningún seguimiento con respecto a las acusaciones después de esta reunión. El Sr. Morton también dijo que no recordaba ninguno de los detalles expuestos en el informe del padre Boyer. (Contactamos al Sr. Parsons sobre este asunto, pero él se negó a ser entrevistado y remitió nuestras preguntas al Sr. Morton).

Entrevistamos al antiguo alumno (ahora adulto) acerca de las denuncias de 1988. Él dijo que el padre Zoeller no abusó de él. No obstante, declaró que hizo un viaje en carretera por la noche con el padre Zoeller cuando tenía 16 años y que este le dio de tomar alcohol y le preguntó si quería «jugar a hacer una lucha» en su habitación del hotel. El estudiante dijo que declinó el ofrecimiento del padre Zoeller y que luego de regresar del viaje decidió no pasar más tiempo con el padre Zoeller. Fue en esa época, según el estudiante, que los feligreses y el personal de la Arquidiócesis comenzaron a preguntarle acerca de su relación con el padre Zoeller.

De acuerdo con los documentos en el legajo del padre Zoeller, el padre Boyer entrevistó al Niño n.º 2 en presencia de su madre y este negó todo tipo de participación sexual con el padre Zoeller. Aparte de entrevistar al Sr. Morton, el padre Boyer confirmó

que no llevó a cabo ninguna otra entrevista ni ningún otro tipo de investigación con respecto a las denuncias incluidas en la carta anónima. Nadie de la Arquidiócesis investigó las otras denuncias incluidas en la carta anónima, inclusive el supuesto incidente que implicaba a un tercer joven que dejó la parroquia del padre Zoeller debido a tocamientos inadecuados o el supuesto incidente entre el padre Zoeller y otro joven adolescente en el centro comercial de Oklahoma City. Al ser entrevistado, el padre Boyer dijo que hizo lo que el arzobispo Salatka le había pedido que hiciera, y que el arzobispo Salatka le pidió que no investigará más acerca del asunto.

El legajo sacerdotal del padre Zoeller contiene preguntas preliminares para el arzobispo Salatka para utilizar durante la entrevista con el padre Zoeller. Este documento no consta en el legajo acerca de esta entrevista ni lo que pueda haber expresado al arzobispo Salatka, pero indica que el padre Zoeller negó categóricamente las denuncias de 1988. En mayo de 1988, el arzobispo Salatka envió al padre Zoeller la Casa de Huéspedes en Rochester, Minnesota, para una evaluación. En junio de 1988, aproximadamente un mes después de recibir la carta anónima, el arzobispo Salatka se dirigió a la congregación de la parroquia del padre Zoeller y declaró que las denuncias eran infundadas y pidió a todos que las denuncias se detuvieran inmediatamente. A su regreso de la Casa de Huéspedes, el padre Zoeller renunció a sus labores como pastor.

En una carta del 24 de diciembre de 1990 al arzobispo Salatka, el padre Zoeller solicitó permiso para que un adolescente menor de edad viva con él en la rectoría. Nos referimos a este menor como Niño n.º 3. En un memorando del 28 de diciembre de 1990, el arzobispo Salatka les reenvió la solicitud del padre Zoeller a los miembros de la Junta de personal de sacerdotes de la Arquidiócesis y les solicitó su opinión al respecto. En una carta del 29 de diciembre de 1990 al arzobispo Salatka respecto de esta solicitud, el padre Charles H. Schettler (miembro de la Junta de personal) expuso su creencia respecto de que «en esas circunstancias, el padre Zoeller realiza una solicitud razonable acerca del» Niño n.º 3. La carta del padre Schettler hacía referencia a las «acusaciones pasadas y repercusiones en contra del padre Zoeller respecto de un joven». Los documentos incluidos en el expediente de sacerdote del padre Zoeller confirman que el arzobispo Salatka aprobó la solicitud del padre Zoeller de que el Niño n.º 3 viva con él en la rectoría e indican que el Niño n.º 3 de hecho vivía con el padre Zoeller.

En algún momento de 1991, la Arquidiócesis recibió una carta sin fecha de los feligreses en la que declaran que el padre Zoeller los había acompañado a ellos y aun joven de 14 años a un funeral fuera del estado. De acuerdo con esa carta, el padre Zoeller compartió una habitación de hotel con el joven durante el viaje. La carta no incluye ningún tipo específico de denuncia por abuso. Sin embargo, no existen pruebas en el legajo de que el arzobispo Salatka investigara ni realizara un seguimiento acerca del asunto. En 1993, la Arquidiócesis recibió una carta de un feligrés diferente que reanudaba las mismas

denuncias que involucraban a un joven de 14 años. Tampoco existen pruebas de que la Arquidiócesis haya realizado un seguimiento de esta carta de 1993.

El 24 de septiembre de 1998, el padre Weisenburger, V. G. envió un memorando al arzobispo Beltran en el que afirma que un hombre adulto había declarado que el padre Zoeller había desempeñado conductas sexuales con él en una ocasión cuando este era un joven de 16 años. De acuerdo con memorandos siguientes del padre Weisenburger, V. G., la supuesta víctima declaró que, al momento del abuso, se encontraba viviendo en la rectoría con el padre Zoeller y que este le estaba ayudando a dejar el consumo de drogas. La supuesta víctima declaró que el padre Zoeller le había dado de tomar alcohol cuando ocurrió el incidente. Conforme a un memorando del 19 de octubre de 1998, el arzobispo Beltran confrontó al padre Zoeller con la denuncia, y el padre Zoeller admitió lo ocurrido. El memorando además detalla que el arzobispo Beltran le dijo al padre Zoeller que iba a enviarlo a St. Vincent's Hospital para una evaluación y que si el padre Zoeller obtenía «buenos resultados» en la evaluación, el arzobispo Beltran lo consideraría «un asunto cerrado». El padre Zoeller fue a St. Vincent's ese mes. Otros documentos en el legajo sacerdotal del padre Zoeller indican que el padre Zoeller reconoció haber tenido contacto sexual con la supuesta víctima mencionada anteriormente, pero negó todo tipo de contacto sexual con menores. Luego de regresar de St. Vincent's, el padre Zoeller permaneció en el desempeño activo de sus funciones.

En un memorando del 2 de julio de 2001 en el legajo sacerdotal del padre Zoeller, el padre Weisenburger, V. G. declaró que una pareja de padres de la parroquia del padre Zoeller había declarado que el padre Zoeller había tocado de manera inadecuada a su hijo de 18 años en un evento público celebrado en la parroquia. Estas maniobras inadecuadas consistieron en acariciar la cara y la pierna del joven de manera afectuosa pero, según el memorando, no se informó ningún tipo de contacto sexual ni abuso. El memorando establecía que el joven contó a su familia, más tarde ese día, que los tocamientos lo habían hecho sentir incómodo, lo cual fue uno de los motivos por los cuales los padres informaron el incidente al personal de la iglesia. Los padres también informaron que el padre Zoeller se reunía en la rectoría con jóvenes que planeaban comenzar el seminario. Luego confirmamos estos detalles durante una entrevista con un testigo que informó el asunto al Arquidiócesis.

De acuerdo con un memorando del 16 de julio de 2001 del legajo sacerdotal del padre Zoeller redactado por el arzobispo Beltran, este último y el padre Weisenburger, V. G. se reunieron con el padre Zoeller para hablar acerca del incidente de los supuestos tocamientos. El padre Zoeller negó haber tenido ninguna de las conductas supuestas, según el memorando. El arzobispo Beltran le ordenó al padre Zoeller no tener ningún tipo de contacto con la familia que había denunciado el incidente y le informó que ningún joven podía volver a ingresar a la rectoría bajo ninguna circunstancia.

El 18 de julio de 2001, el padre Zoeller envió una carta al arzobispo Beltran en la que le solicitaba autorización para retirarse de sus funciones como sacerdote de la Arquidiócesis. El arzobispo Beltran respondió esa carta el 13 de agosto de 2001 otorgándole al padre Zoeller la autorización solicitada. Los documentos indican que el padre Zoeller renunció en noviembre de 2001 pero que conservó sus facultades sacerdotales.

En un memorando con fecha 8 de diciembre de 2001 al arzobispo Beltran, el padre Weisenburger, V. G. escribió que un miembro del personal le había contado a un pastor de la antigua parroquia del padre Zoeller que este lo había invitado a practicar la fe a su casa. El miembro del personal también le había preguntado al pastor si estaba obligado a decirle si estaba al tanto de que el padre Zoeller «aconsejaba jóvenes», según relata el memorando. El padre Weisenburger, V. G. escribió que el arzobispo Beltran tenía el derecho de emitir un «precepto para el personal que prohibiera al [padre Zoeller] asesorar a adolescentes o tener contacto con ellos». «Lamento que este asunto esté cada vez más fuera de control pero creo que necesitamos tomar medidas antes de que el daño esté hecho», escribió el padre Weisenburger, V. G. Los documentos en el legajo sacerdotal del padre Zoeller muestran que el arzobispo Beltran tomó medidas inmediatas para prohibirle al padre Zoeller brindar ningún tipo de servicio religioso fuera de su casa y que el padre Zoeller no debía tener contacto alguno con jóvenes sin supervisión.

El 4 de mayo de 2002, el padre Zoeller le escribió al arzobispo Beltran solicitando el revocamiento de sus facultades. El arzobispo Beltran respondió esa carta el 8 de mayo de 2002 dando lugar a la solicitud del padre Zoeller y suspendiendo sus facultades.

El lunes 13 de febrero de 2006 el padre Weisenburger, V. G. escribió un memorando para el legajo sacerdotal del padre Zoeller en el que documentaba que una persona había informado que su hermano fue abusado sexualmente por el padre Zoeller cuando era menor. El supuesto abuso ocurrió en dos ocasiones distintas. De acuerdo con un memorando del 20 de febrero de 2006 del padre Weisenburger, V. G., cuando se expuso al padre Zoeller con esta nueva denuncia, admitió el segundo supuesto incidente de contacto sexual pero sostuvo que ocurrió luego de que el individuo cumpliera 18 años.

Ben Zoeller laicizado en 2011.

En agosto de 2018 la Arquidiócesis recibió una carta de una supuesta víctima identificada en el informe de 2006 referido anteriormente. La persona informó que el padre Zoeller había abusado de él cuando era adolescente. En agosto de 2018, la Arquidiócesis emitió una declaración en la que anunció que Zoeller había estado prestando servicios voluntarios en una parroquia de Oklahoma City. De acuerdo con la declaración, la Arquidiócesis no estaba al tanto de que Zoeller había estado prestando servicios voluntarios y que se le prohibió que los continuara prestando en el futuro. De acuerdo con varias

entrevistas con el personal anterior y actual de la Arquidiócesis, el personal de la parroquia no sometió a Zoeller a una investigación de antecedentes, según lo establecido por las políticas y los procedimientos de la Arquidiócesis. No obstante, varios funcionarios de la Arquidiócesis nos dijeron que aun habiendo realizado una investigación de antecedentes, sin tener conocimiento de las acusaciones previas en contra de Zoeller y las cuales él mismo reveló, hubiera pasado esa investigación de antecedentes. Esto es dado a que la Arquidiócesis no había publicado el historial de mal comportamiento ni las circunstancias de ser laicizado de 2011. Una fuente de la parroquia de la ciudad del Sur de Oklahoma donde Zoeller había prestado servicios voluntarios dijo que si la Arquidiócesis hubiera informado a la parroquia acerca de los antecedentes de Zoeller no se le hubiera permitido prestar servicios voluntarios allí.

En noviembre de 2018 la Arquidiócesis recibió una nueva denuncia de un hombre adulto en la que afirmaba que el padre Zoeller había abusado sexualmente de él cuando era un adolescente, a comienzos de 1970.

En la mañana del 3 de octubre de 2019, la Arquidiócesis recibió una denuncia acerca de que el padre Zoeller había abusado sexualmente del Niño n.º 3, incluso durante el período en el que vivía con el padre Zoeller en la rectoría.

RESULTADOS DE LOS INFORMES

Emitimos los siguientes resultados de nuestra investigación independiente y de este Informe:

- Nos hemos basado en la Arquidiócesis de Oklahoma City y en otras diócesis y órdenes religiosas para elaborar estos documentos y este material, los cuales hemos revisado. No pudimos confirmar si la Arquidiócesis de Oklahoma City, otras diócesis u órdenes religiosas a las cuales les solicitamos información nos ocultaron material, pero la Arquidiócesis no se negó a nuestras solicitudes para revisar sus registros.
- Como se detalla en este Informe, hay pruebas de que los registros e información pertinentes a nuestra investigación se perdieron o se destruyeron en el pasado. Específicamente, identificamos los siguientes ejemplos en los cuales fundamentamos esta conclusión:
 - En algunos ejemplos, el personal de la Arquidiócesis de Oklahoma City ordenó que determinados registros «se destruyeran luego de su lectura». Mientras hemos visto pruebas de que algunos de estos registros se preservaron pese a la orden de «destruir luego de su lectura», creemos que es posible que haya otros registros que también se destruyeron como resultado de esta orden de «destruir luego de su lectura». Algunos

funcionarios arquidiocesanos actuales nos dijeron que no elaboran documentos con instrucciones para que se destruyan luego de la lectura.

- Aunque hemos recibido declaraciones de que esta orden ya no se pone en práctica, hemos confirmado que durante el mandato de Loutitia Eason como canciller de la Arquidiócesis de Oklahoma City, no conservó los mensajes de correo electrónico del Mons. Weisenburger, V. G. luego de abandonar la Arquidiócesis de Oklahoma City porque fue designada y consagrada como obispo de Salina, Kansas, a comienzos de 2012. Además, Loutitia Eason eliminó sus propios mensajes de correo electrónico luego de su partida como canciller de la Arquidiócesis de Oklahoma City en julio de 2017.
- Creemos que en la instancia del padre Prather, se le proporcionó a la Arquidiócesis material fotográfico y fílmico de prueba de su abuso sexual de menores. No se nos han proporcionado dichas pruebas y, en respuesta a nuestra petición, hemos recibido la confirmación de la Arquidiócesis de Oklahoma City de que esas pruebas no se encuentran bajo su custodia, control ni tenencia. Además, hemos recibido informes de testigos que afirman que este material se destruyó hace muchos años.
- La firma no cuenta con la facultad de apremio ni el poder de exigir a los testigos a hablar con nosotros. En algunas ocasiones, las supuestas víctimas, los familiares de las supuestas víctimas y otros terceros testigos desvinculados de la Arquidiócesis de Oklahoma City se negaron a hablar con nosotros.
- Una cantidad de sacerdotes bajo investigación no estaban incardinados en la Arquidiócesis de Oklahoma City y debido a eso, tuvimos que ponernos en contacto con fuentes externas y solicitarles material, inclusive las diócesis locales u órdenes religiosas correspondientes de los sacerdotes no incardinados. Confiamos en la colaboración de estas fuentes externas para obtener informes completos y precisos, para realizar búsquedas eficientes del material solicitado, para producir registros sensibles y también asistirnos en nuestros esfuerzos investigativos independientes. No podemos aseverar la eficiencia ni el rigor de ningún material producido por fuentes externas que se nos haya proporcionado.
- La Arquidiócesis de Oklahoma City y sus sacerdotes incardinados están sujetos a la Ley Canónica, la cual es la ley eclesiástica promulgada mediante pronunciamientos papales que incluye todo un sistema legal independiente de los sistemas legales de los Estados Unidos y del Estado de Oklahoma. Nuestra firma no posee conocimiento, capacitación ni instrucción respecto de la Ley Canónica, y nuestros abogados no son expertos en derecho canónico. Por lo tanto, nuestra investigación independiente ni este Informe no consideran ni acreditan el peso de ninguna de las

obligaciones ni ninguno de los requisitos ni fueros establecidos por la Ley Canónica.

- La diócesis de Tulsa se creó en 1973. Aunque los sacerdotes incardinados dentro de esa diócesis hubieran sido incardinados anteriormente como parte de la diócesis de Oklahoma City y Tulsa, luego de la formación de la diócesis de Tulsa en 1973, todos los legajos y todo el material relacionado con los sacerdotes de la diócesis pasaron a formar parte de la diócesis de Tulsa, y nosotros no hemos revisado ese material.
- Dos de las personas clave involucradas en las actividades de la Arquidiócesis de Oklahoma City por varios años fueron su canciller, Loutitia Eason, quien ocupó ese rol desde 2002 hasta julio de 2017, y su esposo, Douglas Eason, quien se desempeñó como asesor externo de la Arquidiócesis desde 2000 hasta octubre de 2018.

La Sra. Eason falleció a comienzos de 2018, antes de que nuestra firma fuera contratada para llevar a cabo esta investigación independiente, pero contactamos al Sr. Eason en 2018 para entrevistarle acerca de determinados asuntos y para solicitarle registros. En ese momento, la Arquidiócesis ya había ordenado al Sr. Eason retirar muchos registros y legajos de la Arquidiócesis de sus instalaciones, y la Arquidiócesis se encargó de identificar y reunir esos registros. Además, el Sr. Eason proporcionó más registros de la Arquidiócesis a nuestra firma en enero de 2019. No obstante, había gran cantidad de archivos, dispositivos electrónicos y otro tipo de registros que pertenecían a la Arquidiócesis que se encontraban en una unidad de almacenamiento o que aún se encontraban en la residencia Eason que no se habían devuelto a la Arquidiócesis, por lo que se le solicitó varias veces al Sr. Eason que devolviera a la Arquidiócesis todo ese material.

Luego de un año de infructuosos intentos de obtener material de la Arquidiócesis en poder del Sr. Eason, a menudo con su promesa de que pronto entregaría ese material (y no lo hacía), la Arquidiócesis recibió un mensaje de correo electrónico de parte del Sr. Eason los primeros días de septiembre de 2019 en el que declaraba su voluntad de entregar a la Arquidiócesis el material restante tan pronto como la semana del 18 de septiembre de 2018. Hemos esperado el material restante del Sr. Eason durante meses, y tanto esta firma como la Arquidiócesis le hemos enviado gran cantidad de solicitudes escritas y telefónicas desde principios de 2018 (por parte de la Arquidiócesis) y desde fines de 2018 (de parte de esta firma), en las que le solicitamos que devuelva todo el material que él y su esposa, la Sr. Eason habían reunido durante su gestión en la Arquidiócesis. Esta firma tenía planeado revisar ese material como parte de su investigación e informe independientes. Debido a la falta de respuesta por parte del Sr. Eason, a finales del verano de 2019 la firma decidió avanzar y preparar su informe y concluir su investigación independiente con la creencia de que no recibiría más material de la Arquidiócesis de parte del Sr. Eason, por lo que su mensaje de correo electrónico de comienzos de septiembre de 2019 fue inesperado.

Antes de tener novedades del Sr. Eason los primeros días de septiembre, la firma había decidido que realizaría su mayor esfuerzo para identificar en este informe el material faltante de la Arquidiócesis en poder del Sr. Eason, pero luego de que el Sr. Eason ofreció entregar finalmente esos registros, la firma tuvo que decidir si revisar e investigar estos nuevos registros que se habían retenido antes de emitir su informe o si abordarlos en un informe posterior. El 23 de septiembre de 2019, el Sr. Eason entregó 12 cajas adicionales de registros a la Arquidiócesis, los que fueron entregados a nuestra firma a la brevedad. Nuestra firma descubrió en la mañana del 3 de octubre de 2019 que, el 2 de octubre de 2019, el Sr. Eason le entregó al asesor externo de la Arquidiócesis (no a nuestra firma) lo que se nos manifestó como 37 cajas adicionales de registros de la Arquidiócesis y dos dispositivos electrónicos que anteriormente pertenecían a Loutitia Eason. Nuestra firma aún no ha recibido estos materiales adicionales entregados el 2 de octubre y, por lo tanto, no puede verificar que estos materiales adicionales contienen información relevante para nuestra investigación. Creemos que es probable que el Sr. Eason aún conserve más registros de la Arquidiócesis, inclusive archivos electrónicos, bajo su custodia.

La recomendación y la preferencia de esta firma fue retrasar la emisión de su informe y las conclusiones de su investigación independiente hasta que la firma hubiera tenido la oportunidad de revisar e investigar el material adicional de la Arquidiócesis que el Sr. Eason finalmente entregó. Volvimos a insistir en esta recomendación en la mañana del 3 de octubre de 2019 luego de que se nos manifestara que el Sr. Eason había entregado 37 cajas adicionales y dos dispositivos electrónicos la noche anterior. No obstante, una cantidad de factores, como el tiempo dedicado a la investigación hasta el día de la fecha y la posibilidad de que el informe se retrasara indefinidamente si el Sr. Eason entregaba los documentos a cuentagotas, lo que se refleja en sus entregas parciales del 23 de septiembre de 2019 y el 2 de octubre de 2019, ocasionaron que la Arquidiócesis ordenara a la firma emitir el informe sobre la base del material recibido, sin aprovechar el material adicional entregado por el Sr. Eason. Por lo tanto, emitimos este informe según instrucción de la Arquidiócesis, sin el beneficio de revisar los registros entregados recientemente ni los registros que el Sr. Eason probablemente conserva y aún debe presentar. Un punto importante es que la firma continuará con la investigación independiente del material adicional de la Arquidiócesis entregado por el Sr. Eason, y en tanto este material adicional cambie, complemente o afecte este informe, la firma emitirá un Informe Complementario que incluirá todos los asuntos que surjan del material adicional de la Arquidiócesis entregado por el Sr. Eason. Además, en caso de que el Sr. Eason proporcione más registros de la Arquidiócesis luego de la publicación de este informe, también revisaremos ese material e incluiremos nuestras conclusiones en un Informe Complementario. La Arquidiócesis ofrece su total colaboración a la firma para garantizar que este material adicional se someta al mismo proceso investigativo que el resto del material obtenido con anterioridad.

CONCLUSIONES

I. La Arquidiócesis de Oklahoma City ejerce un control inadecuado sobre sus propios registros

Frente a una imputación de abuso sexual de un menor, es fundamental que la Arquidiócesis de Oklahoma City implemente controles adecuados para administrar sus registros y garantizar que todos ellos estén disponibles. Si existe la posibilidad de que los registros puedan manipularse, eliminarse, destruirse o simplemente extraviarse debido a un sistema de gestión de registros deficiente, la Arquidiócesis no puede tomar decisiones con pleno conocimiento histórico de lo que se ha documentado. Detectamos una gran cantidad de problemas en la manera en que la Arquidiócesis lleva los registros y llegamos a la conclusión de que no ejerce un control adecuado sobre sus propios registros. La Arquidiócesis nos manifestó que adquirió recientemente un sistema de gestión de casos para acusaciones de abuso sexual de menores.

A. La Arquidiócesis de Oklahoma City no cuenta con una política de retención de registros por escrito

La Arquidiócesis de Oklahoma City nunca ha adoptado una política de retención de registros por escrito. Si bien la Arquidiócesis ha contratado a un archivero a tiempo completo para supervisar sus registros en papel, encontramos varios casos en los que los registros, tanto escritos como electrónicos, no se llevaban, mantenían ni organizaban debidamente. Dado que no existe una política que determine de qué forma que deben mantenerse los registros y el plazo durante el cual deben mantenerse, no hay forma de garantizar que se llevan debidamente. Consideramos que nuestros hallazgos posteriores en relación con los registros arquidiocesanos están todos muy relacionados, de manera directa o indirecta, con la ausencia de una política de retención de registros por escrito.

B. La Arquidiócesis de Oklahoma City carece de políticas o controles para conservar los mensajes de correo electrónico y archivos electrónicos relevantes

En parte debido a que no existe una política de retención de registros por escrito, la conservación de mensajes de correo electrónico y otros registros electrónicos queda a criterio de cada persona. Por eso, nos enteramos sobre eliminaciones sistemáticas de mensajes de correo electrónico y de otros registros que podrían haber estado relacionados con imputaciones de abuso sexual de menores. En realidad, no pudimos acceder a todos los mensajes de correo electrónico de dos de los miembros más importantes del personal de la Arquidiócesis que estuvieron muy implicados en muchas de las imputaciones de abuso sexual de menores que identificamos, investigamos y revisamos. Descubrimos que, tras la partida del Mons. Edward Weisenburger, V. G. de la Arquidiócesis de Oklahoma City en

2012 para convertirse en obispo de Salina, Kansas, casi todos los mensajes de correo electrónico de ese sacerdote se eliminaron. De acuerdo con Kevin Atkins, funcionario de Tecnología de la Información de la Arquidiócesis, en 2012 no existía una política para la preservación de los datos de exempleados. Cuando el Mons. Weisenburger, V. G. se fue en 2012, se le proporcionó a la canciller en ese momento, Loutitia Eason, que ocupó ese cargo entre 2002 y 2017, acceso a todos los mensajes de correo electrónico disponibles del Mons. Weisenburger, V. G., que desempeñó ese cargo entre 1998 y 2012. Cuando preguntamos si los mensajes de correo electrónico del Mons. Weisenburger se habían conservado, el Sr. Atkins manifestó que solo pudo ubicar algunos de ellos que se habían guardado en el sistema, y nos proporcionó los que pudieron recuperarse. Cuando realizamos una copia forense de los discos y dispositivos de red de la Arquidiócesis, solo pudimos encontrar unos pocos correos electrónicos del Mons. Weisenburger, muchos menos de los que razonablemente pensábamos que existieron alguna vez. Durante su mandato, el Mons. Weisenburger, V. G. se vio seriamente implicado en muchas de las imputaciones de abuso sexual infantil que se denunciaron a la Arquidiócesis. En unos pocos casos, se imprimieron copias de mensajes de correo electrónico que implicaban al Mons. Weisenburger, V. G. y se las archivaron en papel, pero creemos que hubo muchos mensajes que nunca se imprimieron y que, como fueron eliminados, ya no están disponibles ni para nosotros ni para la Arquidiócesis.

Además, aparentemente, la Sra. Eason eliminó casi todos sus propios mensajes de correo electrónico hasta el momento que se jubiló de la Arquidiócesis en julio de 2017. Como canciller y abogada matriculada, la Sra. Eason también estuvo muy implicada en una imputación de abuso sexual de un menor. Como la Sra. Eason trabajó 15 años en la Arquidiócesis, hubiéramos esperado encontrar gran cantidad de mensajes de correo electrónico relacionados con la cuenta de correo de la canciller, pero el Sr. Atkins nos confirmó en entrevistas que mantuvo con nosotros que la Sra. Eason se fue y dejó un archivo electrónico con muy pocos datos, y señaló que ella había eliminado casi todos sus mensajes de correo electrónico antes de irse.

Tampoco hubo un intento sistemático de archivar o conservar mensajes de correo electrónico de la Arquidiócesis. Hasta septiembre de 2018, los mensajes de correo electrónico eliminados solo se conservaban por 30 días salvo que se guardaran en otro lado. Luego de 30 días, el Sr. Atkins nos dijo que los mensajes de correo electrónico eliminados se suprimían permanentemente y no podían recuperarse. Obviamente, si el personal conservara sus mensajes de correo electrónico, este seguiría en posesión de la Arquidiócesis, pero no podemos identificar o revisar registros electrónicos eliminados o suprimidos del sistema en el transcurso de los años.

El Sr. Atkins nos informó también que durante años le había solicitado a la Sra. Eason que se implementara una política de conservación de registros y un sistema de

archivado para los archivos electrónicos, pero la canciller se había mostrado reacia a aplicar sus sugerencias. De acuerdo con el Sr. Atkins, una de las inquietudes de la Sra. Eason con respecto a establecer una política de conservación de registros y un sistema de archivo sistemático para los archivos electrónicos era que, más adelante, los registros pudieran constituir pruebas en procesos judiciales. Desde septiembre de 2018, creemos que la Arquidiócesis ha estado conservando todos los mensajes de correo electrónico y documentos tanto de los empleados activos de la Arquidiócesis como de ex empleados.

Si bien en unas pocas ocasiones, los mensajes de correo electrónico se imprimieron y archivaron en papel, incluidos expedientes sacerdotales, no existe en vigor una política documentada sobre conservación de mensajes de correo electrónico y no ha existido una sistematicidad identificable en cuanto a la conservación de mensajes de correo electrónico de la Arquidiócesis. En la medida en que los mensajes de correo electrónico se imprimieron o conservaron electrónicamente, observamos algunos casos en los que los empleados de la Arquidiócesis informaron sobre imputaciones de abuso sexual de menores por correo electrónico, lo que nos sugiere que se conversaba sobre dichas imputaciones por ese medio. Sin embargo, ante la ausencia de una política escrita que exija la conservación de los mensajes de correo electrónico, consideramos que es posible que aquellos enviados acerca de imputaciones de abuso sexual de menores nunca se hayan conservado de manera tal que alguien pudiera hacer referencia a ellos en relación con el sacerdote específico contra quien se han formulado la imputación. Básicamente, la Arquidiócesis o nosotros ya no podemos acceder a comunicaciones clave sobre imputaciones de abuso sexual de menores.

C. Detectamos casos en los que la Arquidiócesis de Oklahoma City llevó los registros de manera descentralizada, desorganizada y dispersa

En una organización como la Arquidiócesis, esperaríamos encontrar un sistema de mantenimiento de registros centralizado, con protocolos de ingreso y la capacidad de rastrear el lugar o situación de los registros. También esperaríamos que las copias actuales y pasadas de políticas y procedimientos se conservaran en un sistema de archivo centralizado desde se pudiera acceder fácilmente a las copias. En lugar de eso, nos encontramos con un sistema desorganizado y disperso, con registros importantes en varios lugares y formatos distintos.

Por ejemplo, cuando pedimos que se identificaran y que nos proporcionaran copias de todas las políticas y procedimientos actuales y pasados relacionados con imputaciones de abuso sexual de menores, así como los documentos de constitución de la Junta de revisión arquidiocesana («Junta de revisión») y todas las políticas o pautas para la celebración de reuniones de dicha junta, la Arquidiócesis no pudo indicarnos un único repositorio donde encontrar toda esta información. En respuesta a nuestra solicitud, la

Arquidiócesis nos envió varios mensajes de correo electrónico con las políticas actuales y previas adjuntas, y parece ser que fue necesario solicitarles a varios miembros del personal que ubicaran las versiones actuales y pasadas de estas políticas. No nos indicaron un repositorio central donde se mantuvieran las políticas y procedimientos históricos y actuales. La Arquidiócesis ha manifestado que nos ha proporcionado todas las políticas y procedimientos pertinentes en relación con imputaciones de abuso sexual infantil, pero, ante la falta de un sistema de mantenimiento de registros centralizado y organizado, existe la posibilidad de que no contemos con todas las políticas y procedimientos.

Como se analizó previamente, cada sacerdote incardinado en el territorio de la Arquidiócesis de Oklahoma City tiene un expediente sacerdotal con registros en papel. Sin embargo, comprendemos que la Arquidiócesis no mantiene un expediente individual por cada sacerdote de una orden religiosa que trabaja dentro del territorio de la Arquidiócesis, y en caso de que se mantenga dicho expediente, no contiene información comparable con expedientes de personal para sacerdotes incardinados con la Arquidiócesis. Nos enteramos de que, cuando se acusaba a un sacerdote de abuso sexual de menores, la Arquidiócesis solía asentar esto en un expediente confidencial separado del «expediente sacerdotal» ordinario del sacerdote, y solo la canciller de la Arquidiócesis tenía acceso a este expediente confidencial separado. Creemos que este expediente confidencial separado se mantiene según lo exigido por el Derecho Canónico. Sin embargo, observamos que cuando existía un expediente de ese tipo para un sacerdote, en el expediente ordinario del sacerdote nunca se asentaba que había información adicional.

También nos enteramos de que los registros y archivos en papel de la Arquidiócesis, incluidos los registros relacionados con imputaciones de abuso sexual de menores, se retiraban de la propiedad de la Arquidiócesis y Doug y Loutitia Eason los conservaban en su casa. Cabe recordar que Doug Eason se desempeñó como asesor externo de la Arquidiócesis entre 1999 y 2018, y que Loutitia Eason ocupó el cargo de canciller entre 2002 y julio de 2017. A principios de 2018, la Arquidiócesis intentó, de manera infructuosa, ubicar determinados registros no relacionados con imputaciones de abuso sexual. El actual canciller Michael Scaperlanda se enteró de que era posible que la Sra. Eason hubiera retirado una gran cantidad de cajas y archivos de los registros de la Arquidiócesis alrededor de la fecha en que se jubiló en julio de 2017. El Sr. Scaperlanda le preguntó al Sr. Eason (la Sra. Eason falleció en enero de 2018) y el 5 de abril de 2018 se le permitió revisar algunas cajas que estaban guardadas en la casa de Eason. Rosemary Lewis, asistente personal del arzobispo Coakley, acompañó al Sr. Scaperlanda a la casa de los Eason. Durante su revisión, el Sr. Scaperlanda y la Sra. Lewis encontraron gran cantidad de cajas con expedientes que pertenecían a la Arquidiócesis. Cuando abandonaron la casa de los Eason ese día, el Sr. Scaperlanda y la Sra. Lewis tenían aproximadamente 12 cajas que devolvieron a la Arquidiócesis y con las que llenaron sus dos vehículos. Cuando entrevistamos al Sr. Eason acerca de los registros que estaban en su casa, nos dijo que el Sr.

Scaperlanda se fue de su hogar ese día con «la mitad de una caja» de materiales que se devolvieron a la Arquidiócesis. El Sr. Scaperlanda nos informó que entre los materiales que él y la Sra. Lewis consiguieron en el hogar de los Eason había expedientes sacerdotales y de seminaristas que nos fueron proporcionados para nuestra investigación, como cintas de audio con grabaciones de conversaciones entre el padre Mickus y su supuesta víctima en 2002, así como transcripciones de las grabaciones.

Si bien el Sr. Eason entregó 12 cajas a fines de septiembre de 2019 y se nos ha manifestado que entregó 37 cajas y dos dispositivos electrónicos al asesor externo de la Arquidiócesis (no a nuestra firma) el 2 de octubre de 2019, consideramos que es posible que aún haya otros registros arquidiocesanos en poder del Sr. Eason. Como se documentó en nuestra sección Calificaciones y en otros lugares de este Informe, hace más de un año que tanto la Arquidiócesis como nuestra firma solicitan acceso a esos registros adicionales, pero el Sr. Eason aún no los ha proporcionado.

Con respecto al padre Imming, como documentamos antes en este Informe, hubo casos en los que las supuestas víctimas o la familia de una supuesta víctima se comunicaron con la Arquidiócesis para denunciar al padre Imming por haber abusado sexualmente de un menor. Si bien en la mayoría de los expedientes sacerdotales, todas las imputaciones estaban asentadas o podía hacerse una referencia cruzada en los expedientes del Coordinador de Asistencia a las Víctimas, en el expediente del padre Imming simplemente no había documentación significativa sobre las acusaciones que había recibido la Arquidiócesis. Solo pudimos detectar que en el expediente sacerdotal del padre Imming faltaban las acusaciones adicionales cuando encontramos la documentación en otros expedientes (incluidos expedientes judiciales relacionados con el juicio de Schovanec) o mediante los registros electrónicos que pudimos copiar.

D. Identificamos algunos casos en los que la Arquidiócesis de Oklahoma City intentó destruir pruebas relacionadas con imputaciones de abuso sexual de menores o no las registró

La Arquidiócesis debe registrar y conservar toda prueba o imputación de abuso sexual de menores de forma tal que no pueda manipularse ni destruirse, o si dicha información fuera manipulada o destruida, debe haber un registro de auditoría que permita al personal entender qué medidas se tomaron y por qué. Detectamos casos en los que, en nuestra opinión, efectivamente se destruyeron pruebas, o se intentó destruirlas, o no se registraron o documentaron pruebas relacionadas con imputaciones de abuso sexual de menores.

Con respecto al padre Prather, documentamos con anterioridad en este Informe que, según nuestra investigación, se proporcionó a la Arquidiócesis prueba fotográfica y en

video sobre el abuso sexual de menores por parte del mencionado sacerdote y que, aparentemente, esa prueba fue destruida. Aparte de la referencia del padre Kastner a la existencia de cintas de video y fotografías en su informe de enero de 1989, no existen otras menciones de estas pruebas en el expediente sacerdotal del padre Prather.

Como se documentó cuando analizamos el caso del padre Cowden, y en otros casos, encontramos pruebas de que, mientras estuvo a cargo de la vicaría general en la Arquidiócesis, el Mons. Weisenburger, V. G. (actualmente, obispo de la diócesis de Tucson) redactó un memorando preliminar en el que solicitaba que la totalidad o una parte de los documentos se «destruyera luego de su lectura». En el caso del padre Cowden, el arzobispo Beltran no cumplió la solicitud del padre Weisenburger de destruir la tercera página del memorando y conservó el registro completo. Cuando lo entrevistamos y le preguntamos acerca de esta práctica, el obispo Weisenburger nos dijo que no era algo que hiciera normalmente y que solo recordaba haberlo hecho una vez. Sin embargo, encontramos un memorando preparado por el padre Weisenburger, V. G. en 2006 con respecto al padre de un menor que se había quejado por una situación de abuso físico (no sexual) de su hijo. En un informe de situación, el padre Weisenburger, V. G. ordenó a los destinatarios que «destruyeran los memorandos luego de su lectura». Nos preocupa que, en la medida en que alguien en la Arquidiócesis aplicara la práctica de «destruir después de leer», no podemos estar seguros de que no hubo otros casos en los que se usara este procedimiento y los registros se destruyeran luego de haber sido revisados. Ni la Arquidiócesis ni nuestra firma pueden revisar documentos destruidos como parte de una compilación completa de información a la que la Arquidiócesis tuvo acceso previamente.

Como se documentó en la sección de este Informe destinada al padre Cude, no hubo mención a la imputación de 1987 hasta la carta del arzobispo Salatka en virtud de la cual se le otorgó al padre Cude una licencia administrativa. Además, no se documentó la participación de la policía ni de la fiscalía hasta que la investigación penal de esos organismos estuvo en marcha. Tampoco existe documentación sobre inquietudes presentadas en Okeene, Oklahoma, en 1989 ni sobre el hecho de que el padre Cude iba a ser supervisado por el padre Gallatin, salvo por un memorando con la cronología que se encontró en el expediente sacerdotal del padre Cude y que se preparó muchos años después y por referencias a las inquietudes de Okeene y a la supervisión del padre Gallatin.

En el caso del padre Imming, indicamos previamente en este Informe que no existe en su expediente (ni en ningún otro lugar que pudiéramos encontrar) información sobre la imputación de 1992 por la cual el padre Imming fue enviado al Shalom Center en Splendor, Texas, para su evaluación. No podemos identificar a esta supuesta víctima ni las circunstancias relacionadas con ella. O bien la Arquidiócesis tuvo en algún momento registros que fueron destruidos, o bien directamente nunca documentó las imputaciones.

II. En el pasado, la Arquidiócesis de Oklahoma City no investigó sistemática ni adecuadamente las imputaciones de abuso sexual de menores

De acuerdo con nuestra revisión de gran cantidad de investigaciones sobre imputaciones de abuso sexual de menores que llevó a cabo la Arquidiócesis de Oklahoma City, llegamos a la conclusión de que esta no investigó sistemáticamente las imputaciones de abuso sexual de menores. Además, consideramos que muchas de sus investigaciones fueron inadecuadas. Incluso si la Arquidiócesis hubiera demostrado ser plenamente capaz de llevar a cabo sus propias investigaciones sobre imputaciones de abuso sexual de menores, consideramos que el hecho de que la Arquidiócesis investigue internamente y por su cuenta las imputaciones de abuso sexual de menores genera problemas de percepción que la Arquidiócesis debe evitar para el futuro.

En lugar de revisar cada investigación individual en este Informe, decidimos brindar ejemplos ilustrativos de la falta de sistematicidad y de la inadecuación de las investigaciones de la Arquidiócesis. Consideramos que nuestras recomendaciones abordarán muchas de las falencias que detallamos en este Informe.

A. Concluimos que las investigaciones de la Arquidiócesis de Oklahoma City se realizaron de manera no sistemática

Cuando se presentaron imputaciones de abuso sexual de menores, en algunos casos la Arquidiócesis intentó llevar adelante una investigación muy exhaustiva y detallada. En otros casos, básicamente investigó poco o nada. Pudimos encontrar fundamentos para criticar todas las investigaciones realizadas por la Arquidiócesis. Si bien el personal actual y pasado de la Arquidiócesis nos informó en reiteradas oportunidades que el proceso de investigar y revisar imputaciones de abuso sexual de menores «evolucionó» con el tiempo a medida que el personal estaba mejor informado, detectamos que no había muchos indicios que sugirieran que la mayor experiencia para lidiar con estas imputaciones necesariamente resultara en una investigación más sistemática o exhaustiva.

De muchas maneras, la investigación más exhaustiva que la Arquidiócesis llevó adelante fue con respecto al padre [eliminado], un sacerdote a quien una supuesta víctima no identificada acusó de abuso sexual en 1993¹². La supuesta víctima reveló más tarde su identidad cuando volvió a denunciar el supuesto abuso en febrero de 1995¹³. Al recibir estas imputaciones y la identidad de la supuesta víctima en 1995, el arzobispo Beltran

¹² Dadas las nuevas imputaciones que se recibieron en la Arquidiócesis en 2018, nuestra firma se ha encargado de supervisar una nueva investigación sobre el caso del padre [eliminado], y esperamos poder difundir las conclusiones de esta investigación en las próximas semanas.

¹³ Dado que aún nos encontramos investigando las imputaciones contra el padre [eliminado], en este Informe no proporcionamos su identidad. En la medida en que se corroboren las imputaciones, se lo notificaremos a la Arquidiócesis y le solicitaremos que lo comunique al público.

designó a un equipo de investigación de tres personas formado por los padres Kastner, Joseph Ross y Weisenburger para «que utilizaran los recursos que fueran necesarios para examinar en profundidad cada aspecto de esta investigación». Dicho equipo confeccionó una lista de preguntas y realizó entrevistas grabadas con 11 sacerdotes distintos que en el pasado habían vivido con el padre [eliminado] o que habían compartido tareas con él. Estas entrevistas luego se transcribieron. El equipo de investigación de tres personas también contrató a un investigador privado para que los ayudara a encontrar a un testigo que, quizás, podría corroborar los hechos y, después de ubicar al testigo, el padre Weisenburger entrevistó al testigo. Luego de completar estos pasos, se envió al padre [eliminado] a St. Luke Institute para que lo evaluaran.

En cambio, varios años después, cuando se presentaron las imputaciones de abuso sexual a un menor contra el padre Mickus y el padre Imming, ambas en 2002, la Arquidiócesis esencialmente realizó poco o nada respecto de la investigación de estas imputaciones. La investigación de la Arquidiócesis sobre las imputaciones contra el padre Mickus consistió en una reunión con el padre Mickus y una conversación con la supuesta víctima. Cuando se le preguntó a la Arquidiócesis si se había realizado una investigación profunda, el obispo Weisenburger, quién era vicario general de la Arquidiócesis de Oklahoma City en 2002, declaró que no se acordaba, pero dudaba de que se hubiera llevado a cabo la investigación. Declaró que cuando se presentaron las primeras imputaciones contra el padre Mickus, la Arquidiócesis aún estaba tratando de averiguar cómo abordar una denuncia en ese momento, especialmente porque estaba pendiente la acción civil o penal. De acuerdo con la participación del padre Weisenburger en la investigación del padre [eliminado] en 1995 parece que los funcionarios de la Arquidiócesis tenían, en 2002, algunos conocimientos sobre cómo abordar e investigar una denuncia.

Asimismo, respecto del padre Imming, aunque la Arquidiócesis ya había decidido permitirle que se jubilara, cuando las imputaciones se presentaron en abril de 2002, el arzobispo Beltran habló con el padre de la supuesta víctima, pero la Arquidiócesis no siguió ninguna de las etapas investigativas formales para confirmar si la conducta que llamó la atención había ocurrido realmente.

Por otra parte, en 2002, la Arquidiócesis había adoptado políticas y procedimientos relacionados con imputaciones de abuso sexual a menores en diciembre de 1991, con revisiones que tuvieron lugar en 1992 y 1998. Además, la Arquidiócesis tuvo acceso a asesores jurídicos y Canonistas a los que consultó con frecuencia, entonces nos parecía que existía una contradicción significativa acerca de si se habían realizado las investigaciones y cómo se habían realizado.

Cuando le preguntamos al arzobispo Beltran sobre el alcance de la investigación sobre el padre [eliminado], explicó que era un sacerdote reconocido y muy popular dentro de la Arquidiócesis, por lo que una investigación exhaustiva estaba garantizada. En alguna

medida esta fue la justificación de una amplia investigación en una instancia, y poca o ninguna investigación en otras, creemos que esto refleja que la Arquidiócesis no tiene la capacidad suficiente para realizar sus propias investigaciones.

B. La Arquidiócesis no tiene experiencia para realizar sus propias investigaciones en cuanto a las imputaciones de abuso sexual a menores

Aun cuando la Arquidiócesis realizó una investigación aparentemente profunda, como la investigación de 1995 al padre [eliminado], aún se refleja una falta de experiencia en la manera y los métodos que utilizó en la dirección de la investigación. Por ejemplo, en la investigación al padre [eliminado], el equipo de investigación de tres miembros preparó un borrador de preguntas para entrevistar a 11 sacerdotes con los que el padre [eliminado] había vivido o servido con anterioridad. Nosotros identificamos muchas veces que cuando un sacerdote está siendo investigado brindaría información que parece relevante para la investigación, aun así, el panel de tres miembros simplemente pasaría a la próxima pregunta del borrador, en vez de seguir preguntando para obtener más información. En la misma investigación, algunos sacerdotes entrevistados se negarían a responder las preguntas porque estaban preocupados de que sus respuestas fueran tomadas como «rumores» o «habladurías». En vez de presionar a los sacerdotes para que contaran los rumores o habladurías que escucharon, que pueden ser información contextual importante en cualquier investigación que puede llevar finalmente a pruebas fundamentadas, el panel de tres miembros continuó con la siguiente pregunta del borrador.

En la misma investigación, el panel de tres miembros también evitó entrevistar a los testigos clave. Por ejemplo, aunque el panel entrevistó sacerdotes, el mismo panel se negó a entrevistar a la mucama de la rectoría de padre [eliminado] o a otros miembros del personal de la rectoría que pudieron haber observado alguna conducta relevante.

Además de la competencia para la investigación de las conductas, también consideramos importante señalar que la Arquidiócesis al dirigir su propia investigación presenta necesariamente conflictos inherentes que pueden afectar la confiabilidad y consistencia de cualquier investigación, que incluye pero no se limita a los siguientes problemas:

- Al investigar a sus propios sacerdotes, existe una falta de independencia y objetividad inherente que podría tener la potencialidad de influir en la investigación;

- los investigadores designados por la Arquidiócesis a través de los años fueron los sacerdotes y diáconos que en muchos casos eran amigos, compañeros de clase, confidentes, subordinados y confesores;
- aunque tiene un tamaño geográficamente considerable, la Arquidiócesis de Oklahoma City es una comunidad muy cerrada, y casi todos los sacerdotes se conocen entre ellos, lo que genera reticencia a la hora de hablar libremente.
- Los investigadores fueron seleccionados por el arzobispo o una persona designada por él, y las tareas del investigador, salario y otros aspectos de su vida profesional y empleo estaban sujetos a las decisiones del arzobispo (y en el caso de los diáconos, las decisiones de los sacerdotes superiores), lo que significa que se percibe la posibilidad de que existe demasiado control sobre el resultado de la investigación;
- todo personal interno designado para dirigir una investigación sentiría necesariamente que hay un conflicto de intereses a la hora de proteger a la Arquidiócesis y a la reputación de la Iglesia de la opinión pública y de las demandas judiciales. En varios de los casos que investigamos, los funcionarios de la Arquidiócesis deseaban claramente evitar el «escándalo» público, para impedir «la locura de los medios de comunicación», y mantener el nombre del sacerdote acusado «lejos de las noticias».

III. En algunos casos, la Arquidiócesis de Oklahoma City cometió el error al tomar las medidas adecuadas cuando se le presentaron imputaciones creíbles contra sus sacerdotes por haber cometido abusos a menores

Quizás la tarea más difícil de esta investigación fue revisar con un ojo crítico las decisiones tomadas por la Arquidiócesis respecto del manejo de las imputaciones de abusos sexuales a menores en el pasado. Varios funcionarios de la Arquidiócesis, en particular el arzobispo Beltran y el obispo Weisenburger nos explicaron que la sociedad había progresado y evolucionado de forma significativa en los últimos 30 años, y en ese proceso se incluían conocimientos científicos para comprender la naturaleza de la pedofilia y la efebofilia, y que nosotros debíamos ejercitar con cautela la aplicación de los conocimientos y los protocolos de hoy en día a los asuntos que habían tenido lugar décadas atrás. En respuesta a nuestras preguntas, el arzobispo Beltran nos dijo: «cómo obispo de la diócesis de Tulsa desde 1978 a 1993 y arzobispo de Oklahoma City desde 1993 a 2011, yo cierta y acertadamente participé en sesiones y programas en conferencias de obispos. Durante esos años se desarrollaron los métodos de investigación disponibles y los abordajes pastorales respecto de las conductas sexuales indebidas. Consultamos a varios expertos en cuestiones legales, enseñanza religiosa y psicología. Creo que seguimos los protocolos adecuados para ese momento. Fui bendecido con asistentes competentes en materia legal y eclesiástica. Agradezco que los procedimientos y protocolos continúen mejorando. Juzgar nuestras

acciones de 20 o 30 años atrás de acuerdo con los protocolos del presente no es justo. Más aún, es imposible para mí recordar situaciones del pasado. Es verdad, por cierto, que no solamente he sido bendecido respecto de estos asuntos relacionados con las imputaciones de conductas sexuales indebidas, sino también en la mayoría de las situaciones y acontecimientos de mi vida».

En el contexto de brindar explicaciones acerca de por qué la Arquidiócesis manejó ciertas imputaciones de abuso sexual de la manera que lo hizo, se nos ha expresado que en 1970, 1980 y a lo largo de la década de 1990, hubo una creencia generalizada de que las personas que se sentían atraídas sexualmente por niños menores se podrían tratar, o la menos podrían «manejar» esa condición con las evaluaciones adecuadas y asistencia, y que a las decisiones personales tomadas en base a esas evaluaciones, diagnósticos y recomendaciones de profesionales de la medicina durante ese período de tiempo se le debería dar el merecido respeto, y que la confianza en los profesionales de la medicina estaba justificada.

Del mismo modo, se nos ha advertido sobre la aplicación de la cultura de la transparencia y la tolerancia cero en cuanto a los casos de abuso sexual a menores como un momento diferente en nuestra historia. El arzobispo Beltran, declaró que la discusión pública y la divulgación de la disciplina sacerdotal es relativamente reciente y que simplemente no tuvo lugar en décadas anteriores. El obispo Weisenburger admitió con franqueza que la forma en que la Iglesia entendía que había que manejar las investigaciones de esas imputaciones había sido fundamentalmente un proceso de trabajo que se había desarrollado a medida que se fueron presentando las imputaciones.

Somos conscientes de que aplicar usos y costumbres sociales, expectativas y conocimientos científicos a decisiones tomadas décadas atrás podría ser considerado injusto para el encargado de tomar decisiones. De igual modo, también reconocemos que desde diciembre de 1991, la Arquidiócesis de Oklahoma City ha tenido una política en relación al manejo de las imputaciones de abuso sexual, y que esa política expresamente establece que «es un hecho que las imputaciones de abusos a menores se están tornando más habituales en la sociedad por estos días». De hecho, al anunciarse la política de la Arquidiócesis en la edición de *The Sooner Catholic* del 22 de diciembre de 1991, el arzobispo Salatka escribió «una de las violaciones más dañinas a los derechos y la dignidad del ser humano es el abuso sexual a menores. Soy consciente de que este es un problema muy serio que tiene nuestra sociedad». La Conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos publicó un Estatuto para la protección de niños y jóvenes en 2002, y en el preámbulo de ese estatuto establece: «la iglesia en los Estados Unidos está experimentando una crisis sin precedentes en nuestro tiempo. El abuso sexual a niños y jóvenes de parte de algunos sacerdotes y obispos, y la manera en la que los obispos abordan estos delitos y pecados, ha causado un dolor, enojo y confusión enormes. Las víctimas inocentes y sus familias han sufrido terriblemente. En el pasado, se había creado una atmósfera de ocultamiento que había

inhibido el proceso de sanación y, en algunos casos, permitía que los comportamientos sexualmente abusivos se prolongaran en el tiempo». Entonces mientras reconozcamos que los usos y costumbres sociales cambian, y los temas sobre los que alguna vez se susurraba en voz baja, ahora se anuncian en voz alta en los medios de comunicación, creemos que para todos los períodos de tiempo pertinentes de nuestra investigación y revisión, se ha comprendido ampliamente que el abuso sexual a menores es inaceptable y no se debería tolerar.

Por lo tanto, a la luz de lo anterior y en este contexto, la Arquidiócesis de Oklahoma City cometió un error al tomar las medidas adecuadas cuando se le presentaron imputaciones creíbles contra sus sacerdotes por haber cometido abusos a menores.

A. La Arquidiócesis de Oklahoma City evitó tomar acciones inmediatas a pesar de las pruebas creíbles y las advertencias de las señales del abuso sexual a menores

Comprender que la Arquidiócesis puede querer darles una segunda oportunidad a los sacerdotes que han sido acusados previamente de abuso sexual a menores, y aun con la seguridad que le puede haber brindado la comunidad médica de que los sacerdotes ofensores lo podrían haber manejado con tratamiento, aun así concluimos que la Arquidiócesis de Oklahoma City cometió un error al tomar las medidas adecuadas a pesar de tener pruebas creíbles y signos de advertencia de que había sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual a menores. Como habíamos proporcionado previamente detalles de cada situación en este informe, hicimos referencia a los ejemplos más claros de esta conducta en un breve repaso de los hechos:

- padre Zoeller (admitió en 1998 haber abusado de un adolescente hacia finales de 1970, se le permitió servir por tres años más hasta que la familia se presentó con más inquietudes);
- padre Rapp (la corte civil de Michigan le aconsejó al arzobispo Beltran en 1994 y de la historia de conductas sexuales indebidas del padre Rapp, no remover al padre Rapp, no darle licencia administrativa mientras esté pendiente la resolución del juzgado, identificados los elementos de la acción pero los elementos de la acción no se implementaron);
- el padre Mickus (después de recibir cintas con audios, no re abrió la investigación, y no insistió en recibir la evaluación de San Lucas);
- el padre Cowden (el padre Weisenburger, V. G. y un pastor eran conscientes de que el padre Cowden invitaba niños a pasar la noche con él en la rectoría, pero nunca surgieron inquietudes hasta que se presentaron imputaciones de abuso sexual a menores ante al a Arquidiócesis);

- el padre Prather (después de recibir pruebas suficientes de abuso sexual a menores, se le permitió al padre Prather continuar como sacerdote en la diócesis de Richmond y Joliet).

B. La Arquidiócesis no logró controlar a los sacerdotes ubicados en el ministerio restringido

Aunque no parezca ser una medida que la Arquidiócesis haya intentado implementar recientemente, en una época, la Arquidiócesis consideró abordar a los sacerdotes acusados de participar en abuso sexual de menores al dejarlos seguir siendo sacerdotes pero «restringiendo» su ministerio y prohibiéndoles estar a solas con niños. Varios ex y actuales funcionarios de la Arquidiócesis nos afirmaron que esta política prácticamente no se puso en práctica y era desacertada. Y aunque este no fuera el caso, la Arquidiócesis no logró controlar y supervisar de manera adecuada a los sacerdotes del ministerio restringido. Por ejemplo, en el caso del padre Rapp, el arzobispo Beltran testificó que le había dicho al padre Rapp en 1994 que no debía estar a solas con menores sin supervisión y que el pastor asociado en Duncan asumiría toda la responsabilidad por el ministerio de jóvenes. Pero parece que el arzobispo Beltran no se lo dijo a nadie más del ministerio restringido del padre Rapp, ni siquiera al pastor asociado. Parece que el arzobispo Beltran le solicitó al padre Bill Ross que controlara al padre Rapp, pero no existen pruebas de que este control realmente se haya llevado a cabo. Además, en el caso del padre Cude, existen pruebas de que, aunque se lo haya ubicado en algún tipo de ministerio restringido en 1987, o bien continuó o se reubicó en 1989 cuando se le solicitó al padre Gallatin que controle al padre Cude. Sin embargo, los archivos indican que el control del padre Gallatin al padre Cude fue inconsistente después del primer año.

Finalmente, en el caso del padre [eliminado], mencionado arriba, las imputaciones aparecieron en 1995 y como resultado el padre [eliminado] fue enviado al St. Luke Institute para recibir tratamiento.¹⁴ Cuando el padre [eliminado] regresó de St. Luke, el arzobispo Beltran decidió restringir el ministerio del padre [eliminado] para que no pudiera tener ningún contacto con menores sin supervisión. Este «ministerio restringido» también se menciona en una carta del 21 de abril de 1995 del padre Weisenburger hacia la supuesta víctima que denunció el abuso a la Arquidiócesis en 1995. Los documentos de los archivos del padre [eliminado] sugieren que el pastor asociado designado para la misma parroquia

¹⁴Este es el mismo padre [eliminado] mencionado en las Conclusiones II(A) y (B) en este informe. De nuevo, se informaron nuevos alegatos a la Arquidiócesis en 2018 que hicieron que nuestra firma supervisara una investigación renovada con respecto al padre [eliminado]. Por lo tanto, como la investigación está en marcha, no lo estamos mencionando en este Informe, pero sí queremos que la Arquidiócesis conozca nuestras conclusiones una vez que se termine la investigación, y deseamos y esperamos que si concluimos que los alegatos de abuso sexual de menores se demuestran en contra del padre [eliminado], la Arquidiócesis publicará las conclusiones.

que el padre [eliminado] se le ordenó que garantizara que el padre [eliminado] no habría tenido contacto con menores sin supervisión, y el padre William Rossa también le recordó esto al arzobispo Beltran en una carta del 2 de mayo de 1995 que decía lo siguiente: «Quiero recordarle que estuvimos de acuerdo con que debemos ser prudentes para evaluar al [pastor asociado] con respecto a las recomendaciones de que debe evitarse cualquier «contacto con adolescentes sin supervisión». Supongo que hablará con el [pastor asociado] sobre esta cuestión. Le informé al padre [eliminado] sobre la necesidad de hacerlo».

Cuando entrevistamos al arzobispo Beltran, hablamos sobre las dificultades de implementar ministerios restringidos como el impuesto para el padre [eliminado], y el arzobispo Beltran declaró que, en el ambiente actual, él no está a favor de los ministerios restringidos como lo hizo con el padre [eliminado] en 1995. Cuando le preguntamos cómo podría implementarse el ministerio restringido con el padre [eliminado], el arzobispo Beltran nos dijo que había tenido una reunión con el pastor asociado designado a la misma iglesia que el padre [eliminado] y le recomendó al pastor asociado que se comprometiera a garantizar que el padre [eliminado] no tenga contacto con menores sin supervisión. Cuando entrevistamos al sacerdote que era el pastor asociado en ese momento, este negó haber tenido esa reunión con el arzobispo Beltran y además negó que alguien le haya dicho que el padre [eliminado] había puesto en práctica un ministerio restringido que exigía contacto con menores con supervisión. El sacerdote que había sido el pastor asociado del padre [eliminado] en ese momento afirmó que hubiese sido «absurdo» esperar que él supervise dicha política con el padre [eliminado]. Le solicitamos al arzobispo Beltran que aborde las declaraciones realizadas por el pastor asociado del padre [eliminado], y se negó a responder nuestras preguntas adicionales al afirmar que «Con respecto al padre [eliminado] y a la [parroquia eliminada], no tengo más nada que agregar a los expedientes del registro».

Nos parece que las únicas partes notificadas del ministerio restringido del padre [eliminado] fueron el arzobispo Beltran, el padre Weisenburger, el padre William, Ross, el padre [eliminado], y la persona que, en 1995, denunció en la Arquidiócesis que el padre [eliminado] lo había abusado.

IV. La Arquidiócesis no logró examinar de manera correcta a los sacerdotes transferidos a la Arquidiócesis

Existen casos en que la Arquidiócesis no logró examinar de manera adecuada a los sacerdotes ingresantes con antecedentes de agresión sexual. Por ejemplo, en el caso del padre Mantica, el obispo Reed estaba al tanto de las preocupaciones con respecto a la salud psicológica del padre Mantica antes de que vaya a la diócesis de Oklahoma City. Además, los cambios frecuentes del padre Mantica en sus designaciones ministeriales antes de ir a Oklahoma también debieron haber generado preguntas sobre su salud. (Gracias a los registros proporcionados por la diócesis de Albany es posible afirmar que la diócesis de Albany ocultó material informativo sobre el padre Mantica de los funcionarios de

Oklahoma). En el caso del padre Rapp, existen pruebas convincentes (aunque discutidas) de que la orden religiosa del padre Rapp le había contado al arzobispo Salatka sobre los antecedentes de «problemas sexuales» con «personas jóvenes» del padre Rapp. También existen pruebas de que él sabía que el padre Rapp había sido enviado a dos centros para recibir tratamiento psicológico. Aun así, el arzobispo Salatka no solicitó información adicional sobre los antecedentes del padre Rapp y no solicitó las evaluaciones de los dos centros de tratamiento visitados por el padre Rapp.

En diciembre de 2015, la Arquidiócesis (del arzobispo Coakley y el padre William Novak, vicario general) permitió que el padre Jose Alexis Davila, otro sacerdote condenado en California por un delito menor de agresión sexual a una mujer de 19 años sea trasladado a la Arquidiócesis de Oklahoma City, donde trabajó en Lawton y en las misiones vecinas desde diciembre de 2015 a abril de 2016. El padre Davila nació en Venezuela y anteriormente servía en la diócesis de San Diego, California. En 2012 y mientras estaba en San Diego, el padre Davila fue acusado de tres delitos menores de agresión sexual. Aunque la víctima del caso del padre Davila fue una mujer de 19 años (y por lo una adulta para la ley), la falta de diligencia llevada a cabo para investigar al padre Davila justifica lo que se discute en este informe. En 2012, el padre Davila se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de libertad condicional y a 150 horas de servicio comunitario. En 2015, el padre Davila anuló la condena penal según lo permiten las leyes de California.

Las pruebas muestran que antes de que el padre Davila venga a Oklahoma, el arzobispo Coakley y el padre Novak, V. G. estaban al tanto de los cargos y de la admisión de culpabilidad del padre Davila. El arzobispo Coakley y el padre Novak, V. G. nos informaron que ellos estaban al tanto de que el padre Davila había sido acusado de «manosear» a la joven mujer pero no estaban al tanto de las conductas específicas que sostienen los cargos penales hasta abril de 2016, cuando los medios de comunicación comenzaron a relatar nuevas historias sobre el padre Davila y los feligreses comenzaron a expresar preocupaciones por sus antecedentes penales. El arzobispo Coakley y el padre Novak, V. G. nos informaron (y se confirmó a través de documentos contemporáneos) que ellos confiaron en las representaciones repetidas del padre Davila en las que se consideraba inocente con respecto a los cargos y a través de las que se declaró culpable solo para evitar el juicio. Pero en noviembre de 2015, el vicario general de la diócesis de San Diego, el Mons. Steven Callahan, informó al arzobispo Coakley y al padre Novak, V. G. que, para él, la conducta del padre Davila era más grave que el «manoseo» a una mujer y creía que el padre Davila estaba «minimizando la situación». A pesar de recibir esta información, el arzobispo Coakley y el padre Novak, V. G. no intentaron verificar los informes de Davila a través de otra información sobre los incidentes a partir de fuentes que no sean del padre Davila. Por ejemplo, no hablaron con los funcionarios policiales de San Diego que conocían el caso, a la víctima o a los testigos del incidente. Luego, el canciller Loutitia Eason llevó a cabo una investigación de los antecedentes del padre Davila antes de su

llegada, y aparentemente, el informe no reveló la anulación de la condena penal. Sin embargo, para ese momento, la Arquidiócesis ya estaba al tanto de los cargos penales y de la declaración de culpabilidad. La Arquidiócesis no logró obtener las conclusiones del caso penal del padre Davila en California, que hubiesen revelado los detalles de su conducta. En abril de 2016, en respuesta a los artículos periodísticos sobre la presencia del padre Davila en Oklahoma y sus antecedentes penales y ante las inquietudes de los feligreses preocupados, el arzobispo Coakley emitió una declaración intentando mitigar las preocupaciones con respecto al padre Davila. Esta declaración repetía información inexacta de los hechos sobre el incidente subyacente que el padre Davila había proporcionado anteriormente a la Arquidiócesis (que incluía, por ejemplo, que el incidente había ocurrido frente a otras personas en la oficina del padre Davila).

El 25 de abril de 2016, el arzobispo Coakley y padre Novak, V. G. recibieron documentación sobre las acusaciones penales contra el padre Davila. En este registro se estableció que el padre Davila había «tocado las nalgas [de la víctima], metido su dedo en su vagina y tocado su pecho izquierdo». Al recibir esta información, el padre Novak, V. G. contactó al padre Davila y le preguntó si él había llevado a cabo la conducta descrita en el artículo. El padre Davila admitió que lo había hecho. El arzobispo Coakley inmediatamente le solicitó al padre Davila que abandonara la Arquidiócesis y que regresara a Venezuela. Lo hizo al día siguiente. Cuando se los entrevistó, el arzobispo Coakley y el padre Novak, V. G. reconocieron que deberían haber buscado en internet el nombre del padre Davila y revisado materiales de antecedentes adicionales, tales como noticias periodísticas antes de invitarlo a la Arquidiócesis de Oklahoma City. Si lo hubiesen hecho, probablemente habrían encontrado información que describe los detalles del incidente y que finalmente los llevó a expulsarlo del clero. Asimismo, ellos reconocieron que deberían haber obtenido los expedientes del caso del padre Davila, que nuevamente, habrían revelado la naturaleza de los delitos del padre Davila. Tanto el arzobispo Coakley como el padre Novak, V. G. dijeron que si hubiesen estado al tanto de los detalles de los delitos del padre Davila, no lo habrían invitado a servir en la Arquidiócesis de Oklahoma City. Sin embargo, como se señaló anteriormente, más allá de los detalles específicos del incidente, creemos que no se le debería haber permitido servir al padre Davila como pastor en la Arquidiócesis de Oklahoma City en virtud de las propias políticas y procedimientos de la Arquidiócesis dado que él había sido condenado y puesto en libertad condicional por un «delito inhabilitante».

V. En algunas instancias, la Arquidiócesis de Oklahoma City no cumplió con sus propias políticas y procedimientos en relación con las acusaciones de conducta sexual inapropiada

A lo largo de las últimas tres décadas, la Arquidiócesis de Oklahoma City adoptó varias políticas y procedimientos que regulan el manejo de las acusaciones de abuso sexual de menores. La primera de esas políticas fue la Política sobre el abuso de menores por

personal de la Iglesia adoptada el 10 de diciembre de 1991 (revisada el 5 de noviembre de 1992 y nuevamente en febrero de 2002) (la «Política de 1991»). El 21 de abril de 1993, la Arquidiócesis también adoptó el Plan del Equipo pastoral en respuesta a la acusación de abuso sexual por el personal de la Iglesia.

En 2002, en medio de las preocupaciones crecientes sobre abuso sexual por parte del clero en los Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos adoptó políticas y procedimientos en relación con el manejo de acusaciones de abuso sexual. Estas políticas y procedimientos se aplican a todas las diócesis y eparquías en los Estados Unidos e incluyen el Estatuto para la protección de niños y jóvenes (actualizado por última vez en 2018) (el «Estatuto») y las Normas básicas para reglamentos diocesano/eparquiales que traten de imputaciones de abuso sexual de menores cometido por sacerdotes o diáconos (revisadas en 2006) (las «Normas básicas»). Entre otras cosas, el Estatuto y las Normas básicas requerían la creación de «juntas de revisión» en todas las diócesis y eparquías para asesorar y asistir a obispos que estuviesen lidiando con acusaciones de abuso sexual por parte del clero.

El 30 de agosto de 2003, la Arquidiócesis de Oklahoma City adoptó un Código de conducta (actualizado el 17 de junio de 2014) que contiene distintas disposiciones que abordan el manejo de las acusaciones de abuso sexual e incorpora principios del Estatuto y las Normas básicas. La Arquidiócesis de Oklahoma City también adoptó políticas y procedimientos que regulan el rol y funcionamiento de la Junta de revisión.

Sobre la base de nuestra investigación, creemos que la Arquidiócesis de Oklahoma City en general ha cumplido las políticas y procedimientos aplicables relacionados con el manejo de acusaciones de abuso sexual de menores en vigencia en cualquier momento determinado en el tiempo. Esta conclusión podrá parecer extraña dadas las otras conclusiones en este Informe; específicamente, que en algunos casos la Arquidiócesis no tomó las acciones apropiadas cuando se le presentó evidencia confiable de que sus sacerdotes habían abusado sexualmente de menores. Sin embargo, un examen de las políticas y procedimientos relevantes demuestra que estas conclusiones son consistentes entre sí. En algunos casos, las medidas tomadas por los funcionarios arquidiocesanos fueron (en nuestra opinión) inapropiadas, pero de todos modos consistentes con las políticas y procedimientos aplicables en vigencia en ese momento. Por ejemplo, en virtud de la Política de 1991, el arzobispo *podrá*, pero no tiene la obligación, de inmediatamente colocar en licencia administrativa a un sacerdote acusado mientras la investigación de la acusación está pendiente. (Sin embargo, cabe destacar que no fue el caso de los empleados laicos acusados de abuso sexual, quienes en virtud de la política fueron inmediatamente puestos en licencia mientras estaba pendiente la investigación). Es por este motivo que, en el caso del padre Rapp, la decisión del arzobispo Beltran de no suspender inmediatamente al padre Rapp en 1994 al enterarse de su historial de conducta sexual inapropiada y la acusación pendiente contra él fue consistente con las políticas de la Arquidiócesis y los

procedimientos en vigencia en ese momento (nosotros la consideramos inapropiada, sin embargo). Además, la Política de 1991 estableció que si se determinaba en un tribunal (ya sea a través de un proceso penal o civil) que un sacerdote había abusado de un menor, se suspenderían las facultades del sacerdote. No obstante, el sacerdote todavía podía ser reincorporado si él «completaba un programa de tratamiento apropiado» y si solicitaba con éxito al arzobispo una nueva designación. En otras palabras, en virtud de la Política de 2011, la política oficial de la Arquidiócesis era otorgar una segunda (y potencialmente una tercera y cuarta) oportunidad a los sacerdotes sobre los que se hubiese probado que abusaron sexualmente de menores. En nuestra opinión, estos ejemplos demuestran la deficiencia de las políticas y procedimientos en vigencia en ese momento, especialmente aquellas anteriores al Estatuto y las Normas básicas.

No obstante, durante esta investigación, identificamos instancias en las que la Arquidiócesis no cumplió con sus propias políticas y procedimientos:

A. La Arquidiócesis de Oklahoma City adoptó estrategias legales que son inconsistentes con sus obligaciones hacia las presuntas víctimas y de no interferir con las investigaciones en curso de acusaciones de abuso sexual.

La Política de 1991 establece que mientras una investigación civil o penal está «en progreso», el «Equipo pastoral» de la Arquidiócesis (un grupo designado por el arzobispo para proporcionar cuidado pastoral a la presunta víctima, el acusado y la comunidad afectada) «deberá evitar tomar medidas que podrían traumatizar aún más a la supuesta víctima [o] complicar la investigación». Si bien esta disposición hace referencia específicamente al «Equipo pastoral», creemos que las obligaciones de no «traumatizar aún más a la presunta víctima» y de no «complicar la investigación» se aplicarían a todo el personal de la Arquidiócesis. Adicionalmente en relación con las presuntas víctimas, el Estatuto en vigencia en 2002 requería que las diócesis y eparquías proporcionaran «cuidado pastoral inmediato a las personas que alegaban haber sido abusadas sexualmente por el clero cuando eran menores» y que «demostraran un compromiso sincero con su bienestar espiritual y emocional». Estatuto 2002, artículos 1, 2.

En el caso del padre Mickus, creemos que la Arquidiócesis no cumplió con sus obligaciones hacia la supuesta víctima en virtud de la Política de 1991 y el Estatuto de 2002. La Arquidiócesis estaba al tanto de que el padre Mickus inició una demanda por difamación en contra del acusador, no lo detuvo y le pagó para hacerlo. En nuestra opinión, esta medida no era congruente con el propósito, ni con el texto, de la Política de 1991 y el Estatuto de 2002 (promulgado un mes después de que se informara por primera vez la imputación en contra del padre Mickus). La presentación de la demanda por difamación arriesgaba la generación de un «trauma mayor» a la supuesta víctima y no era coherente con las obligaciones de la Arquidiócesis de brindarle a la supuesta víctima un «cuidado pastoral» y «demostrar un compromiso genuino con su bienestar espiritual y

emocional». Asimismo, tal como se mencionó anteriormente en más detalle, la presentación del padre Mickus de la demanda por difamación «complicó la investigación» de la imputación, al frustrar los esfuerzos de la Junta de revisión para entrevistar a la supuesta víctima.

Además, en el caso del padre Imming, la Arquidiócesis tomó conocimiento de que se habían utilizado tácticas de litigio engañosas, que, en nuestra opinión, no eran coherentes con las obligaciones de la Arquidiócesis hacia la supuesta víctima, quien había iniciado una demanda civil en contra del padre Imming y la Arquidiócesis. Debido a que existía un acuerdo por escrito de defensa mutua entre el padre Imming y la Arquidiócesis, no podemos, desde el punto de vista legal, revelar una descripción específica de las tácticas de litigio empleadas.

B. La Arquidiócesis de Oklahoma City no le solicitó a un sacerdote que se sometiera a una «evaluación psicológica exhaustiva» luego de recibir pruebas convincentes de que el sacerdote había abusado de un menor.

La Política de 1991 establece que si un sacerdote acusado «no es procesado pero aun así se determina que es parcialmente imputable por actos indiscretos graves que no llegan a ser actos delictivos», el sacerdote «se someterá a una evaluación psicológica exhaustiva, y si es necesario, a un tratamiento». Asimismo, la Política de 1991 estipula que «el futuro rol [del sacerdote] en el ministerio pastoral será determinado por el arzobispo previa consulta con especialistas en tratamiento y el Equipo pastoral». Con respecto al padre Mickus, creemos que las cintas de audio de conversaciones telefónicas entre el padre Mickus y su supuesta víctima (entregadas en 2005) indican, como mínimo, que el padre Mickus era «parcialmente imputable por actos indiscretos graves». En virtud de la Política de 1991 (que según del Código de conducta del 20 de agosto de 2003 seguía vigente), la Arquidiócesis debería haberle solicitado al padre Mickus que se sometiera a una «evaluación psicológica exhaustiva» y debería haber reevaluado su «futuro rol en el ministerio pastoral». Tal como se mencionó anteriormente, en 2006, el arzobispo Beltran intentó expulsar al padre Mickus del ministerio debido a las cintas de audio. El Dr. Paul Tobin le recomendó al arzobispo Beltran que el padre Mickus se sometiera a una nueva evaluación psicológica para determinar su capacidad actual para desempeñarse en el ministerio. No se siguieron sus recomendaciones ni la Política de 1991.

Asimismo, en la medida en que las cintas de audio demuestren que el padre Mickus efectivamente abusó de un menor, el hecho de que la Arquidiócesis no lo expulsó del ministerio en 2005 contraviene el Estatuto y las Normas básicas, que establecieron una política de tolerancia cero para «incluso un único acto de abuso sexual. . . de un menor», que se admita o establezca, independientemente del momento en que ocurrió el abuso. Sobre la base de las cintas de audio y otras pruebas que surgieron en ese momento, creemos que la Arquidiócesis debería hacer tomado medidas para expulsar de forma permanente al

padre Mickus del ministerio de conformidad con el Estatuto y las Normas básicas. (Reconocemos que es posible que la Arquidiócesis estuviese limitada en su capacidad para hacerlo debido a los requisitos de la Ley canónica. Como se señala en este Informe, no opinamos sobre cuáles pueden haber sido esas limitaciones o si la Arquidiócesis pudo haber expulsado al padre Mickus en 2005 de conformidad con la Ley canónica).

C. La Arquidiócesis de Oklahoma City no brindó pruebas materiales a la Junta de revisión, como lo establecen sus políticas y procedimientos.

El 31 de enero de 2005, el arzobispo Beltrán aprobó un documento adoptado por la Junta de revisión titulado «Funciones de la Junta arquidiocesana de revisión ante imputaciones de conducta sexual inapropiada con menores» (las «Funciones de la Junta de revisión»). Las Funciones de la Junta de revisión parecen estar vigentes y crean un proceso sobre cómo deben recibir y manejar las denuncias de abuso sexual de un menor los funcionarios arquidiocesanos. También detalla el rol de la Junta de revisión en canto a su colaboración con el arzobispo en el manejo de tales casos. Las Funciones de la Junta de revisión establecen que, al recibir una denuncia de abuso sexual de un menor, el arzobispo tomará una determinación inicial sobre si tal imputación «tiene incluso una posibilidad o apariencia de verdad». Si no se cumple esta determinación inicial, el arzobispo debe documentar su conclusión por escrito y «el asunto debe compartirse con la Junta de revisión». Si se cumple esta determinación inicial, la Arquidiócesis debe llevar adelante una «investigación preliminar» mediante un investigador designado por el arzobispo. Conforme a las Funciones de la Junta de revisión, el «informe escrito final del investigador se compartirá con la Junta de revisión». Por lo tanto, de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Junta de revisión, todas las imputaciones de abuso sexual de un menor deben ser informadas a la Junta de revisión de alguna manera, independientemente de si se realiza una «investigación preliminar» o no. Este requisito de divulgación es obligatorio.

En el caso del padre Mickus, creemos que las cintas de audio que se entregaron a la Arquidiócesis en 2005 constituyeron nuevas pruebas materiales que deberían haber provocado una reapertura de la investigación sobre la acusación contra el padre Mickus. Aunque las Funciones de la Junta de revisión no abordan específicamente el escenario de reabrir una vieja acusación, creemos que el requisito de revelar información relacionada con las denuncias de abuso sexual de un menor a la Junta de revisión hubiera sido aplicable. Por lo tanto, concluimos que la no divulgación de las cintas de audio a la Junta de revisión en 2005 (o en cualquier momento hasta el comienzo de nuestra investigación) fue una violación de las políticas y procedimientos de la Arquidiócesis con respecto a la Junta de revisión.

Además, conforme lo que surge de las entrevistas con los miembros de la Junta de revisión y con funcionarios actuales y ex funcionarios de la Arquidiócesis, entendemos que, durante gran parte de sus 17 años de existencia, tal como lo indicó la Canciller Loutitia

Eason durante su mandato, la Junta de revisión recibió relativamente pocos detalles sobre imputaciones. Por ejemplo, los nombres de la presunta víctima y del acusado a menudo no fueron revelados. Si se proporcionaban documentos a la Junta de revisión para su examen, los nombres y la información de identificación eran eliminados. Además, la ubicación, la naturaleza y las circunstancias del presunto abuso a menudo no eran reveladas. Creemos que esta falta de transparencia socava gravemente la capacidad de la Junta de revisión de asesorar adecuadamente al arzobispo en el manejo de las acusaciones de abuso sexual y de actuar como un control independiente de la autoridad del arzobispo, como creemos que fue previsto por el Estatuto y las Normas básicas.

D. La Arquidiócesis permitió que un sacerdote externo que se declaró culpable y estuvo en libertad condicional por un «delito descalificador» que implicaba una conducta sexual inapropiada, fuera transferido a la Arquidiócesis de Oklahoma City.

En el caso del padre Dávila, la Arquidiócesis sabía que éste se había declarado culpable de un delito menor de agresión sexual y había cumplido libertad condicional por ese delito, pero le permitió servir como pastor en la Arquidiócesis de Oklahoma City, donde sus deberes incluían interacciones con jóvenes. Según el Código de conducta de la Arquidiócesis vigente en ese momento, «ninguna persona puede prestar servicios a niños o jóvenes si alguna vez ha sido condenado por un delito descalificador [o] está o ha estado en libertad condicional o ha recibido una sentencia diferida por cualquier delito descalificador». El padre Dávila se declaró culpable y cumplió libertad condicional por un delito menor de agresión sexual. Aunque la víctima en el caso del padre Dávila era un adulto legal, cualquier forma de delito menor o delito grave de «agresión sexual» es un delito descalificador conforme al Código de conducta. Por lo tanto, al padre Dávila no se le debería haber permitido servir como pastor en la Arquidiócesis, una posición que necesariamente implica contacto con niños y jóvenes.

RECOMENDACIONES A LA ARQUIDIÓCESIS DE OKLAHOMA CITY

Hacemos las siguientes recomendaciones a la Arquidiócesis de Oklahoma City:

1. Adquirir un sistema integrado de gestión de registros. La Arquidiócesis de Oklahoma City debe adquirir un sistema integrado de gestión de registros que permita la recopilación, retención y archivo de todos los documentos, archivos electrónicos, registros, pruebas y otros materiales relacionados con las imputaciones de abuso sexual de menores. El sistema de gestión de registros debe incluir procesos de auditoría, es decir, un sistema de documentación de cuándo se ingresa información, quién ha accedido a la información y si alguna información ha sido alterada o eliminada. También debe incluir un sistema electrónico de gestión de casos para hacer un seguimiento de cada acusación de abuso sexual que recibe la Arquidiócesis, desde el primer informe hasta la resolución final. Recomendamos esto para asegurar que la Arquidiócesis tenga registros completos

relacionados con las imputaciones de abuso sexual de menores y para dar al público la confianza de que cualquier informe de abuso sexual de menores se documenta y se archiva adecuadamente.

La Arquidiócesis nos manifestó que recientemente adquirió un sistema de gestión de casos para acusaciones de abuso sexual de menores.

2. Adoptar una política de retención de registros por escrito. La Arquidiócesis de Oklahoma City debería adoptar una política integral y por escrito de retención de registros que incluya disposiciones específicas para la preservación de registros relacionados con imputaciones de abuso sexual de menores. Recomendamos que la Arquidiócesis conserve los registros relacionados con las denuncias de abuso sexual de menores durante al menos 50 años.

3. Crear y mantener expedientes de personal de todos los sacerdotes que sirven dentro del territorio de la Arquidiócesis de Oklahoma City, incluidos los sacerdotes de órdenes religiosas. Al parecer, la Arquidiócesis no ha mantenido expedientes de personal de sacerdotes de órdenes religiosas comparables con los expedientes que se mantienen para los sacerdotes incardinados con la Arquidiócesis. En algunos casos, los registros relacionados con las imputaciones que involucran a dichos sacerdotes estaban dispersos. La Arquidiócesis de Oklahoma City debe solicitar a todas las órdenes religiosas que operan en el territorio de la Arquidiócesis una copia de los expedientes de personal de los sacerdotes que sirven dentro de la Arquidiócesis e implementar políticas y procedimientos en coordinación con las órdenes religiosas para garantizar que estos expedientes de personal se actualicen regularmente.

4. Remitir todas las imputaciones de abuso sexual de menores, pasadas y presentes, a las autoridades pertinentes y al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma. Aunque la Arquidiócesis de Oklahoma City ha informado sistemáticamente de las imputaciones de abuso sexual de menores a las autoridades pertinentes y al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma cuando las presuntas víctimas son menores, en el pasado no hizo tales remisiones si la presunta víctima era un adulto al momento en que se realizaron las acusaciones, particularmente si el sacerdote acusado había fallecido. A partir de finales de 2018, la Arquidiócesis comenzó a remitir todas las denuncias de abuso sexual de menores a las autoridades pertinentes y al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma, independientemente de la edad de la presunta víctima o el estado del sacerdote acusado. Entendemos que este cambio en la remisión de la información es retroactivo y que la Arquidiócesis está trabajando/ha completado la remisión de todas las imputaciones pasadas de las que tiene conocimiento. Recomendamos que la Arquidiócesis continúe remitiendo todas las denuncias de abuso sexual de menores, pasadas y presentes, incluidos los casos en los que el sacerdote pueda haber fallecido, a las autoridades correspondientes y al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma.

5. Contratar a un investigador independiente calificado para que realice las investigaciones de la Arquidiócesis de Oklahoma City sobre imputaciones de abuso sexual de menores. Recomendamos que la Arquidiócesis de Oklahoma City utilice los servicios de un investigador calificado, experimentado e independiente para investigar las imputaciones de abuso sexual de menores denunciadas a la Arquidiócesis, y que este investigador informe directamente a la Junta de revisión. Creemos que un investigador independiente, particularmente uno que no sea miembro de la Iglesia Católica, brindará a la Arquidiócesis y al público general la seguridad de que cualquier investigación está, así, mejor aislada de la posibilidad o la percepción de manipulación y prejuicio personal. Notamos que hicimos esta recomendación informalmente a la Arquidiócesis hace muchos meses y esta la aceptó sin dudarla. Durante los últimos meses, un detective retirado de la policía de Oklahoma City, de la División de Delitos Sexuales, con décadas de experiencia, ha estado investigando las imputaciones de abuso sexual de menores. Nuestra firma ha identificado acusaciones adicionales de abuso que ocurrieron hace años, con la excepción de uno, que supuestamente ocurrió a principios de la década del 2000. Le hemos pedido al investigador independiente que investigue estas acusaciones y continuaremos supervisando y asistiendo con estas investigaciones pendientes y con cualquier imputación futura hasta que se completen y se informen todas a la Junta de revisión para que se tomen las medidas pertinentes, si así correspondiera.

6. Toda prueba desarrollada durante una investigación de imputaciones de abuso sexual de menores debe presentarse a la Junta de revisión antes de que esta haga una recomendación o brinde sus conclusiones al arzobispo. Una vez que el investigador independiente ha concluido la investigación y está listo para dar a la Junta de revisión un informe basado en los hechos, recomendamos que todas las pruebas recabadas durante la investigación por el investigador, así como todas las demás fuentes, sean proporcionadas a la Junta de revisión antes de que esta haga cualquier recomendación o brinde sus conclusiones al arzobispo. Observamos que, antes de 2018, parece que a la Junta de revisión a menudo no se le proporcionó información significativa (y mucho menos pruebas reales) sobre muchas de las imputaciones de abuso sexual de menores y, por lo tanto, sirvió de poca ayuda al arzobispo o no tuvo absolutamente ninguna participación. Esto es directamente contrario al propósito de la Junta de revisión según lo contemplado en el Estatuto y las Normas básicas. Además, se debe permitir a la Junta de revisión que solicite una investigación adicional antes de emitir una recomendación o conclusión al arzobispo.

7. La Arquidiócesis de Oklahoma City debe aclarar en sus políticas y procedimientos si investigará las imputaciones de abuso sexual de menores cuando la presunta víctima ahora es un adulto y el sacerdote acusado ya ha fallecido.

Hemos notado que, en el pasado, aparte de enviar una carta confirmando la recepción de las imputaciones realizadas, la Arquidiócesis de Oklahoma City en general no tomó ninguna medida al recibir una denuncia de abuso sexual de un menor si la presunta víctima era un adulto y el sacerdote acusado había fallecido al momento en que se hace la denuncia. Las políticas y procedimientos arquidiocesanos actuales no abordan claramente lo que la Arquidiócesis debe hacer en esta situación, y reconocemos que podría ser bastante difícil investigar adecuadamente tales denuncias cuando el acusado ha fallecido. La Arquidiócesis de Oklahoma City debe aclarar en sus políticas y procedimientos si investigará las imputaciones de abuso sexual de menores cuando la presunta víctima ahora es un adulto y el sacerdote acusado ya ha fallecido. Recomendamos que la Arquidiócesis de Oklahoma City aclare sus políticas y procedimientos para dejar bien establecido si investigará las denuncias de abuso sexual de menores cuando la presunta víctima ahora es adulta y el sacerdote acusado ya ha fallecido.

8. Realizar capacitaciones sobre todas las políticas y procedimientos nuevos y actualizados relacionados con el abuso sexual de menores. Entendemos que la Arquidiócesis ya brinda una amplia capacitación al personal sobre políticas y procedimientos con respecto a las imputaciones de abuso sexual de menores. En la medida en que la Arquidiócesis implemente nuevas políticas y procedimientos o actualice los existentes, la Arquidiócesis debe proporcionar al personal capacitación suficiente para garantizar que se observen estas políticas y procedimientos.

9. Comunicar y publicitar todas las acciones relacionadas con la jubilación, suspensión, expulsión o laicización de sacerdotes, si alguno de los fundamentos para tal jubilación, suspensión, expulsión o laicización está relacionado con imputaciones de abuso sexual de menores. En la historia reciente, ha habido casos limitados en los que la Arquidiócesis de Oklahoma City jubiló, suspendió, expulsó o laicizó a un sacerdote debido a imputaciones de abuso sexual de un menor. Sin embargo, cuando lo ha hecho, la Arquidiócesis de Oklahoma City ha anunciado públicamente sus acciones. En años anteriores, la Arquidiócesis no hacía públicas sus decisiones de jubilar, suspender, expulsar o laicizar sacerdotes acusados de abuso sexual de menores. Por ejemplo, aparte de la existencia de una demanda presentada públicamente contra él por el Sr. Schovanec, al padre Imming se le permitió retirarse a Kansas sin ningún anuncio público sobre las acusaciones hechas en su contra. Incluso cuando el padre Imming fue laicizado, esto fue reportado en Kansas por la Arquidiócesis de la Ciudad de Kansas, pero no fue publicitado de ninguna manera por la Arquidiócesis de Oklahoma City. Al padre Prather se le permitió continuar su ministerio en las diócesis de Richmond y Joliet sin ningún anuncio público de las acusaciones formuladas contra él. En el caso del padre Rapp, no hubo ningún anuncio público en 1994 cuando se le informó al arzobispo Beltrán de la demanda civil que se había presentado contra el P Rapp. El fracaso de la Arquidiócesis en comunicar públicamente la remoción y laicización del padre Zoeller trajo como resultado que este continuara

participación como voluntario en una parroquia en el área metropolitana de Oklahoma City. El padre [eliminado] aparentemente ha estado en un ministerio restringido que prohíbe el contacto no supervisado con menores, pero nadie ha sido informado de manera significativa de esta decisión.

La responsabilidad que tiene y la protección de los menores que debe llevar a cabo, hacen necesario que la Arquidiócesis sea transparente en sus acciones para que el público esté al tanto de todas ellas. Aunque creemos que la Arquidiócesis lo está haciendo actualmente con las acciones que está realizando, recomendamos que la Arquidiócesis continúe comunicándose y anunciando públicamente todas las acciones que tome en relación con la jubilación, suspensión, expulsión o laicización de sacerdotes si alguna razón para tal jubilación, suspensión, expulsión o laicización está relacionada con imputaciones de abuso sexual de menores. Dicha transparencia es consistente con el Estatuto, que establece que «las diócesis/eparquías deben mostrar apertura y ser transparentes en su comunicación con el público respecto al abuso sexual de menores cometido por clérigos. . . Esta práctica debe observarse especialmente al proporcionarles información a la comunidad parroquial y a otras comunidades eclesiales afectadas directamente por el abuso sexual de un menor». También recomendamos que la Arquidiócesis divulgue públicamente la identidad de las personas cuando dicha divulgación no se realizó en el pasado, por ejemplo, como en el caso de la decisión de restringir el ministerio del padre [eliminado], prohibiéndole tener contacto sin supervisión con menores.

10. Disciplinar al personal de la Arquidiócesis que retiene información sobre el abuso sexual de menores. Ha habido casos en los que un sacerdote tenía información sobre un comportamiento preocupante relacionado con un menor por parte de un compañero sacerdote, pero no brindaba esa información a los funcionarios de la Arquidiócesis. El personal de la Arquidiócesis ya está obligado por la ley y por el Código de conducta de la Arquidiócesis a reportar dicha información a las autoridades civiles y a los funcionarios de la Arquidiócesis correspondientes. La Arquidiócesis debe tomar medidas disciplinarias contra el personal que no brinda dicha información. Somos conscientes de que algunos pueden tener reservas sobre la difusión de «rumores» o «chismes» cuando no tienen conocimiento personal de supuestos eventos. Si bien apreciamos estas preocupaciones, la información de segunda mano también debe ser suministrada a quien corresponda. El Código de conducta establece la obligatoriedad de informar «[c]uando hay una indicación **o sospecha** de abuso sexual de un menor». Código de conducta modificado y actualizado de 2014 (énfasis incluido en el original). Además, brindar tal información puede conducir a pruebas importantes respecto de otros delitos, lo que puede detener un abuso que estuviera ocurriendo o incluso evitar que ocurra tal abuso. Las personas con conocimiento de segunda mano no pueden asumir que aquellos con conocimiento directo realizarán la denuncia.

11. Mejorar las políticas y los procedimientos para examinar a los sacerdotes externos que solicitan asignaciones en la Arquidiócesis de Oklahoma City.

La Arquidiócesis debería mejorar sus políticas y procedimientos para examinar mejor a los sacerdotes ingresantes, lo que incluye realizar verificaciones de antecedentes más exhaustivas y llevar a cabo la diligencia debida adicional respecto de los sacerdotes con historias inquietantes de comportamientos preocupantes u otras señales de alarma.

APÉNDICE

<u>Año</u>	<u>Obispo/Arzobispo</u>
1960-1971	Victor J. Reed
1972-1977	John R. Quinn
1978-1992	Charles A. Salatka
1993-2010	Eusebius J. Beltran
2011-2018	Paul S. Coakley

<u>Año</u>	<u>Vicario general</u>
1960-1961	Reverendísimo Mons. Gustave Depreitere
1962	Ninguno enumerado
1963-1964	Reverendísimo Mons. Sylvester F. Luecke
1965	Ninguno enumerado
1966-1971	Rev. Mons. Raymond F. Harkin ¹⁵
1972	Ninguno enumerado
1973-1977	Rev. Philip Bryce
1978-1984	Ninguno enumerado
1985-1992	Rev. John A Steichen, Canciller; Rev. James A. Kastner, Moderador de la Curia
1993	Ninguno enumerado
1994-1996	Rev. John A. Steichen
1997	Ninguno enumerado
1998-2002	Revs. James A. Kastner y Edward J. Weisenburger
2003-2012	Rev. Msgr. Edward J. Weisenburger
2013-2018	Rev. William L. Novak

¹⁵ [El cargo del Reverendísimo Mons. Raymond F. Harkin cambió a Rev. Mons. Raymond F. Harkin en 1970](#)

<u>Año</u>	<u>Canciller</u>
1960-1967	Rev. William C. Garthoeffner ¹⁶
1968-1974	Rev. Charles H. Schettler
1975	Rev. David L. Jones
1976-1980	Rev. W.M. Eichhoff
1981-2004	Rev. John A. Steichen
2005-julio 2017	Sra. Loutitia D. Eason
Julio 2017 – diciembre 2017	Justin Byrne
2018-actualidad	Michael A. Scaperlanda

¹⁶ [El cargo del Muy Rev. William C. Garthoeffner cambió a Rev. William C. Garthoeffner en 1965](#)